

NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 30º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-24521-2015
CARATULADO : LSPEZ / INSTITUTO OFTALMOLOGICO
LIMITADA

Santiago, trece de Septiembre de dos mil dieciocho

Advirtiendo el tribunal un error en la foliación del expediente, corriójase desde fojas 838, manteniéndose la numeración errada entre paréntesis.

VISTOS:

A fojas 1 comparece don **Patricio Eduardo López Cid**, factor de comercio, domiciliado en Avenida Vespucio Sur N° 406, departamento N° 21, comuna de Las Condes, quien deduce demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de **Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada**, ambas representadas por doña Marcia Luz Millas Ovalle, ignora profesión u oficio, domiciliada en Luis Thayer Ojeda N° 0180, 2° piso, oficinas 208 y 209, comuna de Providencia, en Lo Fontecilla N° 101, Torre A, 5° piso, oficina 514, comuna de Las Condes, y en Avenida Pajaritos N° 2481, comuna de Maipú; y también en contra de don **Ricardo Simón Bittelman Saporta** y doña **Marcia Luz Millas Ovalle**, ambos domiciliados en calle Arturo Matte Larraín N° 2269, comuna de Las Condes, en base a los siguientes antecedentes de hecho y de derecho.

I. Los hechos.

1. Antecedentes previos

Relata que a mediados del año 2001, comenzó a trabajar media jornada para el médico Ricardo Bittelman Saporta, casado con Marcia Millas Ovalle -hija de la hermana de su cónyuge Elsa Angélica Ovalle Reyes-, en la realización de algunas tareas administrativas y



convenios con empresas e instituciones públicas y privadas para la atención oftalmológica.

Afirma que, a esa fecha, el Dr. Bittelman tenía en funcionamiento tres consultas médicas en las comunas de Providencia, Maipú y La Florida. Al poco tiempo, y debido a su buena gestión, el número de pacientes comenzó a aumentar, razón por la que fue contratado para trabajar a jornada completa y que permitió además la apertura de nuevos Centros Oftalmológicos en las comunas de Independencia, Melipilla, Las Condes, San Antonio (V Región) y Colina, además de la construcción de un pabellón de cirugías junto al centro de Providencia y la formación de un taller de montaje de lentes ópticos en el segundo piso del centro de Las Condes.

Hace notar que en solo cuatro años, con su nueva gestión, Bittelman duplicó la cantidad de centros en funcionamiento, generando importantes ingresos que le permitieron financiar la compra de los inmuebles en los que funcionaban estos nuevos centros. También su vida personal comenzaba a mejorar en el aspecto económico, permitiéndose la compra de dos avionetas, lujosos automóviles, la instalación de un taller de restauración de vehículos antiguos -uno de sus tantos hobbies- en un terreno aledaño al Centro Oftalmológico de La Florida, entre otras cosas.

Sostiene que el año 2005, a pesar que el crecimiento de las empresas del Dr. Bittelman era exponencial, comenzó a sentir ciertas preocupaciones por situaciones de las que fue tomando conocimiento y le produjeron desconfianza, lo que fue deteriorando el vínculo laboral.

Precisa que se comentaba que Bittelman no tendría la especialidad de oftalmólogo, ello a pesar de la gran cantidad de diplomas que se exhibían en la recepción de cada Centro Oftalmológico, lo que se comprobó era cierto, a tal punto que FONASA le canceló el convenio para la atención de pacientes. Pero aún más grave, fueron los deficientes resultados en muchas de las operaciones oculares que realizó Bittelman, que incluso conllevaron la pérdida del



globo ocular de algunas de las personas sometidas a procedimiento y el inicio de acciones criminales en contra del demandado por mala praxis y estafa, en las que arribó a acuerdo reparatorios luego de sendas formalizaciones llevadas a cabo por la Fiscalía de Ñuñoa.

2. Término de la relación laboral

Señala que debido a lo anterior, le solicitó a Bittelman su salida del cargo, de manera que con fecha 14 de noviembre del 2005 en la Notaría de don Raúl Undurraga Lasos, firmaron un completo y total finiquito de sus servicios, en el que se incluyeron las siguientes cláusulas:

“TERCERO: Con fecha 7 de Octubre de 2005, las partes, de común acuerdo han decidido poner término a los servicios profesionales prestados por don Patricio López Cid a las sociedades Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada y al doctor Ricardo Bittelman Saporta, y en este acto se paga por concepto de indemnización la suma única y total de veintitrés millones doscientos cincuenta mil pesos (\$23.250.000) mediante cheque número 0342033 del Banco BCI, declarando don Patricio López Cid recibir la suma de \$23.250.000 a su entera satisfacción.

CUARTO: El acuerdo de pago que da cuenta la cláusula precedente, se efectúa con el ánimo de finiquitar cualquier diferencia que pudiera existir a favor de don Patricio López Cid y/o de las sociedades Instituto Oftalmológico Limitada, Centro Médico Aurora Limitada y/o el doctor Ricardo Bittelman Saporta, de cualquier origen, circunstancia o situación y que tuviese directa o indirecta relación con la relación profesional que por este acto se finiquita. Así, se da solución íntegra, total y definitiva a toda eventual controversia emanada de la relación profesional y se precave cualquier juicio que directa o indirectamente pueda derivar de la relación que existió entre las partes, de los servicios prestados por don Patricio López Cid a las sociedades Instituto Oftalmológico Limitada, Centro Médico Aurora Limitada y/o Ricardo Bittelman Saporta, por la terminación de los



servicios o cualquier otra causa relacionada con esta relación de trabajo.

SEXTO: En mérito de este finiquito y del pago que en él se da cuenta, las partes, desde ya, renuncian recíprocamente a cualquier acción de cualquier naturaleza civil y laboral, y otra pertinente que haya o pudiere haber emanado de la relación contractual que los ligó o que pudiere derivarse con motivo u ocasión de ella y que les pudiere corresponder indistintamente a las partes”.

Denota que ninguna de las cláusulas del documento, firmado de común acuerdo por las partes, se le prohíbe seguir con el giro de las sociedades y se da por finiquitada cualquier diferencia de dinero que pudiese generarse a propósito de su cargo, en favor de su ex empleador o en favor de él mismo.

Destaca que ambas partes firmaron dicho documento, renunciando a toda clase de acciones tanto en el ámbito civil como laboral, lo que muestra la primera incongruencia con todas las acciones presentadas en su contra, porque quien sospecha de su ex empleado -según lo que se declaró en los juicios- no paga a dicho trabajador una cuantiosa indemnización y menos renuncia a acciones en su contra.

3. Centros Médicos Darsalud

Indica que una vez finiquitada la relación con Bittelman, se dedicó a desarrollar un proyecto para la instalación de centros médicos de atención ambulatoria en diferentes comunas de Santiago y provincia, los que tendrían consultas de todas las especialidades médicas, llegando a ofrecer la atención en 35 especialidades distintas, dentro de las cuales se encontraban imagenología, atención dental y oftalmología.

Asevera que fue así como los días 8 y 9 de febrero del año 2006, firmó en la Notaría de don César Sánchez García las escrituras de constitución de las sociedades Darsalud Limitada, Darvision Limitada e Inversiones Darsalud S.A., participando como socio junto a otras dos



personas, además de ser contratado como Gerente General de las empresas.

Señala que el proyecto Darsalud contaba con un fuerte respaldo económico e instaló su primer Centro Médico en el Puerto de San Antonio (V Región) en Avda. Ramón Barros Luco N° 2047. Luego, inició sus operaciones el Centro Médico de calle Bandera N° 101, en el centro de Santiago y finalmente lo hizo el Centro Médico de Providencia, ubicado en calle Manuel Montt N° 163.

Asegura que, una vez puesto en marcha el proyecto y a raíz que sus ex empleadores no pudieron tolerar la competencia, comenzó a recibir molestias, y luego, abiertamente amenazas de parte de Bittelman, pero muy especialmente de su esposa, su sobrina por afinidad Marcia Millas Ovalle, quien asumió la gerencia de las empresas demandadas junto con sus padres y algunos de sus hermanos.

Precisa que estas molestias y amenazas se materializaron a través de correos electrónicos enviados a familiares, amigos, gerentes y accionistas de las Empresas Darsalud. Algunos de dichos correos venían firmados y otros eran anónimos, pero todos estaban redactados en los mismos términos.

Alega que, no contentándose con lo anterior, que perturbaba su privacidad y tranquilidad y la de las personas que le rodeaban, Bittelman y la señora Millas, junto con sus familiares, con ocasión de la inauguración del Centro Médico de San Antonio -el cual por su tamaño y ubicación se había convertido en un hito en la comuna- organizaron una funa en su contra y de las empresas que administraba, contratando personas que asistieron al evento y repartieron volantes que le injuriaban en el siguiente tenor: *“Patricio López es un empresario en quiebra y un estafador. ¿Usted dejaría su salud en sus manos?”*

Continúa relatando que, a lo anterior, le siguieron declaraciones injuriosas en la prensa, radio, televisión y otros medios de comunicación, en contra de las Empresas Darsalud y su persona, que



le causaron profundo malestar, incomodidad e inseguridad; encontrándose mucha de la información falsa propagada aún en medios sociales (especialmente internet).

4. Uso y abuso de la justicia para fines personales

Sostiene que en abril de 2006, y en vista que nada detenía el fuerte crecimiento del proyecto Darsalud, las agresiones pasaron al plano judicial al presentarse en su contra tres querellas criminales por diferentes delitos:

a) En el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 2259-2006, por delitos informáticos, la que fue sobreseída definitivamente por la I. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 20 de agosto del 2007.

b) En el 32° Juzgado del Crimen, Rol 82-2006, por estafa y otras defraudaciones.

c) En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, RIT 3240-2006, por abuso de firma en blanco, la que se acumuló a la anterior y en la cual fue absuelto definitivamente con fecha 8 de enero del año 2014 por la E. Corte Suprema (Rol 14839-2013).

Advierte que es evidente el uso y abuso que han hecho de la justicia, Bittelman Saporta y Millas Ovalle, quienes en beneficio personal han utilizado como herramienta las empresas que representan. Cada vez que una acción no prosperaba, interponían una nueva querella basada en los mismos hechos, pero distinto tipo penal, adecuándolo para que se ajustara a sus intereses: verle perjudicado, para así no poder continuar con el proyecto Darsalud.

Hace presente que es notoria la molestia que les provocó que después de haber terminado el vínculo laboral con ellos, iniciara un proyecto de centros médicos que resultó exitoso, cuestión que queda de manifiesto en el texto de las querellas y escritos presentados en las causas individualizadas anteriormente, por ejemplo:

a) En la querella por delitos informáticos presentada ante el 4° Juzgado de Garantía, RIT 2259-2006, dice textualmente: *“Posteriormente, en fechas recientes, tuvimos conocimiento que dicho sujeto (Patricio López Cid) se encontraba en negociaciones con otros*



familiares y posibles socios capitalistas, para formar una empresa de similares características a la nuestra, dedicada también a proveer servicios médicos” (página 5, párrafo N° 10).

b) En escrito presentado por el abogado Jorge Gálvez Santibáñez, en la misma querella del 4° Juzgado de Garantía, dice: *“Que por el presente escrito, vengo en solicitar las siguientes diligencias:*

1.- Se oficie a la Ilustre Municipalidad de San Antonio, para que remita copia de todos los antecedentes presentados por el querellado (Patricio López Cid) para obtener los permisos municipales para operar un centro médico de nombre “DARSALUD” que entre otros, da servicios de oftalmología y que fue edificado recientemente a pocos metros del centro médico de mi representada (el Dr. Bittelman y Señora) en dicha ciudad”.

Alega que, debido a los procesos iniciados, estuvo afecto a un proceso penal del antiguo sistema durante casi ocho años, encargado reo en dos oportunidades, detenido por funcionarios de la PDI para luego permanecer en prisión por tres días y, además, se le embargaron bienes por un valor superior a \$31.000.000.-, todo esto por delitos inexistentes.

Asegura que el perjuicio patrimonial aún continúa. En efecto, en el mes de julio de 2010, se le embargaron tres marcas comerciales que estaban en proceso de transferencia, valoradas en \$31.350.000 según acuerdo firmado con fecha 23 de diciembre del 2010 en la Notaría de don Ricardo Reveco Hormazaval, lo cual le ha impedido cobrar dicha suma.

Añade que en dichos procesos se incorporaron pruebas evidentemente falsas para sustentar querellas que, sin lugar a dudas, tenían por finalidad entorpecer su labor profesional, como por ejemplo:

a) Informe o auditoría inexistente.

Explica que el fundamento de la querella interpuesta en el 32° Juzgado del Crimen, consistió única y exclusivamente en un supuesto informe confeccionado por el contador auditor Enrique Aldunate



Urrutia (antiguo asesor del padre de la querellante y demandada de autos Marcia Millas Ovalle), el que nunca fue proporcionado por los querellantes al tribunal ni a los peritos designados por éste. Es decir, nunca fue parte del expediente.

Precisa que solo declaró su autor, Enrique Aldunate, quien le asignó responsabilidades que no tenía dentro de las empresas, como:

- No anotar la información de los cheques girados en las chequeras bancarias, en circunstancias que las únicas personas que giraban sobre las cuentas corrientes de las empresas eran Bittelman y su padre, Aarón Bittelman.

- La falta de conciliaciones bancarias, detalle de las cuentas por cobrar y por pagar, flujos de caja, presupuestos operacionales y otros, en circunstancias que la contabilidad de todas las empresas era llevada en forma externa por contadores que recibían instrucciones directas del Dr. Bittelman.

Indica que, por otro lado, el sr. Aldunate dijo haber iniciado su asesoría a principios del año 2005. Al respecto, teniendo en consideración que trabajó para el Dr. Bittelman hasta el 7 de octubre de ese año, no se explica por qué en el finiquito que suscribieron de común acuerdo, se le paga una cuantiosa indemnización a un ex trabajador sospechoso de actitudes delictuales, y menos por qué renuncian a acciones en el ámbito civil o laboral. Lo lógico hubiera sido que, si existió disconformidad con la forma en que realizaba su trabajo, se le hubiera solicitado información para aclararlo. Sin embargo, en todos esos meses nunca se le cuestionó personalmente la manera de hacer su trabajo.

b) Negativa a la exhibición de documentos.

Comenta que, durante todo el proceso, los querellantes se negaron a exhibir o proporcionar al tribunal la documentación contable necesaria para respaldar las imputaciones de las que fue víctima, cuestión que los peritos, en sus informes, dieron a conocer al tribunal.



Afirma que en junio de 2007, se negaron a proporcionar dicha información al perito Iván Cifuentes Concha, designado por el tribunal, quien en la página 2 de su informe pericial contable, señaló:

“Para el efecto, mediante el procedimiento de auditoría denominado circularización informe, la poca seriedad demostrada por la querellante de autos, doña Marcia Luz Millas Ovalle, como así también por el actual administrador de la empresa, de nombre Cristian Soto, con quienes el infrascrito sostuvo una serie de contactos telefónicos a fin de requerirles la entrega de la documentación relacionada con los hechos denunciados, respecto de la cual se comprometieron en diversas oportunidades hacerla llegar a nuestras oficinas, entrega que finalmente no fue materializada por la parte querellante, demostrando con ello una falta de respeto para con la labor profesional de este perito, como así también con el tribunal de S.S. que investiga hechos que esta misma parte denunció”.

Denota que el Informe pericial contable N° 290, evacuado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones, señaló la misma situación respecto de la querella de estafa y administración fraudulenta, indicándose a fojas 5 en el punto “Falta de información”:

“A partir de los fundamentos señalados en la querella se pudo observar que: (...)

- *“No se encuentra inserto en el expediente el Informe de Auditoría, base de la querella y también donde se dan a conocer las irregularidades detectadas”.*

- *“No se indican las numerosas irregularidades detectadas en la auditoría, base de la que fueron cometidas por el querellado”.*

- *“No se señalan los cheques con los que Patricio López Cid, le pagó a Moyra López Ramírez durante 15 meses seguidos sus honorarios”.*



- *“Respecto a la cita ‘una serie de irregularidades’, no se tiene información de cuáles son las otras irregularidades cometidas”.*

- *“No se contó con el Informe de auditoría emitido por Aldunate & Asociados Auditores Consultores, único elemento que fue utilizado de base para la querella”.*

- *“No se aportó la contabilidad de la empresa para efectuar la verificación de lo señalado por los auditores”.*

- *“No se revelan aquellas situaciones que demuestran la forma en que el querellado habría administrado las sociedades y participado en los hechos denunciados (...)”.*

c) Falta de prueba en relación al fundamento de las querellas. Indica que no existió prueba alguna que sustentara las querellas en su contra, lo que fue declarado en los informes periciales.

Refiere que el perito designado por el tribunal, Iván Cifuentes Concha, expresó en su Informe Pericial Contable que:

- Sobre el análisis de la querella: *“Cabe precisar que esta misma información (libro de honorarios y certificado de honorarios) respecto del año 2004, no fueron agregados al proceso ni tampoco proporcionados al perito”* (página 31).

- En cuanto al análisis del perjuicio sufrido por la actora: *“El infrascrito se vio impedido de acreditar la posible existencia de un perjuicio cometido en desmedro económico de la querellante, por carecer principalmente, de los antecedentes contables y extracontables requeridos en su oportunidad a Marcia Luz Millas Ovalle”* (página 34).

Reseña asimismo, que el Informe Pericial Contable N° 290 del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones, señaló:



- Al referirse a los antecedentes de la querella: *“No se tienen elementos de prueba que sustenten la querella”* (página 11).

- Respecto al análisis de la querella: *“(…) el querellante no aportó ninguna prueba documental de dichas erogaciones”* (página 13).

- Se concluyó: *“La falta de elementos de prueba documental que permita verificar técnicamente la situación descrita en la querella, principalmente respecto de los pagos efectuados por parte del querellado Patricio López Cid a su sobrina Moyra López Ramírez, elementos que la parte querellante debió aportar (...) no se aportaron medios de prueba que dejen de manifiesto un actuar doloso de este (...) no se adjuntaron pruebas documentales que permitan avalar la ponencia de la querella”*.

Agrega que en el Informe Policial N° 4398 emitido por la Policía de Investigaciones de Chile, se concluyó de la investigación criminalística que: *“Cabe destacar que en época se presentaron en juicio declaraciones de testigos, quienes atestiguaron en contra del señor López Cid, de los cuales tres de ellos, habrían faltado a la verdad, dando falso testimonio, como también en declaraciones policiales prestadas ante la PDI. Dichos relatos corresponden a los de Enrique Aldunate Urrutia, Susana Alarcón Silva y Cristian Rodríguez-Cano Bezanilla”*.

Sostiene que todo lo anterior conllevó a que de los antecedentes agregados al sumario y plenario, se acreditara con absoluta certeza la veracidad de la Rendición de Gastos entregada al Dr. Bittelman cuando regresó de sus vacaciones a fines de febrero de 2005, copia de la cual fue entregada al tribunal, lo que finalmente terminó en su absolución.

5. Sentencia absolutoria



Relata que con fecha 5 de junio del año 2006, Marcia Luz Millas Ovalle en representación de “Instituto Oftalmológico Limitada” y “Centro Médico Aurora Limitada”, presentó una querrella en su contra por los supuestos delitos de estafas y otras defraudaciones que el suscrito habría cometido por la suma de \$35.555.554.-, iniciándose así la causa Rol N° 82-2006 del antiguo 32° Juzgado del Crimen de Santiago, hoy 34° Juzgado del Crimen, que constó de 1500 fojas y duró casi ocho años.

Señala que, posteriormente, a la suma anterior se adicionaron \$11.111.110.- lo que significó una imputación de estafas y defraudaciones por \$46.666.664.-

Explica que en abril de 2007, se acumuló a esta causa la querrella presentada en el RIT N° 3240-2006, RUC N° 0610006019-K, del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por abuso de firma en blanco por la suma de \$7.000.000.-, interpuesta por Ricardo Bittelman Saporta y Marcia Luz Millas Ovalle, esta última en representación de “Instituto Oftalmológico Limitada” y “Centro Médico Aurora Limitada”, por lo que la cifra total denunciada ascendió a \$53.666.664.-

Añade que la complejidad de las acusaciones de las que fue víctima y la persistencia de los abogados de la parte querellante, llevaron al tribunal de primera instancia a ordenar dos peritajes: el primero a cargo del perito Iván Cifuentes Concha y el segundo a cargo del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI. Y, además, a pesar de su costo, pero seguro de su inocencia, encargó un tercer peritaje al perito judicial civil de la Corte de Apelaciones de Santiago, Carlos Alberto Correa Cruzat.

Indica que, por diversas apelaciones de las partes, la causa subió en nueve oportunidades a la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en los roles 1027-2008, 1590-2009, 2043-2010, 2491-2010, 3194-2010, 365-2011, 1259-2011, 1643-2011 y 1549-2013. Además, se vio en dos oportunidades en la E. Corte Suprema, en roles 5441-2010 y 14839-2013.



Afirma que, finalmente, estos autos terminaron en sentencia absolutoria, confirmada el 14 de octubre de 2013 por la Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo Rol N° 1549-2013. Luego, con fecha 8 de enero de 2014 la Corte Suprema declaró inadmisibile el recurso de casación, en la causa Rol N° 14839-2014. El cúmplase se dictó con fecha 15 de enero de 2014.

Precisa que en el fallo de fecha 2 de agosto del 2013 se demostró su total y absoluta inocencia. De su lectura se desprende que el actuar de los demandados no fue impulsado por su derecho a la acción y al interés por la observancia del derecho, sino que fue imprudentemente temeraria, de mala fe, abusiva.

Cita parte de la sentencia absolutoria, como sigue:

“2° (...) Sobre el particular, no hay prueba de que se haya abusado de la firma puesta por Ricardo Bittelman en los dos cheques de que se trata, entregándolos con sus menciones en blanco a López Cid. Se trataba, por lo demás, como quedó esclarecido, de una operativa más o menos corriente, dado el grado de confianza que existía entre ellos. Tampoco se probó que López usara en su propio beneficio los dineros, y por ende, que la empresa a la que pertenecía la respectiva cuenta corriente, haya sufrido el perjuicio correlativo.

En suma, la conclusión que alcanza el tribunal es que el presente ni siquiera es un problema de índole penal, sino que tan solo civil, y lo que se debió hacer en su oportunidad fue solicitar una rendición de cuentas a López Cid.

Lo singular de este proceso se encuentra en la circunstancia que ya una vez sometido a proceso López Cid, en relación con los dos cheques de autos, como consta a fojas 356, y no obstante que la Corte de Apelaciones de esta ciudad, a fs 370, revocó y dejó sin efecto dicha encargatoria de reo, se insistiera en ella posteriormente, aun cuando no había nuevos antecedentes de cargo, sino por el contrario una de descargo fundamental como lo es la pericia contable elaborada por la Policía de Investigaciones de Chile”.



“4° (...) Sin perjuicio que al haberse llegado a la conclusión de que en la especie corresponde absolver, por no haberse comprobado la perpetración del delito materia de la acusación, hay que destacar la circunstancia que el acusado López ha reconocido que recibió los dos cheques, y que los depositó en la cuenta corriente, mas ha dicho que tales dineros los utilizó en beneficio de las empresas en que trabajaba. Tal circunstancia, como se ha visto, se encuentra comprobada en autos, y corresponde al modo como verosímilmente ocurrieron los hechos, en atención a los datos que arroja el proceso para poder apreciar los antecedentes, el carácter de veracidad del procesado y la exactitud de su exposición, como quedó previamente expuesto, todo lo cual corrobora la determinación de absolverlo.

5° Que, mediante la presentación de fs. 1102 don Cristian Ramírez Tagle contesta la acusación fiscal y adhesión a la misma, haciendo presente el parentesco entre la querellante Marcia Luz Millas Ovalle y el procesado, por lo que afirma que detrás de estos hechos existe un conflicto familiar que se origina a partir del momento en el que López, en el mes de septiembre del 2005, después de haber trabajado más de 4 años para las empresas Bittelman negocia su alejamiento, el que se perfecciona a través de la firma del finiquito el 14 de noviembre del mismo año y que se motivó en las razones que explica (...) El tribunal concuerda plenamente con el planteamiento formulado, en cuanto a la inexistencia del ilícito penal y a la necesidad de absolver al acusado, por lo que obviará pronunciarse sobre el resto de las alegaciones y peticiones formuladas por la defensa (...).”

II. De la responsabilidad alegada y sus fundamentos

Aclara que la responsabilidad civil de los demandados se enmarca en la responsabilidad extracontractual o aquiliana tratada en el título XXXV del Libro IV del Código Civil. En efecto, el daño que le han causado con su actuar cumple con cada uno de los requisitos previstos y sancionados por las normas de aquel cuerpo normativo.

Invoca los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, y sostiene que el abuso de un derecho es un ilícito civil.



Expone que el derecho de acción, si bien es un derecho subjetivo, debe satisfacer ciertos parámetros de conducta. De este modo, por la sola aplicación de las reglas generales sobre responsabilidad extracontractual, resulta obligado a indemnizar quien en ejercicio abusivo de su derecho daña a otro, sea que se haya actuado con dolo, sea que simplemente haya incurrido en notoria desconsideración de un deber implícito de cuidado (culpa).

Hace presente que la doctrina mayoritaria en nuestro país, que cuenta entre sus autores a los profesores Arturo Alessandri Rodríguez, Fernando Fueyo Laneri y Enrique Barros Bourie, aceptan el abuso de derecho como fuente de responsabilidad extracontractual. El primero, al entender que *“se genera cuando su titular lo ejerce dolosa o culpablemente, con la intención de dañar o sin la diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios”* (“De la responsabilidad civil extracontractual”. Ed. Jurídica); el segundo, en su proposición de tratar la materia en la Parte General o Título Preliminar del Código Civil, de modo que *“los derechos subjetivos, públicos y privados, no podrán ejercitarse abusivamente, sino conforme a las exigencias de la buena fe, el orden público y las buenas costumbres imperantes...”* (“Instituciones de Derecho Civil moderno”); y el tercero, que lo considera *“el límite interno de las pretensiones que el derecho invocado confiere a su titular”* (“Tratado de responsabilidad extracontractual”. Ed. Jurídica de Chile; Corte de Apelaciones de Santiago, 30 de julio de 2007, Rol 7804-2007).

Denota que la doctrina del abuso del derecho asume que el ejercicio de un derecho puede ser ilícito, aunque el titular actúe dentro de los límites externos que establece el respectivo ordenamiento normativo, y sólo puede ser invocada cuando el comportamiento del titular atenta contra estándares mínimos de conducta. Así, cuando el ejercicio del derecho resulta abusivo, usualmente será también culpable o doloso en los términos exigidos por la ley para que proceda la responsabilidad extracontractual por los daños causados a terceros.



Señala que el ejercicio abusivo del derecho no es sino una especie de ilícito civil, lo que se ha visto reflejado también en la jurisprudencia. En efecto, se ha fallado que *“el ejercicio de un derecho, si de él deriva un daño mediante culpa o dolo, se transforma en la comisión de un delito o cuasidelito civil que, como fuente de obligaciones, se rige por los preceptos del Título XXXV del Libro IV del Código Civil”* (Corte de Apelaciones de Santiago, 27 de julio de 1943). También la Corte Suprema se ha pronunciado, señalando: *“Que cualquiera que sea el ámbito de aplicación de la doctrina sobre el abuso del derecho, dolo, culpa o negligencia, irracionalidad en su ejercicio, falta de interés o necesidad legítimos, intención del agente en perjudicar, o con desvío de los fines de la institución o para los que fue concebida e incluso, aplicado a procedimientos judiciales, es evidente que, de parte del agente causante del mal, debe existir un ánimo manifiesto de perjudicar o una evidente falta de interés o de necesidad de lo que promueva o un actuar motivado por el afán de causar un perjuicio a su contraparte o contratante”* (Fallo publicado en la Revista de Derecho y Jurisprudencia, Tomo 89, segunda parte, sección segunda, página 177).

Asegura que el ejercicio temerario y negligente de acciones judiciales, no escapa de aquellos hechos por los cuales las personas deben responder en el caso de dañar a otros. La doctrina se ha pronunciado en este sentido: *“Todo indica que la responsabilidad por acciones judiciales es correlativa a deberes de conducta que tiene un litigante de buena fe. La mala fe se expresa no solo en la conducta maliciosa, sino también en la imprudencia temeraria en el ejercicio de la acción”* (Barros Bourie (2007) “Tratado de Responsabilidad Civil Extracontractual”). La jurisprudencia también ha estimado en este sentido que: *“en nuestro ordenamiento procesal tiene aplicación el principio de probidad o de buena fe, que exige a los contendientes una actuación leal en el uso de expedientes dilatorios o pretensiones infundadas”* (Corte de Apelaciones de Santiago, 2 de noviembre de 1992).



Concluye que, conforme lo estima la doctrina y la jurisprudencia, y en razón de las disposiciones legales citadas, queda establecido que en este tipo de hechos procede la acción de indemnización por responsabilidad extracontractual, por lo que a continuación examinará cada uno de los requisitos establecidos por la ley para que se configure dicha responsabilidad.

1. Hecho dañoso

Narra que los representantes legales de las sociedades Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, don Ricardo Simón Bittelman Saporta y su cónyuge Marcia Luz Millas Ovalle, con el fin de entorpecer su ejercicio profesional y a título de venganza personal -por no soportar que se desempeñara en el ámbito de la salud-, interpusieron una querella por delitos inexistentes, haciendo uso malicioso y abusando del derecho que les confiere la ley para accionar por delitos reales.

Indica que basaron sus aseveraciones en un informe que nunca fue agregado al expediente, no obstante el perito designado por el Tribunal, Iván Cifuentes Concha, lo solicitó de manera reiterada, tal como lo asevera en su Informe Pericial Contable, cuestión que se repitió en el Informe Pericial Contable N° 290 evacuado por el Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones.

Añade que, más aún, reclamaron criminalmente la apropiación de dineros a pesar de haberse celebrado un finiquito en tales términos que jamás respetaron.

Alega que, los querellantes -a pesar de ser sus parientes y tratarse de hechos que según la sentencia absolutoria no contaban con ningún antecedente de veracidad- agotaron todas las instancias que la ley otorga, con el objeto de perjudicarlo, lo que culminó con la sentencia que rechazó por manifiesta falta de fundamento el recurso de casación en el fondo en contra del fallo de alzada que confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia, la que con fecha 15 de enero de 2014 se ordenó cumplir.



Advierte que ante la incertidumbre sobre lo que podían resolver los tribunales, no se configuró el hecho dañoso hasta la dictación de la sentencia absolutoria. Por ello, para efectos de la prescripción, debe considerarse que el hecho dañoso se verificó con el “cúmplase” dictado con fecha 15 de enero del año 2014. En efecto, siendo el daño el resultado de una secuencia de hechos que lo provocaron, el plazo no se cuenta sino desde que esos hechos culminaron.

Refiere que nuestra jurisprudencia ha avalado este razonamiento al precisar que “en cuanto a la prescripción de la acción entablada, cuando el hecho ilícito consta de una serie encadenada de acciones, el plazo se debe contar desde que termina el periodo de ejecución, siguiendo la postura de nuestra doctrina que ha determinado que la prescripción en estos casos debe correr desde que se completa el hecho dañoso con la producción global del daño, los daños secundarios y consecuenciales que se produzcan con posterioridad al cuadrienio del artículo 2332 del Código Civil no serán reclamables, la acción entablada autos se encuentra manifiestamente dentro del plazo por cuanto la situación planteada hay que considerar que el hecho dañoso se puede estimar que se produjo indistintamente al conocer el diagnóstico, y contado el plazo de 4 años a partir de cualquiera de esas fechas, a la data de notificación de la demanda no han transcurrido los plazos legales por lo que solo cabe desestimar la prescripción solicitada en ese sentido” (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 3248-2011, considerando 17°).

2. Culpa

Precisa que en materia extracontractual, se puede definir la culpa como “*la falta de diligencia o cuidado en la ejecución de un hecho, o falta al deber de cuidado y diligencia que toda persona, sea por disposición de la ley o en razón de los estándares generales y comunes admitidos por la sociedad, debe emplear para evitar causar un daño que no se habría producido en caso de haberse respetado dicho deber de cuidado y diligencia*”; y se debe apreciar en abstracto, es decir, “*se ha de comparar, la actitud del agente a la que habría*



tenido en el caso que ocasiona daño una persona prudente expuesta a la misma situación” (Corte de Apelaciones de Santiago, 17 de octubre de 2011, Rol 5404-2010).

Hace presente que, si bien es cierto, todas las personas -por el hecho de ser tales- gozan del derecho a la acción, ello no puede acarrear como consecuencia daños a las personas, especialmente si se actúa con una negligencia de tal envergadura que no admite justificación.

Asegura que, de la sola lectura de la querella interpuesta por los demandados, se puede visualizar una especie de venganza en su contra, que no se justifica por el solo hecho de dedicarse a labores profesionales que aprendió a desarrollar en los cuatro años anteriores a la querella. Si no fuera así, no habría razón de tener que denunciar ante el tribunal que se encontraba en negociaciones con otros familiares y posibles socios capitalistas, para formar una empresa dedicada también a proveer servicios médicos, ni menos tener que oficiar a la Ilustre Municipalidad de San Antonio, para que remitiera copia de todos los antecedentes presentados para obtener los permisos municipales para operar un centro médico de nombre “Darsalud”, especialmente porque dichos antecedentes no tenían nada que ver con el delito que se le imputaba, a saber, abuso de firma en blanco.

Denota que quien sustenta una acción lo debe hacer con un mínimo de responsabilidad, cuestión que no se observó en la conducta del señor Bittelman ni la señora Millas. Ninguna otra explicación puede encontrarse a que el perito designado por el tribunal, señor Iván Cifuentes Concha, en su Informe Pericial Contable, denuncie que: *“la poca seriedad demostrada por la querellante de autos, doña Marcia Luz Millas Ovalle, como así también por el actual administrador de la empresa, de nombre Cristian Soto, con quienes el infrascrito sostuvo una serie de contactos telefónicos a fin de requerirles la entrega de la documentación relacionada con los hechos denunciados, respecto de la cual se comprometieron en diversas oportunidades hacerla llegar a*



nuestras oficinas, entrega que finalmente no fue materializada por la parte querellante, demostrando con ello una falta de respeto para con la labor profesional de este perito, como así también con el tribunal de S.S. que investiga hechos que esta misma parte denunció”.

Añade que, en el mismo tenor se enunció el Informe Pericial Contable N° 290 del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones, ya que:

- No se contó con el Informe de Auditoría emitido por Aldunate & Asociados Auditores Consultores, único elemento que fue utilizado de base para la querella.
- No se aportó la contabilidad de la empresa para efectuar la verificación de lo señalado por los auditores.
- No se revelan aquellas situaciones que demuestran la forma en que el querellado habría administrado las sociedades y participado en los hechos denunciados.

Sostiene que lo anteriormente expuesto, demuestra en el actuar de los demandados, una imprudencia temeraria en la interposición de la acción que culminó con una sentencia absolutoria. Ni siquiera acompañaron aquellos documentos que fundaban su actuar y demostraron, a través de toda la prosecución del juicio, una motivación distinta a aquella que debe fundar la litis.

3. Daño

Precisa que demanda la suma de \$31.000.000.- más reajustes, intereses y costas, que se le embargó en su oportunidad por concepto de marcas y que hasta la actualidad ha estado imposibilitado de cobrar.

Señala que, además, se debe incluir en el daño patrimonial la suma de \$31.000.000.- por concepto de honorarios de abogados que asumieron su defensa, cuestión que consta en escrito presentado el 10 de febrero de 2014 en el expediente del 34° Juzgado del Crimen.



Aclara que, por lo tanto, demanda por daño material la suma de \$62.000.000.- más reajustes, intereses y costas, según el detalle anterior.

Solicita además, la suma de \$50.000.000.- por concepto de lucro cesante correspondiente a la pérdida de una excelente oportunidad de iniciar actividades dentro del área de la gastronomía, asociado con el marido de su hija Catalina. Su yerno, es un exitoso empresario en este rubro y se desempeña en Los Ángeles, California, USA. Él tenía interés en iniciar actividades en nuestro país, por lo que le ofreció ser su socio. Sin embargo, para ello necesitaba viajar con cierta frecuencia a Estados Unidos y conocer en terreno del negocio. Obviamente, al estar encargado reo, ello no fue factible ya que se le prohibía la salida del territorio nacional.

En relación al daño moral, afirma que se manifiesta en la angustia y frustración que ha tenido que sentir, padecido por ocho años que han durado las querellas por delitos inexistentes, como consecuencia del actuar malicioso de los demandantes de estos autos.

Indica que el monto reclamado por daño moral es de \$450.000.000.- el que resulta apropiado y equitativo, y que deben pagar solidariamente los demandados, conforme lo dispone el artículo 2317 del Código Civil.

Agrega que se trata de una compensación por todo el malestar que ha sentido, por los días que tuvo que pasar en prisión, por el dolor de que sus familiares hayan sostenido una acusación en su contra, a pesar de ser todo falso; y todo ello a raíz de que buscaba su desempeño profesional.

Sostiene que ha pasado por momentos de angustia, lo que ha repercutido en daños a su salud. En efecto, lo más significativo a mencionar es la internación de urgencia en la Clínica Santa María el día 19 de agosto de 2006, afectado por una severa crisis de tinitus, cefalea, disnea progresiva y deterioro de la capacidad funcional,



producto del stress al que estaba siendo sometido, precisamente en las fechas de presentación de las querellas.

Relata que todavía se levanta por las noches creyendo que podrían llegar nuevamente a detenerlo por delitos inexistentes. Además, ha tenido que ver el dolor de su mujer e hijos, quienes no pueden hablarse con sus hermanos y tíos a consecuencia de los hechos cometidos por su sobrina, que también es su familia.

Señala que incluso, en la causa rol N° 82-2006, se citó a declarar en reiteradas oportunidades a su hija Claudia López Ovalle, a su yerno Dr. Julio Alvarado Baigorria y a su sobrina Dra. Moyra López Ramírez, con la finalidad de imputarles la complicidad en los delitos maliciosamente denunciados. Fueron ocho años en los que no solo se le torturó a él, sino también a toda su familia.

Añade que, no puede dejar de mencionar el daño que se le ha ocasionado como empresario, lo que hasta el día de hoy le ha impedido iniciar nuevas actividades.

Afirma que todo lo anterior ha repercutido en su empobrecimiento, debiendo desprenderse de un vehículo Hyundai, modelo Santa Fe y de un departamento ubicado en la comuna de Las Condes.

Concluye que, de acuerdo a la jurisprudencia constante de nuestros tribunales, el daño moral es apreciado de manera discrecional y prudencial por el juez. Por lo que procede que se acceda a la indemnización del daño moral avaluado en la suma de \$450.000.000.- o lo que el tribunal determine.

4. Relación de causalidad

Asegura que existe una estrecha vinculación entre el daño sufrido y el actuar de los demandados. Justamente fueron ellos quienes aportaron los antecedentes que iniciaron la investigación (basándose en uno falso que nunca fue agregado al expediente) y testigos, cuyas declaraciones fueron, a lo menos, cuestionables, según lo que indica el Informe Policial N° 4398/00306.



Finaliza solicitando tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios en contra de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, ambas representadas por Ricardo Simón Bittelman Saporta y Marcia Luz Millas Ovalle, y también, solidariamente, en contra de Ricardo Simón Bittelman Saporta y Marcia Luz Millas Ovalle, y condenarlos a pagar la suma de \$562.000.000.- o la que el tribunal estime pertinente, debidamente reajustada de acuerdo a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, más intereses y con expresa condenación en costas.

A fojas 165, 166, 167 y 170 constan las notificaciones de los demandados.

CONTESTACION DE LA DEMANDA Y DEMANDA RECONVENCIONAL

A fojas 235 comparecen los abogados Jorge Gálvez Santibáñez y Francisco Fuentes Valpuesta, en representación de los demandados Ricardo Simón Bittelman Saporta, Marcia Luz Millas Ovalle y las sociedades Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, y **contestan la demanda** solicitando su rechazo, con costas.

I. Los hechos.

1. Contexto en que se presenta querella contra el demandante. Descubrimiento de hechos que *ex ante* revestían ostensibles caracteres de delito: Patricio López Cid llenó dos cheques de la empresa dejados con firma en blanco para emergencias, y se los depositó en su propia cuenta corriente, por cifras cerradas, en la sucursal de Reñaca del BCI, donde pasaba las vacaciones su familia.

Relatan que, para efectos de prestar servicios médicos, don Ricardo Bittelman Saporta constituyó conjuntamente con su hermano Sacha Alberto Bittelman Saporta, con fecha 16 de junio de 1993, la sociedad Especialidades Médicas Bittelman Limitada que luego pasó a llamarse Instituto Oftalmológico Limitada.

Agregan que, posteriormente, con fecha 14 de octubre de 2003, ingresó a la sociedad Centro Médico Aurora Limitada, reemplazando a



don Julio Cesar Alvarado Baigorria, quien hasta esa fecha era socio de su cónyuge doña Marcia Luz Millas Ovalle, quien era, hasta la fecha de presentación de la querella, la representante legal de dicha empresa.

Indican que a través de estas dos sociedades, más una tercera llamada Óptica Futuro S.A., el Dr. Ricardo Bittelman desarrolló una importante red de atención medica privada, en la cual se desempeñaron desde entonces diversos profesionales del área de la salud, quienes prestaban sus servicios en los múltiples locales con que estas empresas contaban para tal efecto.

Afirman que para hacerse cargo de la administración de este negocio, y para poder concentrarse en el ejercicio de su profesión, el Dr. Bittelman incorporó a principios del año 2001 al demandante Sr. Patricio López Cid, de quien tenía conocimiento por ser tío de su señora doña Marcia Millas Ovalle, razón por la cual depositó en él un elevado grado de confianza.

Señalan que lo anterior, tuvo como propósito adicional ayudar a dicha persona y su familia, por cuanto venía volviendo al país luego de haberlo abandonado por problemas con la justicia chilena y haberse radicado en Uruguay. En efecto, don Patricio López Cid se fue de Chile junto con su familia, pudiendo regresar solo una vez que había pasado el plazo de prescripción de las causas por las cuales fue sometido a proceso, debiendo incluso pasar un período en prisión preventiva.

Denotan que el demandante administró con amplia libertad y bajo un elevado grado de confianza el patrimonio y la operatoria de las empresas, hasta que con fecha 14 de noviembre de 2005, acordaron finiquitar la relación contractual debido a que a partir del año 2004 y con mayor evidencia durante el año 2005, se comenzaron a notar severas diferencias entre el nivel de actividad que mostraban los diversos locales de la empresa, con el nivel de ingresos que mostraban los números presentados por el Sr. López Cid.



Aseveran que, atendido lo anterior, una vez que el demandante dejó de administrar las empresas, se realizaron diversas revisiones contables de su administración económica. Al hacerlo, los auditores informaron que ni en los libros de contabilidad ni en ningún tipo de registros se encontraban debidamente documentados y respaldados los gastos de la empresa, y advirtieron que la forma irresponsable en que el demandante había conducido la administración de estas sociedades, podría significar problemas tanto con el Servicio de Impuestos Internos, como con Fonasa, y otras instituciones fiscalizadoras.

Alegan que lo más grave que se detectó, fue que los cheques con que se efectuaban pagos, eran en su mayoría cheques abiertos que no permitían establecer el destino de cada uno de los pagos, debiendo los auditores hacer fe de lo señalado en el respectivo talonario, y en los casos en que ni aún allí se indicaba el destino de los fondos, simplemente adivinar la posibilidad que con ellos se hubiesen pagado honorarios u otros gastos propios de la empresa, asociando gastos posibles con los montos de los respectivos cheques.

Indican que, sin embargo, se advirtió la existencia de dos documentos, cuyos montos, destino y circunstancias de cobro permitían presumir fundadamente que el demandante había abusado de la firma dejada en sendos documentos en blanco, y que con ello se había apropiado ilícitamente de una cuantiosa suma de dinero de propiedad de la empresa, al lograr la transferencia de fondos desde la cuenta de la empresa a su cuenta corriente personal.

Sostienen que, en efecto, de la revisión de los cheques girados y pagados por la empresa, se encontraron dos de ellos, los números 5432991 y el 5432994, que presentan las siguientes particularidades:

- Ambos estaban girados nominativos a nombre del demandante.
- La letra de llenado puesta en ellos correspondía al propio demandante.



- La firma correspondía a don Ricardo Bittelman.
- Se trataba de cifras bastante altas (\$3.000.000.- y \$4.000.000.-respectivamente) que no guardan proporción con los montos habituales de la gestión de la empresa, menos en las fechas de su emisión correspondientes al mes de febrero.
- En el reverso de los cheques, se observó que ellos estaban endosados para ser depositados en la cuenta corriente N° 73004341 del BCI, perteneciente al propio Patricio López Cid.
- Se trataba de cheques girados con muy poca diferencia de tiempo entre uno y otro.

Explican que, atendidos estos graves antecedentes, se procedió a revisar si en las fechas de tales cheques existían ingresos a otras cuentas de la empresa, que permitieran afirmar que el dinero fue transferido por López Cid a otra cuenta de la propia empresa, situación que luego fue descartada al no registrarse los aludidos ingresos en otras cuentas de la empresa.

Afirman que la mecánica de gasto y reembolso correspondía a dos variedades en la empresa, a saber: a) que el demandante gastara de su propio dinero por cifras menores, y luego, previa rendición documentada de tales gastos se le efectuaba el reembolso; y b) que este justificara ante los apoderados de firma de la empresa la necesidad de hacer algún gasto, para lo cual se emitía un cheque para ese específico pago.

Advierten que en este caso, se trataba de una situación ostensiblemente anómala. Los hechos ofrecían total certeza respecto de un cobro indebido efectuado para sí por parte del demandante, sin autorización de sus empleadores, sin previa rendición de gastos ni justificación de la necesidad de emitir un cheque, muchísimo menos, de la urgencia o emergencia que ameritaba el uso de los cheques que quedaban en la caja fuerte para los casos que, en ausencia de ambos



apoderados de firma, existiera una imperiosa necesidad de efectuar algún gasto que no pudiese esperar al regreso de alguno de ellos. Pero más aún, el hecho de haberse cobrado \$7.000.000.- durante la primera y segunda semana de febrero -en que los centros médicos no tenían prácticamente actividad- en el balneario de Reñaca, hacían altamente presumible que se tratara de dinero que el demandante se apropió para fines personales en el contexto del período de vacaciones de verano.

Señalan que al regreso del Dr. Bittelman de vacaciones, tan solo dos semanas después del giro de estos cheques, no existió comunicación alguna en cuanto al uso que López Cid les había dado, ni muchísimo menos rendición alguna de gastos u otra fundamentación que explicara su uso.

Aclaran que, vistos todos estos antecedentes, mi representado se formó la razonable convicción que el demandante se valió de dichos documentos que le había dejado en blanco, como encargo de máxima confianza para casos de emergencia, llenándolos de manera abusiva en perjuicio de la empresa para la que prestaba servicios, logrando con ello un traspaso de fondos improcedente desde la cuenta corriente de la empresa a la suya personal.

Hacen presente que ante tal evidencia, se decidió denunciar a la justicia penal para que el Juez Instructor investigara los hechos, que conforme la apreciación de los elementos tenidos a la vista, calificaban como posibles delitos de abuso de firma en blanco previsto y sancionado en el artículo 470 N° 3 del Código Penal y/o de apropiación indebida establecido en el artículo 470 N° 1.

2. Tramitación regular de la causa conforme al antiguo procedimiento penal: Antecedentes reunidos en la investigación permitieron al Juez Instructor obtener convicción del artículo 274 del C.P.P. para someter a proceso al demandante. Confirmación de la I. Corte de Apelaciones. Sucesivas resoluciones judiciales confirmaron existencia de mérito preliminar de los hechos denunciados.



Relatan que, iniciado el proceso por la querella interpuesta en contra de López Cid, este ejerció plenamente sus derechos procesales: entregó su versión a través de su declaración indagatoria y constituyó patrocinio y poder a favor de sus abogados de confianza, quienes aportaron los antecedentes que estimaron pertinentes. Sin embargo, el tribunal no estimó plausibles sus versiones, considerando justificado que se trataba de cheques que fueron dejados por el apoderado de firma de la empresa, para el evento que el señor Patricio López Cid tuviera una emergencia por montos que no pudiera abordar y luego solicitar reembolso, y que no obstante ello, López Cid los llenó de su puño y letra, de manera nominativa a nombre propio, por las cifras de \$3.000.000.- y \$4.000.000.-, siendo luego endosados por el propio querellado y depositados en su propia cuenta corriente número 73004341 del Banco de Crédito e Inversiones, precisamente en el período de las vacaciones de verano de su familia, realizando sendas operaciones en el balneario de Reñaca.

Aseguran que todo lo afirmado anteriormente, corresponde a hechos no solo probados sino además completamente reconocidos por López Cid, ya que tales cheques efectivamente fueron depositados por él mismo en su cuenta corriente, lo que por tanto no estaba en condiciones de negar. Incluso tales hechos se dieron por acreditados en la sentencia definitiva que se dictó en la causa.

Sostienen que por ello, la investigación sumarial estableció fehacientemente el hecho denunciado, centrándose luego la discusión en si el retiro, llenado, y posterior depósito en su propio beneficio de \$3.000.000.- y \$4.000.000.- había sido debidamente justificado por el querellado según su versión dada en el sumario, o si correspondía a la utilización perjudicial y fraudulenta de documentos dejados en blanco para casos de urgencia.

Refieren que fue el propio Patricio López Cid en declaración de fojas 249 de esos autos, quien reconoció cuál era el procedimiento general para que se le entregara dinero de la cuenta corriente de la empresa. Según explicó el querellado, debía demostrar los gastos



incurridos para ser luego reembolsados, o en caso de tratarse de un monto mayor, solicitar la emisión de un cheque. Esto lo explica textualmente al señalar: *“mi trabajo durante ese tiempo fue de carácter promocional y también me correspondía efectuar pagos a proveedores, y honorarios a profesionales y personal administrativo que trabajaba en los Centros. Para ello normalmente yo usaba cheques de mi cuenta corriente del banco BCI número 73004341 y solicitaba luego el reembolso de estos valores al Doctor Bittelman, exhibiéndole los comprobantes de los pagos respectivos. En otras oportunidades, cuando los montos eran mayores o se trataba de gastos ordinarios, yo le requería al doctor Bittelman cheques de la empresa para cancelar con éstos, exhibiéndole también el comprobante del cobro respectivo”*.

Agregan que en la misma declaración, ante la pregunta que se le formuló a fojas 250, en cuanto a si *“¿reconoce los cheques números 5432991 y 5432994 de la cuenta corriente número 73004359 del Banco BCI, cuyas copias se le exhiben en este acto?”* El querellado contestó: *“Sí. Esos documentos me fueron entregados por el doctor Bittelman a fines del mes de enero del año 2005, antes de salir de vacaciones, firmados en blanco por él con el objeto que yo cubriera con ellos los compromisos de la empresa que se presentaren durante su ausencia”*.

Denotan que entonces, el propio querellado reconoció abiertamente el motivo para el cual fueron dejados los cheques en blanco, lo que era además consistente con la declaración de fojas 245 del apoderado de firma Dr. Bittelman, donde indica que se trataba de cheques dejados para cubrir emergencias. Pero, acto seguido, el querellado justificó el cobro de esos cheques, señalando: *“Yo llené uno de esos cheques por tres millones y otro por cuatro millones y los cobré en la sucursal Reñaca del BCI, para cubrir pagos que yo había efectuado con mis cheques de gastos de la empresa a la primera quincena del mes de febrero del 2005 en ausencia del doctor Bittelman. Entre estos gastos se incluían honorarios médicos,*



publicidad de radios en Colina y San Antonio, cotizaciones previsionales de los trabajadores, cuentas telefónicas del Doctor Bittelman entre otros, todos estos gastos ordinarios nada fuera de lo normal para esa época”.

Señalan que, bastó al Juez Instructor la sola lectura de la declaración del querellado para advertir que reconoció haber utilizado un cheque dejado en blanco, haberlo llenado y depositado en su cuenta corriente personal, argumentando que ello lo hizo en la sucursal de Reñaca del BCI para reembolsarse presuntos gastos incurridos la primera quincena de febrero. Es decir, su explicación ya daba cuenta de un actuar irregular, por cuanto si se trataba de “gastos ordinarios” y “nada fuera de lo normal”, ello lo habría obligado a esperar el regreso de vacaciones del apoderado de firma, para rendirlos y obtener su devolución, según la propia mecánica que él mismo había declarado previamente.

Advierten que la inconsistencia de esa versión fue más allá, por cuanto afirmaba que los cheques fueron llenados y autodepositados para cubrir pagos “*que yo había efectuado con mis cheques de gastos de la empresa a la primera quincena del mes de febrero del 2005*”, en circunstancias que el llenado y depósito de los cheques tuvo lugar los días 7 y 11 de febrero de 2005.

Añaden que, más aún, bastó al magistrado de la causa la mera consulta de un calendario del año 2005 para verificar que los días 4 y 5 de febrero de ese año fueron días sábado y domingo, respectivamente. Por lo tanto, y dado que el primer depósito se produjo el día viernes 7 de febrero en el balneario de Reñaca, cabe concluir que los gastos presuntamente autopagados por el querellado, correspondían a los efectuados exclusivamente los días 1, 2, 3 y 4 de febrero. Ello sin contar que el propio querellado manifestó en su declaración de fojas 249, que durante el mes de febrero viajaba los días viernes a Viña del Mar y volvía los días lunes, lo que es además coincidente con el hecho que depositara el lunes 7 y el viernes 11 de



febrero estos documentos en la quinta región, necesariamente en el horario de atención de bancos que es por la mañana.

Indican que de ser así, los días en que supuestamente efectuó los gastos en cuestión, por la cifra cerrada de 3 millones de pesos, se reducirían a los días 1, 2 y 3 de febrero. Luego, en el mismo sentido, el segundo cheque lo depositó en su cuenta corriente personal el día viernes 11 de febrero también en Reñaca, lo que implicaría estimar que el resto de los gastos, nuevamente por 4 millones de pesos exactos, corresponderían a los efectuados los días 8, 9 y 10 de febrero, lo que resulta completamente inverosímil.

Refieren que el querellado pretendió sustentar documentalmente el presunto gasto de dinero en beneficio de la empresa, acompañando a fojas 281, una hoja de papel manuscrita que luego completó con una planilla de su propia confección, donde no se incluye ningún tipo de comprobante de ninguna especie. Pero, además de la ostensible ligereza de forma de los documentos acompañados para sustentar los gastos, el contenido de dicho papel confirmó las presunciones del tribunal.

Aseguran que, en efecto, dicha “rendición” consignaba en cuatro oportunidades la expresión “gastos varios” asociados a una suma superior a \$350.000.- ya no sin justificarlos mediante comprobantes de gasto, sino que esta vez, ni siquiera aclarando cuales eran esos gastos.

Afirman que la versión del querellado no fue aceptada por el tribunal, a la luz de los documentos agregados a partir de la diligencia ordenada por la I. Corte, en particular, la recepción de sus cartolas bancarias. Así, su particular justificación para los autopagos mediante una hoja manuscrita y luego apoyada por una tabla de información llenada por él mismo, era contradictoria con los cheques acompañados a fojas 209 y siguientes de autos. Por ejemplo, en la hoja en que expresaba los presuntos gastos que manifestó haberse auto-reembolsado (fojas 281), se refiere manuscrito “*diferencia de sueldo Mariela*” a lo que asigna un presunto pago de \$100.000.- Sin



embargo, la copia del cheque en cuestión, acompañada a fojas 233, da cuenta que el cheque N° 1060349 por \$100.000.- al que se atribuyó el concepto de diferencia de sueldo de la Dra. Mariela Argudo, es de fecha 15 de febrero de 2005 (fojas 233), es decir, posterior a la utilización de los cheques dejados en blanco.

Señalan que, asimismo, en la hoja manuscrita en cuestión (fojas 281), se consignó el gasto de \$325.584.- por concepto “*publicidad en revista de San Antonio*”, cifra que luego en la tabla explicativa que presentó a fojas 282 se divide en tres cheques, correspondientes a los cheques N° 1060320, 1060321 y 1060323. Pero, nuevamente bastó al tribunal una simple mirada a los cheques en cuestión para advertir que ellos tenían fechas 15 de marzo, 15 de abril y 15 de mayo, por lo que no corresponden a gastos efectuados la primera quincena de febrero de 2005.

Precisa que a fojas 210 de autos, constaba la copia del cheque N° 1060320 por \$108.528.- por concepto de publicidad en revista de San Antonio, de fecha 15 de marzo de 2005; a fojas 211, el cheque N° 1060321 por \$108.528.- por concepto publicidad revista de San Antonio, de fecha 15 de abril de 2005; y a fojas 212 el cheque N° 1060323 por \$108.528.- por concepto de publicidad de revista de San Antonio, de fecha 15 de mayo de 2005.

Agregan que, en igual sentido, en la rendición manuscrita de fojas 281 se señala el concepto “Radio San Antonio” al que se asigna un gasto de \$428.400.- lo que luego se desglosa en la tabla explicativa de fojas 282, en tres cheques, los números 1060316, 1060317 y 1060318, por \$142.800.- cada uno. Sin embargo, si se revisa cada uno de esos cheques, acompañados a fojas 213, 214 y 215 respectivamente, se puede constatar que ellos son de fechas 10 de marzo, 10 de abril y 10 de mayo. Es decir, nuevamente se trataba de una versión contradictoria con la alegación del querellado en cuanto a que había incurrido en gastos antes del día 11 de febrero.

Alegan que, aparte de lo anterior, uno de los ítems más onerosos de su justificación contable, correspondía al pago efectuado a su



sobrina doña Macarena Astudillo, por presunta repartición de volantes, por lo cual se habría pagado en efectivo la suma de \$1.050.000.-, gasto que además de no tener respaldo alguno, aparecía a todas luces como ostensiblemente desproporcionado.

A mayor abundamiento, hacen presente que, en base a la instrucción de la ltima. Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó oficial al Banco BCI a fin que remitiera las cartolas de la cuenta corriente del querellado, se pudo advertir en la cartola del mes de febrero de 2005 (acompañada a fojas 746 y 747) que ninguno de los cheques que se presentaban como gastos auto reembolsados había sido cobrado durante la primera quincena del mes de febrero. Asimismo, la información aportada por las cartolas de los meses de marzo, abril y mayo de 2005, confirmaron que los tres cheques girados por la suma de \$108.528.- por concepto de publicidad en revista de San Antonio, eran cheques a fecha, y por tanto no fueron pagados por el querellado en el mes de febrero.

Precisan que, en efecto, el cheque girado para el 15 de marzo de 2005 fue cobrado en esa fecha, conforme da cuenta la cartola de la cuenta corriente del querellado del mes de marzo que obra a fojas 751; el cheque girado a fecha 15 de abril de 2005 fue cobrado en esa fecha, según la cartola de ese mes agregada a fojas 755; y el cheque N° 1060323 por \$108.528.- por concepto de publicidad de revista de San Antonio, girado para fecha 15 de mayo del 2005, no aparece cobrado en las cartolas de todo el año 2005 ni el año 2006, siendo que caducó a los noventa días desde la fecha de su emisión.

Sostienen que lo mismo ocurría con los cheques que según su rendición manuscrita correspondían a gastos por publicidad en radio San Antonio, que luego afirmó eran los cheques N° 1060316 por \$142.800.- de fecha 10 de marzo de 2005, N° 1060317 por \$142.800.- de fecha 10 de abril de 2005, y N° 1060318 por \$142.800.- de fecha 10 de mayo de 2005. En estos tres casos, las cartolas de los meses de marzo, abril y mayo de 2005, acompañadas a fojas 751, 755 y 759 respectivamente, mostraban que esos cheques se otorgaron a fecha y



fueron pagados después del mes de febrero, haciendo completamente insostenible la versión del querellado.

Aseguran que en tales condiciones, resultó de toda lógica para el tribunal concluir que en relación a los cheques cuya utilización abusiva y perjudicial se denunció en la querella de su parte, existían presunciones fundadas que ellos fueron cobrados y utilizados en beneficio personal del querellado, lo cual es además compatible con la fecha y lugar en que los utilizó, presumiblemente para cubrir los gastos de sus vacaciones de verano.

Añaden que además advirtió el tribunal que los hechos descritos y la participación que en ellos le había cabido al querellado, satisfacían plenamente las exigencias del tipo penal establecido en el artículo 470 N° 3 del Código Penal, que sanciona a los que cometieren alguna defraudación abusando de firma de otro en blanco y extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero.

Denotan que, al momento de decidir el procesamiento del demandante, el tribunal estimó plausible, a la luz de su propia investigación sumarial llevada de forma objetiva e imparcial, que el querellado utilizó los documentos que se le habían dejado en blanco para casos de emergencia, llenándolos con montos antojadizos y, abusando de la confianza que se le depositó, extendió dos documentos para su lucro personal con evidente perjuicio a su parte.

En síntesis, alegan que el sometimiento a proceso del demandante no corresponde a un hecho de sus representados, sino de la autoridad jurisdiccional competente, quien dictó dicha resolución en ejercicio de sus funciones, teniendo principalmente a la vista las contradicciones ostensibles entre lo que el demandante sostuvo como línea de defensa en sus declaraciones, con la prueba documental que originalmente aportó al proceso.

Hacen presente que esta resolución fue sometida al control jurisdiccional de la Corte de Apelaciones, que en dos oportunidades y con salas de distinta composición, escuchó las acuciosas relaciones de los respectivos Relatores y los alegatos de las partes que



efectivamente concurrieron a estrados y, en los dos casos, resolvió afirmar la concurrencia de los presupuestos legales del artículo 274 del C.P.P., a saber, la justificación de la existencia de un delito y las presunciones fundadas de participación del inculpado.

Agregan que la Corte Suprema desestimó y declaró inadmisibile un recurso de amparo presentado por la defensa de López Cid, para impugnar la resolución de primera y segunda instancia.

Manifiestan que, a estas alturas, cabe preguntarse si seriamente puede estimarse como un abuso del derecho, el denunciar un hecho que *ex ante* reviste caracteres de delito, y que, presentados a la autoridad judicial competente, ésta los investiga imparcialmente y concluye en todas las instancias que se trata de hechos que sí revisten caracteres de delito.

Continúan relatando que, concluida la etapa de sumario, el tribunal decidió de oficio acusar al procesado hoy demandante, y elevar la causa a etapa de plenario. Es decir, el propio tribunal estimó que había mérito para formular una acusación pública en su contra, limitándose su parte a adherir a la acusación fiscal.

Explican que efectivamente la sentencia definitiva se pronunció en términos absolutorios, pero la absolución del ahora demandante no se produjo porque la imputación de la querella resultara inefectiva, en relación al depósito de ambos cheques para sí mismo. Por el contrario, como se dijo, la línea de defensa del querellado consistió en establecer durante el proceso que, si bien ese hecho era efectivo, el dinero que había sido depositado en su propia cuenta corriente, lo fue para compensar dineros previamente utilizados en fines del giro e interés de la empresa.

Señalan que, más allá que durante todo el referido proceso, el señor López Cid no acompañó antecedentes que demostraran los gastos incurridos respecto de dineros de terceros, para el tribunal -a la hora de la sentencia definitiva-, respetando el estándar de convicción que la condena penal requiere, resultaron creíbles sus explicaciones, en términos en que el destino final del dinero correspondía a un uso



propio de la empresa, lo que relativizaba el elemento perjuicio del tipo penal imputado.

Insisten en que la absolución se produjo por cuanto al tribunal le pareció, solo al final de la investigación (reunidos y analizados los antecedentes tanto del sumario como del plenario), que con el estándar de sentencia definitiva, resultaba presumiblemente efectiva la explicación dada por el querellado en relación al destino final del dinero, no obstante haberse acreditado y no haberse discutido la efectividad de los hechos en que se fundamentó la querella (el lleno por López Cid de cheques dejados en blanco, y su posterior depósito en su propia cuenta corriente).

Hacen presente que efectivamente su parte fue condenada al pago de las costas de la contestación civil de la demanda por \$7.000.000.- presentada por su parte junto con la adhesión a la acusación, las que ya fueron pagadas. Sin embargo, en relación a la acción penal que el demandante hoy presenta como abusiva, ni el tribunal penal, ni la Corte de Apelaciones accedieron a la condena en costas. Esto fue objeto de debate jurídico ante el propio tribunal y luego ante la Corte de Apelaciones, cuando el querellante pretendió entender equivocadamente que la sentencia había condenado en costas a su representada, no solo respecto de la demanda civil sino también respecto de la querella criminal.

Denotan que fue la Corte de Apelaciones de Santiago, mediante la resolución de fecha 12 de mayo de 2014 en causa Rol N° Criminal-464-2014, la que aclaró de manera definitiva que su parte no fue condenada en costas de la querella. Esto evidencia que el tribunal y la Corte estimaron que su parte tenía motivos plausibles para litigar, lo que resulta completa y totalmente incompatible con un carácter abusivo de la querella, por cuanto precisamente la declaración judicial en cuestión, involucra un análisis de mérito *ex ante* de los antecedentes para presentar la querella, y significa la afirmación de que hay buenas razones para interponerla, en circunstancias que el fundamento de la demanda de autos exige exactamente lo contrario.



Agregan que el ahora demandante, se alzó de casación en el fondo ante la Corte Suprema para revertir el pronunciamiento antes indicado, en el sentido que la condena en costas había sido declarada respecto de la acción penal, y el recurso fue declarado inadmisibile por el máximo tribunal, con lo que se encuentran agotadas las instancias legales intentadas para revertir el pronunciamiento por el cual se afirmó que su parte sí tuvo motivo plausible para querellarse.

3. Interposición de una querella criminal por el demandante, basada exactamente en los mismos hechos que esta demanda:

Relatan que, no conforme con el pronunciamiento de costas y la consecuente afirmación de que su parte tenía motivo plausible para ejercer la acción penal impetrada, el demandante presentó ante el 7° Juzgado de Garantía la querella criminal RIT 6988-2014, basada en hechos que fueron luego copiados y pegados para la interposición de esta demanda.

Afirman que el destino de esa querella fue el presumible. Luego de investigados los hechos por el Ministerio Público y la PDI, el Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo porque los hechos no son constitutivos de delito, decisión que fue confirmada por la Corte de Apelaciones el 8 de agosto de 2016, al fallar el recurso de apelación deducido por el demandante.

Señalan que lo anterior, si bien hizo a su representado incurrir en honorarios totales por la suma de \$10.000.000.- y le causó severas molestias y malos ratos, no fue una sorpresa, dado que el mismo demandante ya había interpuesto dos acciones penales previas por delitos contra el honor, además de una querella contra los testigos de la causa original seguida en su contra en que fundamenta esta demanda.

Denotan que el mismo querellante que demanda hoy alegando el abuso del derecho de su representado, por una querella presentada en su contra en base a los poderosos antecedentes que han referido previamente, se querelló:



a) Por injurias y calumnias en contra de Ricardo Bittelman ante el 8° Juzgado de Garantía, causa que fue sobreseída con costas (RIT 2795-2008, del 14 de abril de 2008).

b) Por injurias y calumnias contra Marcia Millas, que terminó en absolución con costas (RIT 2922-2006 ante el 4° Juzgado de Garantía, el 12 de mayo de 2006).

c) Ante el 7° Juzgado de Garantía, contra los testigos aportados por su representado en la causa penal que se siguió originalmente en su contra en el 32° Juzgado del Crimen, causa que terminó con la decisión de no perseverar comunicada por el Ministerio Público.

d) Ante el 7° Juzgado de Garantía, contra los demandados Ricardo Bittelman Saporta y Marcia Millas Ovalle, por el delito de querrela calumniosa, la que fue sobreseída definitivamente (RIT 6988-2014).

Finalmente, agregan, presentó la demanda de estos autos, por exactamente los mismos hechos que ya la justicia penal determinó que no son constitutivos de delito. Es decir, no solo no es efectivo que su representado haya cometido el delito civil en que basa su demanda el señor López Cid, sino que resulta palmario que quien sí ha hecho un ostensible abuso del sistema judicial para efectos de acosar y hostigar a los demandados es el propio demandante.

II. El derecho

1. Excepción de prescripción de la acción indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual

Interponen excepción perentoria de prescripción de la acción deducida por don Patricio Eduardo López Cid, notificada a su parte con fecha 10 de marzo de 2016, en virtud de los siguientes argumentos.

Supuestos hechos dañosos y fecha de los mismos.

Refieren que los hechos supuestamente dañosos que la contraria imputa a sus representados, son los siguientes:



i) La interposición de una querella que conllevó en su absoluta inocencia por “delitos inexistentes”, haciendo un supuesto uso malicioso y abuso del derecho que confiere la ley para accionar por “delitos reales”.

ii) Reclamar criminalmente la apropiación de dineros, a pesar de haberse celebrado un finiquito en tales términos que no se habría respetado.

iii) Agotar todas las instancias judiciales que la ley otorga, con el supuesto único objeto de perjudicar al actor, lo que culminó con la sentencia que rechaza -por manifiesta falta de fundamento- el recurso de casación en el fondo interpuesto en contra del fallo de alzada que confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia.

Precisan que, respecto de los dos primeros hechos -números i) y ii)-, sus representados interpusieron las querellas en cuestión en las siguientes fechas:

a) La entablada con fecha 17 de abril de 2006 ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, por delitos informáticos, RIT 2259-2006.

b) La entablada con fecha 5 de junio de 2006 ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, por el delito de estafa y otras defraudaciones, Rol 82-2006.

c) La entablada en agosto de 2006 ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por el delito de abuso de firma en blanco, RIT 3240-2006.

Señalan respecto del tercer hecho -número iii)-, que la sentencia definitiva de primera instancia de la causa criminal Rol 82-2006, seguida ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, fue dictada con fecha 2 de agosto de 2013, lo que corresponde a una actuación de un Tribunal de la República que en nada puede imputársele a sus representados.

Agregan que lo mismo acontece respecto a la sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por la Ilustrísima Corte de



Apelaciones con fecha 14 de octubre de 2013, y respecto de la resolución dictada por la Excelentísima Corte Suprema, que rechazó el recurso de casación en el fondo interpuesto por sus representados, de fecha 8 de enero de 2014.

Transcurso del plazo desde la producción de los supuestos hechos dañosos, sin el ejercicio de las acciones pertinentes.

Aseguran que concurren todos los requisitos necesarios para que sea declarada la prescripción de la acción interpuesta por don Patricio Eduardo López Cid.

Invocan los artículos 2493, 2514 y 2332 del Código Civil, y refieren que según el demandante, sus representados le habrían producido un daño por el sólo hecho de ejercer acciones criminales y por haber agotado todas las instancias procesales pertinentes con miras a “vengarse”. De estos argumentos del actor, se colige necesariamente que lo que en realidad alega es la existencia de supuestos hechos dañosos que datan del año 2006, esto es, prácticamente diez años atrás de la fecha de notificación de la presente acción.

Señalan que, en resumen, el acto que configuraría, a criterio del demandante, el hecho dañoso que ameritaría la condena de sus representados a pagar una suma de dinero por concepto de indemnización de perjuicios, sería -en sus propias palabras- el hecho de que sus representados *“han interpuesto una querella que conllevó en mi absoluta inocencia por delitos inexistentes, haciendo uso malicioso y abusando del derecho que les confiere la ley para accionar por delitos reales”*.

Denotan que de esta manera, en atención a los plazos transcurridos, siendo la acción indemnizatoria por responsabilidad civil extracontractual una acción ordinaria con plazo particular de prescripción -4 años desde la perpetración del acto-; no existiendo otras acciones judiciales previas con la misma pretensión que la de marras y no encontrándose interrumpida o suspendida la prescripción



con anterioridad, se encuentra prescrita la acción interpuesta derivada de los supuestos hechos dañosos consistentes en la interposición de acciones criminales en contra del actor durante el año 2006, toda vez que la perpetración del supuesto acto generador de perjuicios ocurrió en el mes de agosto del año 2006, esto es, hace prácticamente diez años atrás contados desde la notificación de la presente acción.

Hacen presente que iguales argumentos aplican para el análisis de la prescripción de la acción de autos en atención al supuesto hecho dañoso alegado por el actor, consistente en haber utilizado -sus representados- todas las instancias procesales que determina la ley, con la supuesta finalidad de perjudicarlo, toda vez que dicha actividad sólo es imputable en cuanto se ejerzan las acciones que den movimiento a la actividad jurisdiccional, hechos que ocurrieron durante el año 2006. Toda otra imputación a los demandados es incorrecta, pues las resoluciones posteriores corresponden, justamente, a actividades de los Tribunales de Justicia, en virtud de las cuales no puede haber, bajo ningún aspecto, uso malicioso o abuso de un derecho.

2. Excepción de falta de legitimación pasiva de los demandados de autos, respecto de hechos que corresponden a actuaciones de los Tribunales de Justicia

Aseguran que el actor intenta imputar malamente a sus representados, los efectos que han producido sendas resoluciones dictadas por Tribunales de Justicia del país, sean Juzgados de Garantía, Juzgados de Letras del Crimen, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago o la Excelentísima Corte Suprema.

Indican que los demandados, mal pueden tener legitimación pasiva en los hechos imputados por el actor, cuando su actuación solo se enmarca en la interposición de acciones criminales cuyos antecedentes, en una evaluación *ex ante* de los hechos, permitían advertir la existencia de actividades y acciones del actor que revestían, claramente, caracteres de delito. De esta apreciación



fáctica, surgen las querellas interpuestas por sus representados el año 2006 en contra de don Patricio Eduardo López Cid.

Precisan que la defensa de las querellas cuestionadas por el actor se basa, fundamentalmente, en el reconocimiento del núcleo fáctico de los hechos imputados por sus representados, que justifica en la existencia de gastos no comunicados ni rendidos que se habría reembolsado “en justicia”, sin autorización alguna de sus entonces empleadores, señores Bittelman Saporta y Millas Ovalle.

Afirman que lo anterior consta completamente en el expediente de la causa criminal seguida ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, por los delitos de estafa y otras defraudaciones, a la que se acumuló posteriormente la causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por el delito de abuso de firma en blanco.

Señalan que, en síntesis, el fundamento de las acciones interpuestas en su oportunidad, tuvo relación con un cumplimiento negligente de las obligaciones de López Cid en su administración, mientras trabajó en las empresas de sus representados. Esta negligencia se traduce, finalmente, en la imposibilidad de apoyar su presente tesis, expuesta en el libelo de autos, pues la interposición de las querellas obedeció a la existencia de antecedentes contundentes que ameritaban provocar el actuar de la justicia en miras a investigar los hechos fundantes de las acciones en cuestión.

Sostienen que por ello, en lo que respecta a los supuestos daños imputados al actuar de sus representados, consta que dicha actividad se enmarca dentro del ámbito del derecho de petición y de acción que consagra la Constitución y, por lo tanto, el hecho dañoso que en realidad alega la contraria es el resultado de la actividad judicial efectuada por los Tribunales que conocieron de las acciones criminales interpuestas.

Agregan que dicha actividad jurisdiccional, manifestada a través de actuaciones y resoluciones pronunciadas por los Tribunales de Justicia, no es imputable a sus representados de manera alguna,



por lo que mal podrían tener legitimación pasiva en la presente acción indemnizatoria.

Reiteran que sus representados ejercieron legítimamente su derecho a accionar y efectuar actuaciones procesales, consagrado por la Constitución y las leyes, fundados en antecedentes de la magnitud suficiente como para poner en movimiento la actividad jurisdiccional de los Tribunales de Justicia.

Por último, indican que un juicio criminal dure ocho años; que el actor haya sido declarado reo dos veces y que haya estado en prisión por detenciones realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile, en nada es atribuible al actuar de sus representados, quienes sólo accionaron, hace ya prácticamente diez años, en contra del demandante de autos, por existir graves antecedentes que justificaban iniciar un juicio criminal para determinar su responsabilidad en hechos que revestían caracteres de delito.

3. Excepción de falta de requisitos para configurar la responsabilidad civil extracontractual alegada

Respecto del hecho dañoso, sostienen que no existe, pues la actividad de los demandados se enmarca dentro del ejercicio del derecho constitucional de petición y de acción, por el cual cualquier persona, ante la existencia de antecedentes que fundamenten una pretensión en contra de otra, bajo los estándares exigidos por la ley, puede poner en marcha el aparato jurisdiccional y solicitar a los Tribunales de Justicia que se pronuncien acerca de la misma ejerciendo la correspondiente acción.

Aseguran que en el caso de marras, no existe ningún uso malicioso ni abuso del derecho y de la justicia por parte de sus representados. Todo su actuar se encuadra dentro del marco de la ley y de las exigencias mínimas del derecho a accionar. La interposición de las querellas cuestionadas por el actor obedeció a que los antecedentes que las fundaban contenían, claramente, caracteres de delito que ameritaban un pronunciamiento judicial al respecto.



Advierten que entender lo contrario en este punto, llevaría al absurdo de considerar que todo demandado absuelto o no condenado, en cualquier clase de juicio, podría demandar al actor respectivo fundamentándose en que habría interpuesto su acción en abuso del derecho. Claramente, que el actor de autos haya sido absuelto de sus cargos no es imputable, bajo ningún aspecto, a la actividad procesal de sus representados.

Agregan que su absolución se produjo por un análisis que los jueces del fondo realizaron de todos los antecedentes acompañados en la causa, sin tener los demandados participación alguna en la dictación de las resoluciones previas (auto de procesamiento y acusación), ni en la duración del juicio. En definitiva, no puede haber hecho dañoso en hechos que son de exclusiva iniciativa de los tribunales de justicia y que en nada incumben o son atribuibles a la actividad procesal de sus representados.

En cuanto al elemento de la culpa, indican que, en virtud de lo ya expresado, consta que no existe culpa alguna de sus representados en los hechos imputados a ellos.

Explican que, en efecto, si no existen hechos dañosos por parte de sus representados, mal puede existir culpa de los mismos. El actuar procesal de sus representados se encuadra en los parámetros exigidos por la ley, y no consiste en una temeraria imprudencia, como pretende la contraria.

Afirman que durante la secuela de las causas criminales cuestionadas, sus representados no tuvieron participación alguna en la dictación de las resoluciones tomadas, principalmente, por el 32° Juzgado del Crimen de Santiago. La duración de dicho juicio y los efectos de algunas de estas resoluciones sobre el actor, en nada les son imputables por concepto de culpa o dolo a los demandados de autos.

Aseveran que, en razón de los mismos argumentos, no existe daño alguno que resarcir por sus representados. En efecto, el ejercicio legítimo de una acción no genera daño alguno, mientras se



enmarque en el derecho constitucional de petición, como ocurre en la especie. Por otra parte, si el actor estima que la duración del juicio fue desproporcionada, y que las resoluciones judiciales dictadas por los Tribunales de Justicia le causaron algún supuesto daño que espera poder resarcir, su acción debió dirigirse en contra de dichos Tribunales de Justicia, y no contra sus representados, que en caso alguno podrían haberle generado un daño con su actuación procesal. En resumen, el supuesto daño alegado por el actor es consecuencia inmediata y directa de la actividad jurisdiccional, y no del actuar legítimo de sus representados.

Señalan que, acorde con todo lo anterior, no existe relación de causalidad alguna entre los supuestos hechos imputados a sus representados y el daño alegado por el actor. Si los demandados no han cometido hecho dañoso alguno, mal podría existir un perjuicio que reparar al respecto, siendo inexistentes ambos elementos. Por tanto, menos existe relación de causalidad entre los hechos esgrimidos por el demandante de autos y el perjuicio alegado. De esta forma, no concurre ninguno de los elementos requeridos por la ley para que se configure la responsabilidad civil extracontractual alegada por el actor en contra de los demandados.

Finalizan solicitando que se rechace la demanda en todas sus partes, con expresa y ejemplar condenación en costas para la demandante, en razón de que:

1. La acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, interpuesta a fojas 1 de autos por don Patricio López Cid, se encuentra prescrita en virtud de que los supuestos hechos dañosos imputados a sus representados datan del año 2006, transcurriendo con creces el cuadrienio exigido por el artículo 2332 del Código Civil, en atención a la fecha de notificación de la presente demanda, y que el tiempo no se ha suspendido ni interrumpido desde la perpetración del acto invocado;

2. Sus representados carecen de la legitimación pasiva necesaria para ser demandados en el caso de marras, toda vez que



los hechos invocados como generadores del supuesto daño causado consisten, en realidad, en acontecimientos que exceden y no son atribuibles a su actividad procesal legítima, la cual se enmarca dentro del ejercicio del derecho de acción y petición, consagrado constitucionalmente. En realidad, los hechos invocados por el actor como generadores del daño son una duración prolongada de un juicio criminal seguido ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago y la dictación de resoluciones judiciales que lo ordenaron reo, lo sometieron a procesamiento y lo acusaron en virtud de existir antecedentes suficientes en el expediente criminal para llegar a tal decisión. Todas estas actuaciones son propias y privativas de los Tribunales de Justicia, y no constituyen uso malicioso o abuso del derecho y de la justicia para fines personales, como pretende la contraria; y

3. No concurren los requisitos exigidos por la ley para que se configure la responsabilidad civil extracontractual alegada, toda vez que no existe hecho dañoso, ni culpa o dolo de sus representados, ni daño que resarcir y menos relación de causalidad entre dichos elementos.

En el otrosí de su presentación, los abogados Jorge Gálvez Santibáñez y Francisco Fuentes Valpuesta, en representación de los demandados **Ricardo Simón Bittelman Saporta** y **Marcia Luz Millas Ovalle**, interponen **demanda reconvencional** de indemnización de perjuicios en contra de **Patricio Eduardo López Cid**, factor de comercio, domiciliado en Avenida Américo Vespucio Sur N° 406, departamento N° 21, comuna de Las Condes.

En cuanto a los hechos que fundamentan la acción, en virtud del principio de economía procesal, se remiten a lo expresado en la contestación de la demanda, en la parte en que se refirieren a la interposición de una querella criminal por el demandante, basada exactamente en los mismos hechos que esta demanda, que terminó por sobreseimiento definitivo dictado por 4° Juzgado de Garantía, confirmado por la Corte de Apelaciones, por considerarse que los



hechos no eran constitutivos de delito, contenida en el apartado titulado “LOS HECHOS”.

Aclaran que en el referido apartado, se expresa claramente que quien ha utilizado al sistema judicial para hostigar y amedrentar a sus representados ha sido, justamente, el demandado reconvencional, Patricio Eduardo López Cid, abusando sistemáticamente del derecho y de la justicia a través de la interposición de injustificadas acciones criminales.

Exponen que concurren todos los elementos necesarios para que exista responsabilidad civil extracontractual, que según se desprende de los artículos 2284, 2314, 2319 y 2329 del Código Civil, son: (i) capacidad delictual o cuasidelictual; (ii) dolo o culpa del autor del daño; (iii) la relación de causalidad; y (iv) el daño.

1. Capacidad delictual o cuasidelictual

Indican que, por regla general, toda persona natural o jurídica es capaz de delito o cuasidelito civil. Solo son incapaces los que carecen del discernimiento necesario para darse cuenta del acto que ejecutan. Es la consecuencia lógica del sistema adoptado por nuestro Código, según el cual la responsabilidad delictual o cuasidelictual no existe sino a condición de que el hecho u omisión perjudicial provenga de culpa o dolo de su autor, y una y otro suponen voluntad.

2. El dolo o culpa del autor del daño

En cuanto a la imputabilidad en el resultado dañoso, señalan que se encuentra en el actuar doloso del demandado reconvencional Patricio Eduardo López Cid.

Explican que hay dolo cuando existe la intención positiva de inferir injuria o daño a la persona o propiedad de otro (artículo 44 del Código Civil), de tal forma que subyace el propósito deliberado, ya sea por acción o por abstención del hechor, de causar daño. En suma, hay dolo en todos los hechos calificados de delito por el Código Penal o por leyes especiales, y que causen un daño material o moral a otra persona.



Añaden que, por su parte, hay culpa o negligencia cada vez que falta la diligencia obligada o debida por ley en la ejecución de un determinado hecho (artículo 44 del Código Civil).

3. La relación de causalidad

Denotan que, para que el hecho de la persona capaz de delito o cuasidelito imponga responsabilidad civil extracontractual, no basta que ese hecho haya sido ejecutado con dolo o culpa, ni que cause daño. Es menester que, entre el dolo o la culpa, por una parte, y el daño, por otra, exista una relación de causalidad, es decir, que éste sea la consecuencia o efecto de ese dolo o culpa.

Afirman que en el caso de autos, el actuar doloso del demandado López Cid, en su continuo uso y abuso del derecho al interponer sendas acciones criminales total y absolutamente injustificadas en contra de sus representados, es determinante en la producción del resultado dañoso. En efecto, se configura la necesaria relación de causa y efecto entre la acción ilícita del demandado y el daño ocasionado a las víctimas como consecuencia directa de la conducta imputable ya descrita.

4. El daño

Sostienen que se ha producido daño emergente como consecuencia del hecho ilícito perpetrado por el demandado López Cid, consistente en la interposición de sendas acciones criminales en contra de los demandantes reconvencionales, las cuales han sido reiteradamente desechadas por los Tribunales de Justicia, con condenas en costas, por carecer de todo fundamento plausible para litigar, usando maliciosamente y abusando del derecho y del aparato jurisdiccional del Poder Judicial.

Precisan que a raíz de ello, sus representados han debido contratar la asesoría de abogados especializados en el tema, los cuales han cobrado sus respectivos honorarios profesionales. Por ello, el perjuicio asciende a la suma de \$10.000.000.- correspondiente a los honorarios profesionales de abogados, que deberá ser pagado por el



demandado reconvencional de forma reajustada y con intereses desde la fecha de comisión del hecho ilícito hasta la de su pago efectivo.

Aseguran que sus representados han sufrido también daño moral como consecuencia del hecho ilícito cometido por el demandado López Cid. En la especie, este perjuicio dice relación con el daño emocional y personal que les ha afectado, al verse expuestos a tantas causas criminales de forma total y absolutamente injustificada, según lo expuesto en los hechos que fundan la presente acción indemnizatoria, daño que su parte avalúa en el monto de \$50.000.000.- para cada uno de los demandantes, dando un total de \$100.000.000.- que deberá ser debidamente reajustado, y al cual deberá aplicársele intereses desde la fecha de comisión del hecho ilícito hasta la de su pago efectivo.

5. Indemnización reclamada

Concluyen que, como consecuencia de todo lo precedentemente expuesto, el demandado Patricio Eduardo López Cid está obligado a responder de los perjuicios que le ha ocasionado a sus representados, y que tienen como fuente la relación extracontractual que se origina a partir del hecho ilícito o delito civil cometido y descrito en los hechos.

Detallan que dichos perjuicios se desglosan de la siguiente manera: (i) por concepto de daño emergente, la suma de \$10.000.000; (ii) por concepto de daño moral, la suma de \$50.000.000 para cada uno de los demandantes reconvencionales, es decir, un total de \$100.000.000.-

Indican que entonces, la indemnización total demandada es de \$110.000.000.- más reajustes e intereses, contados desde la fecha de comisión del delito civil que causó los daños y perjuicios, hasta la de su pago efectivo.

Finalizan solicitando tener por interpuesta demanda reconvencional en contra de Patricio Eduardo López Cid, ya individualizado, admitirla a tramitación, y en definitiva, acogerla en todas sus partes, y con costas, declarando:



1. Que el demandado reconvencional, Patricio Eduardo López Cid, ha cometido un hecho ilícito imputable que ha generado un perjuicio indemnizable a favor de sus representados, señores Ricardo Simón Bittelman Saporta y Marcia Luz Millas Ovalle, al haber abusado del derecho;

2. Que se condena a Patricio Eduardo López Cid a pagar a los demandantes reconvencionales Ricardo Bittelman Saporta y Marcia Millas Ovalle la suma total de \$110.000.000.- que corresponden a \$10.000.000.- por concepto de daño emergente por honorarios profesionales de abogados; y \$50.000.000.- para cada uno de los demandantes reconvencionales, en atención al dolor y sufrimiento que han debido experimentar al verse sometidos a sendos litigios de forma total y absolutamente injustificada, sumas que deberán ser pagadas con reajustes e intereses correspondientes;

3. Que se condena en costas al demandado reconvencional.

REPLICA Y CONTESTACION DEMANDA

RECONVENCIONAL

A fojas 261 el apoderado del demandante evacúa la **réplica**, en los siguientes términos.

I. En cuanto a los hechos.

Señala que la labor del demandante consistía en realizar algunas tareas administrativas y especialmente convenios con empresas e instituciones públicas para los demandados, para lo cual contaba con poderes limitados. Por ello, malamente podría afirmarse – como lo hacen los demandados– que “*el demandante administró con amplia libertad y bajo un elevado grado de confianza el patrimonio y la operatoria de nuestras empresas*”. Así, el demandante nunca realizó giros sobre las cuentas corrientes bancarias de las sociedades, por ejemplo.

Precisa que las contabilidades de todas las empresas eran llevadas en forma externa, no siendo responsabilidad del demandante ninguna de las tareas que se señalaron en la contestación (específicamente en el punto 10 de párrafo II.1). Es más, los



contadores recibían instrucciones directas del demandado Bittelman, como lo señala la contadora Celbia Aravena en su declaración en la causa ROL 82-2006 del 34° Juzgado del Crimen, y el propio Bittelman en su declaración en la misma causa. Los problemas que tuvo Bittelman con Fonasa surgieron a raíz de que en una auditoría interna, el servicio detectó que este profesional no contaba con la especialidad de oftalmólogo.

Hace presente que el demandante nunca giró sobre las cuentas corrientes de las empresas, como lo demuestran los poderes notariales de las sociedades Centro Medico Aurora Limitada e Instituto Oftalmológico Limitada. De esta manera, malamente podría ser responsable de los hechos que indican los demandados, a saber, *“que los cheques con que se efectuaban pagos, eran en su mayoría cheques abiertos que no permitían establecer el destino de cada uno de los pagos”*.

Relata que, durante los cuatro años en que el demandante trabajó para Bittelman, este se tomaba sus vacaciones en la primera quincena de febrero de cada año. Existían instrucciones perentorias en cada uno de los centros médicos de que todos los ingresos en efectivo o cheque fueran depositados al día siguiente en las cuentas bancarias de las sociedades. Así lo reconoce el propio Bittelman en el careo con el demandante ante la sede del crimen y así lo declaran también en el plenario los testigos Telma Letelier Aspe (cajera) y Francisco Ponce (funcionario que hacía los depósitos).

Agrega que para cubrir los gastos de ese periodo, que además coincidía con ser uno de los meses de más alta atención de pacientes junto con el mes de enero, Bittelman dejaba cheques firmados en blanco al demandante y así lo declara en la propia querella y en sus posteriores declaraciones, de manera que lo que hizo el demandante correspondía a lo establecido, como así concluye en su sentencia el Ministro en Visita Extraordinaria, don Mario D. Rojas González, constituido en el 34° Juzgado del Crimen de Santiago: *“En resumen no hay prueba de que los siete millones de*



pesos hayan sido utilizados por López Cid en su propio beneficio y dada las funciones que este desarrollaba, lo más seguro es que se hayan utilizado para cubrir gastos propios de las empresas a su cargo en lo tocante a la administración. Cabe recordar que en la querella de autos Ricardo Bittelman expresa que era frecuente que en el período de verano le dejara cheques firmados en blanco al querellado para que este cubriera cualquier imprevisto de carácter urgente e impostergable que pudiera surgir". Esto último es un agregado que se cae por sí solo: solo basta preguntarse, si todos los ingresos eran depositados en las cuentas corrientes bancarias de las sociedades, "sobre las cuales no giraba el demandante López Cid", y Bittelman estaba de vacaciones, ¿cómo se financiaban entonces los gastos de ocho centros médicos?

Denota que la defensa de los demandados, pretende llevar al tribunal a realizar el análisis que ya hizo el 34° Juzgado del Crimen sobre la rendición de gastos y de la cual concluyó en la sentencia absolutoria. Sin embargo, cabe mencionar algunos de los gastos cuestionados por la defensa: sueldos, honorarios y comisiones al personal, honorarios a médicos, publicidad de los centros médicos en radios y revistas de Colina y San Antonio, reparto de volantes, pagos a AFP Habitat e Instituto Nacional de Previsión, Bell South (celular de uso del Dr. Bittelman), entre otros, los cuales no son sino pagos efectuados en virtud del giro de las sociedades. Cuando estos gastos fueron efectuados con cheques de la cuenta personal del demandante, se acompañó al tribunal fotocopia por ambos lados de cada cheque a fin de que fueran justificados.

Respecto a los puntos 32 a 44 de la contestación, aclara que los demandados son los únicos responsables en el procesamiento del demandante, dado que el tribunal no actuó de oficio en la investigación, prueba de ello es que: a) hubo una querella inicial, basada única y exclusivamente en una auditoría que nunca fue parte del expediente; b) hubo testigos que faltaron a la verdad; c) hubo negativa a colaborar con el perito designado por el tribunal señor Iván



Cifuentes Concha y con el Laboratorio de Criminalista Central de la Policía de Investigaciones; d) cuando la Corte de Apelaciones revoca el auto de procesamiento y el tribunal decide cerrar el sumario, aportan nuevos antecedentes que lo reabren; e) acusan y demanda civilmente; f) apelan de la sentencia absolutoria; y, g) recurren de casación en el fondo respecto de la sentencia confirmatoria de la Corte de esta ciudad.

Asegura que no hay mejor ejemplo del abuso del derecho y utilización excesiva del aparataje jurisdiccional, que los demandados, en la oportunidad en que el Juzgado del Crimen absuelve a su representado, apelan de dicha sentencia (Rol 1549-2013 de la Corte de Apelaciones de Santiago) y luego recurren incluso de casación ante la Corte Suprema (Rol 14839-2013).

Afirma, en cuanto a las costas que según los demandados fueron condenados a pagar por la acción civil, mas no por la penal, que tan grave consideró el actuar de los demandados en el proceso penal origen de los hechos de autos, que fueron condenados en el ámbito civil, al rechazar la demanda interpuesta.

II. En cuanto al Derecho.

1. Respecto de la excepción de prescripción

Refiere que los demandados argumentan a grandes rasgos, que la acción deducida estaría prescrita, toda vez que los hechos que originaron la presente causa datan del año 2006.

Señala que, si bien la causa ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago (Rol 82-2006) se inició con fecha 5 de junio de 2006, no concluyó sino hasta el día 8 de enero de 2014, cuando la Corte Suprema (rol 14839-2013) rechazó el recurso de casación de contrario por manifiesta falta de fundamento. Más aún, el cúmplase respectivo se dictó por el tribunal de la instancia el día 15 de enero del 2014. Por tanto, mal podría computarse el plazo de prescripción desde la interposición de la acción criminal, dado que lo que se alega en la demanda de autos son perjuicios derivados por el ejercicio abusivo de



las acciones en de dicho proceso, el que concluyó en el año 2014, ad portas de cumplir ocho años de tramitación.

Reseña que nuestra jurisprudencia ha avalado este razonamiento al precisar que *“en cuanto a la prescripción de la acción entablada, cuando el hecho ilícito consta de una serie encadenada de acciones, el plazo se debe contar desde que termina el periodo de ejecución, siguiendo la postura de nuestra doctrina que ha determinado que la prescripción en estos casos debe correr desde que se completa el hecho dañoso con la producción global del daño, los daños secundarios y consecuenciales que se produzcan con posterioridad al cuadrienio del artículo 2332 del Código Civil no serán reclamables, la acción entablada en autos se encuentra manifiestamente dentro del plazo por cuanto la situación planteada hay que considerar que el hecho dañoso se puede estimar que se produjo indistintamente al conocer el diagnóstico, y contado el plazo de 4 años a partir de cualquiera de esas fechas, a la data de notificación de la demanda no han transcurrido los plazos legales por lo que solo cabe desestimar la prescripción solicitada en ese sentido”* (Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 3248-2011, considerando 17).

Hace presente que entonces, queda en evidencia que el plazo de prescripción de esta acción, en la que se demanda la procedencia y determinación de los perjuicios ocasionados al demandante, no puede contarse sino, precisamente, desde concluyó el hecho dañoso, esto es, desde el cúmplase de la sentencia absolutoria a favor de su representado, esto es, el 15 de enero del 2014.

2. En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva

Indica que los demandados arguyen que los hechos fundantes de la acción deducida, no fueron producidos por ellos, atribuyéndole la responsabilidad a los Tribunales de Justicia.

Señala que no fueron sino los hoy demandados quienes utilizaron el aparataje jurisdiccional, no una, sino que en reiteradas



veces, deduciendo acciones mediante las cuales iniciaron diversas causas en contra de su representado, que en resumen son:

a) En el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 2259-2006, por delitos informáticos, que fue sobreseída definitivamente por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 20 de agosto del 2007.

b) En el 32° Juzgado del Crimen, Rol 82-2006, por estafa y otras defraudaciones.

c) En el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, RIT 3240-2006, por abuso de firma en blanco, la que se acumuló a la anterior y en la cual López Cid fue absuelto definitivamente con fecha 8 de enero del año 2014 por la Corte Suprema en Rol 14839-2013.

Denota que los demandados fueron quienes interpusieron las querellas respectivas, activando el mecanismo jurisdiccional. No es sino en virtud de dicho actuar que se generaron los perjuicios que hoy se reclaman.

Manifiesta que los tribunales de justicia que intervinieron lo hicieron en virtud de la obligación constitucional y legal de ejercer jurisdicción en mérito de las acciones ejercidas por los demandados, quienes en evidente mala fe procesal, sostuvieron un proceso penal sobre supuestos falsos, insistiendo en hechos que nunca fueron delictivos, tal como lo recoge la sentencia absolutoria latamente citada.

3. Respecto a la excepción de falta de requisitos para configurar la responsabilidad civil extracontractual alegada

Asegura que se configuran todos y cada uno de los elementos de responsabilidad civil extracontractual, a saber:

a) Hecho dañoso:

Precisa que los hoy demandados interpusieron una serie de acciones y querellas que conllevaron a la inocencia de su representado por delitos inexistentes, haciendo uso malicioso y abusando del derecho que les confiere la ley para accionar.

Agrega que los querellantes agotaron todas las instancias que la ley otorga con el objeto de perjudicar a su representado, lo que culminó con la sentencia que rechaza por manifiesta falta de



fundamento el recurso de casación en el fondo en contra del fallo de alzada que confirmó la sentencia absolutoria de primera instancia, la que con fecha 15 de enero del 2014 se ordenó cumplir; y además solicitaron medidas cautelares personales y reales.

b) Culpa:

Expone que la culpa, ha de entenderse como falta de diligencia o cuidado en la ejecución de un hecho, o falta al deber de cuidado y diligencia que toda persona, sea por disposición de la ley o en razón de los estándares generales y comunes admitidos por la sociedad, debe emplear para evitar causar un daño que no se habría producido en caso de haberse respetado dicho deber de cuidado y diligencia.

Sostiene que así, todas las personas por el hecho de ser tales gozamos del derecho a la acción, pero ello no puede acarrear como consecuencia daños a las personas, especialmente si se actúa con una negligencia de tal envergadura que no existe justificación.

Denota que la interposición de querellas criminales, específicamente en la causa Rol 82-2006 del Juzgado del Crimen, no fue más que producto de un actuar caprichoso y antojadizo de los hoy demandados en contra de su representado, motivados de manera injustificada y en clara señal de perseguimiento y venganza ante la nueva labor profesional que ejercía.

Asegura que no cabe la menor duda que quién sustenta una acción lo debe hacer con un mínimo de responsabilidad, cuestión que no se observó en la conducta de Bittelman ni de Millas, siendo del todo imprudentes en la interposición de la acción que culminó con una sentencia absolutoria en favor de López Cid.

c) Daño:

Afirma que por tratarse de responsabilidad extracontractual, cabe indemnizar todos los perjuicios según lo dispone el artículo 2329 del Código Civil. Montos a indemnizar que fueron detalladamente indicados en la demanda de autos.

d) Relación de causalidad:



Señala que existe estrecha vinculación entre el daño sufrido y el actuar de los hoy demandados. Ellos fueron quienes iniciaron los procesos judiciales, quienes aportaron antecedentes a la investigación, quienes llevaron testigos y movilizaron el aparataje jurisdiccional de manera artificiosa. Sin ese actuar, la presente acción no se estaría hoy debatiendo.

Finalmente, hace presente que quienes ejecutan el dolo, sea personalmente, sea como cómplices o encubridores, son civilmente responsables de todos los perjuicios que se sigan para la víctima (Barros, E. Tratado de Responsabilidad Extracontractual, 2007, p. 932). Así, mientras que civilmente se define al dolo como *“la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”* (artículo 44 del Código Civil), el dolo penal puede concebirse como el conocimiento que tiene un sujeto de saber qué es lo que hace y conocer los elementos que conforman el hecho típico. En este aspecto, cabe señalar que aun cuando su representado haya sido absuelto en sede penal, ello no implica que no se solicite la responsabilidad civil derivada de las falsas acusaciones por las que fue objeto, más aún, el hecho de que se haya decretado la absolución termina comprobando que las acciones judiciales interpuestas por los hoy demandados carecían de sustento, generando la responsabilidad que les atañe en cuestión.

Reseña que al respecto, la jurisprudencia ha señalado que *“todo acto voluntario realizado con o sin la intención de producir efectos jurídicos origina para su autor la consiguiente responsabilidad, de manera que -dándose los otros supuestos para su generación-, las consecuencias del acto le son imputables. El fundamento de la responsabilidad que constituye una condición esencial, es la existencia de un daño. La responsabilidad jurídica será distinta según la naturaleza del daño -daño privado y daño social que dan lugar a la responsabilidad civil y penal, respectivamente-. En el ámbito civil, la noción fundamental es el principio de no dañar a otro. De donde resulta que si este deber de omisión genérico se quebranta y se causa*



un daño a un tercero y aquél es imputable a culpa o dolo, se debe responder. En efecto, en tal caso, la sanción que se aplica lleva envuelta la idea de reparación, expresada en el principio de que todo acto ejecutado por una persona, con o sin la intención de producir efectos jurídicos, que causa daño a otro, crea para su autor la obligación de repararlo -artículo 2314 del Código Civil-. Pero además, surge un segundo principio -que es una consecuencia del primero- que consiste en que tras ocasionar el daño, la reparación debe ser integral, según lo dispone el artículo 2329 inciso 1° del Código Civil. En consecuencia, no existiendo un nexo obligatorio o vínculo jurídico preexistente entre las partes por incumplimiento de una obligación contraída, todo hecho culpable o doloso que causa daño a otro da origen a la responsabilidad extracontractual” (Sentencia Rol 1958-2015, Corte de Apelaciones de San Miguel).

En el otrosí de su presentación, **contesta la demanda reconvenzional**, solicitando su rechazo con costas.

Expone que los demandantes reconvenzionales arguyen que a su representado le cabría la responsabilidad extracontractual en virtud de supuestos hechos ilícitos cometidos, indicando una serie de normas legales, basando esta acción por abuso del derecho.

Sostiene que el movimiento del aparataje jurisdiccional que el señor López ha activado, ha sido solo en favor de la búsqueda de justicia que invoca, no como fue utilizado por los hoy demandantes reconvenzionales. En ese sentido, da por reproducidos los hechos y argumentos de derecho descritos en la demanda de fojas 1.

Añade que, mal podría atribuirse a su representado como autor de daño respecto de los demandantes reconvenzionales, más aun, invocando cifras monetarias fuera de todo fundamento, basándose en meras conjeturas respecto a perjuicios sufridos.

Concluye que no se establece ninguno de los requisitos legales para hacer procedente la responsabilidad invocada.

DUPLICA Y REPLICA DEMANDA RECONVENZIONAL



A fojas 272 los apoderados de la parte demandada evacúan la **dúplica**, reiterando los hechos más relevantes expuestos en la contestación de la demanda.

Alegan que el demandante presentó ante el 7° Juzgado de Garantía la querella criminal RIT 6988-2014 (basada en hechos que fueron luego copiados y pegados para la interposición de esta demanda), que terminó por sobreseimiento definitivo, pues los hechos no eran constitutivos de delito, frente a lo cual, el demandante apeló. Al respecto, la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 8 de agosto de 2016, confirmó la resolución apelada.

Indican que el demandante ya había interpuesto dos acciones penales previas por delitos contra el honor, y asimismo había interpuesto una querella contra los testigos de la causa original seguida en su contra. Esto, da cuenta que es el demandante quien ha abusado del sistema judicial con el fin de acosar y hostigar a los demandados.

Respecto de la excepción de prescripción, reiteran que concurren todos los requisitos necesarios para que sea declarada, pues los hechos dañosos denunciados por el demandante datan del año 2006, es decir, prácticamente diez años atrás a la fecha de notificación de la presente acción.

En cuanto a la excepción de falta de legitimación pasiva, insisten en que los demandados actuaron dentro del ámbito del derecho de petición y de acción que consagra la Constitución y, por lo tanto, el hecho dañoso que en realidad alega la contraria es el resultado de la actividad judicial efectuada por los tribunales que conocieron de las acciones criminales interpuestas.

En relación a la excepción de falta de requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual, reiteran que no existe un uso malicioso ni abuso del derecho y de la justicia por parte de sus representados, pues su actuar se encuadra dentro del marco de la ley y de las exigencias mínimas del derecho a accionar. Así, la interposición de las querellas cuestionadas obedeció a que los



antecedentes que las fundaban daban cuenta de un delito que ameritaba un pronunciamiento judicial. En definitiva, no puede haber hecho dañoso en actuaciones de los tribunales de justicia, sobre todo si se trata de un proceso del tipo inquisitivo, en el que los intervinientes solo tienen derecho a solicitar diligencias.

Exponen que tampoco existe culpa de sus representados en los hechos imputados, ni daños que resarcir. En efecto, el ejercicio legítimo de una acción, de por sí, no genera daño alguno, mientras se enmarque en el derecho constitucional de petición, como ocurre en la especie.

Agregan que, por otra parte, si el actor estima que la duración del juicio fue desproporcionada, y que las resoluciones judiciales dictadas por los tribunales le causaron algún daño, su acción debió dirigirse en contra de éstos, y no contra sus representados, quienes tuvieron que atenerse de igual manera a los tiempos judiciales, en una época donde estaba cambiando el sistema de enjuiciamiento penal en todo el país. En resumen, el supuesto daño alegado por el actor es la consecuencia inmediata y directa de la actividad jurisdiccional del Estado, carga a la que estamos todos los habitantes de la República sometidos, y no del actuar legítimo de sus representados.

Por último, aseguran que no existe relación de causalidad entre los hechos imputados a sus representados y el daño alegado por el actor. Si los demandados no han cometido hecho dañoso alguno, mal podría existir un perjuicio que reparar, siendo inexistentes ambos elementos. Por tanto, menos existe relación de causalidad.

En el otrosí de su presentación, evacúan la **réplica de la demanda reconvencional**, reiterando que quien ha utilizado el sistema judicial para hostigar y amedrentar a sus representados ha sido, justamente, el demandado reconvencional, pues ha abusado sistemáticamente del derecho y de la justicia a través de la interposición de injustificadas acciones criminales; y se remite a los



hechos y argumentos de derecho ya expuestos en la demanda reconvenzional y contestación de la demanda principal.

DUPLICA RECONVENZIONAL

A fojas 291 el apoderado del demandante y demandado reconvenzional, evacúa la **dúplica reconvenzional**, en los siguientes términos.

Asegura que queda en total evidencia que las acciones criminales iniciadas en contra de López Cid por los ahora demandados principales, Bittelman y Millas, obedecían a una sola motivación: vengarse del ex trabajador, a quien se le había pagado una importante suma de dinero (\$23.250.000) junto con su desvinculación voluntaria y que se estaba convirtiendo en un serio competidor. Este hecho adquiere real dimensión si se consideran los lazos familiares existentes entre las partes (Marcia Millas Ovalle es hija de la hermana de la esposa de López Cid).

Insiste en que los demandados Bittelman y Millas son los únicos responsables en el procesamiento del demandante principal López Cid, dado que el tribunal no actuó de oficio, como señala equivocadamente la defensa de los demandados, a saber:

- a) Hubo una querella inicial, basada única y exclusivamente en una auditoría que nunca fue parte del expediente.
- b) Hubo testigos que faltaron a la verdad.
- c) Hubo negativa a colaborar con el perito designado por el tribunal señor Iván Cifuentes Concha y con el Laboratorio de Criminalística de la PDI.
- d) Cuando la Corte de Apelaciones revocó el auto de procesamiento y el tribunal decidió cerrar el sumario, aportaron nuevos antecedentes que lo reabrió.
- e) Acusan y demandan civilmente.
- f) Apelan de la sentencia absolutoria (Rol 1549-2013).
- g) Recurren de casación en el fondo respecto de la sentencia confirmatoria de la Corte de esta ciudad, ante la Corte Suprema (Rol 14839-2013).



Aclara que entre las partes se ejercieron diversas acciones, a saber:

a) Querella por injurias y calumnias en contra de Ricardo Bittelman ante el 8° Juzgado de Garantía, que fue sobreseída con costas (Rit 2795-2008 del 14 de abril de 2008).

Explica que esta querella corresponde a hechos completamente ajenos a la causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, pues se relaciona con los siguientes hechos.

Narra que el 18 de abril del año 2007, Televisión Nacional de Chile emitió el programa “Esto no tiene nombre”, conducido por el periodista Iván Núñez, el que en términos simples y concretos, develaba la existencia de múltiples quejas de diversas personas que habían sido atendidas por el Dr. Bittelman y que se sentían víctimas de aquel, por los nefastos resultados que les habían provocado las intervenciones quirúrgicas a que habían sido sometidas por el facultativo.

Indica que en dicho programa, se expuso la existencia de diversas acciones judiciales en contra del facultativo, iniciadas por sus pacientes, y en su parte final, el querellado Bittelman fue entrevistado por el conductor para que respondiera sobre los cargos que se le formulaban.

Señala que en el curso de la aludida entrevista, el querellado mencionó a Patricio López Cid en varias oportunidades, atribuyéndole la responsabilidad de lo que le estaba ocurriendo.

Hace presente que el delito de injurias y calumnias por el cual se le sometería a proceso a Bittelman es un delito de acción privada, correspondiéndole a la parte querellante efectuar las diligencias útiles para dar curso al proceso. Así, la inactividad en el procedimiento por más de 30 días, producirán el abandono de la acción privada.

Afirma que el abogado patrocinante de la causa, cometió el error de dejar pasar más de 30 días sin efectuar diligencias, lo que le permitió al querellado Bittelman pedir el abandono del procedimiento y



de esa manera burlarse una vez más de la justicia, sin que el tribunal siquiera conociera de los hechos que habían originado la querella.

b) Querella por injurias y calumnias contra Marcia Millas ante el 4° Juzgado de Garantía (Rit 2922-2006 del 12 de mayo de 2006), que terminó en absolución, con costas.

Sostiene que, nuevamente, los hechos que originaron esta querella no tienen nada que ver con la causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago.

Explica que esta querella tiene que ver con un correo electrónico enviado por Marcia Millas Ovalle a diversas personas pertenecientes al círculo familiar de ambas partes, y en el cual emite una serie de comentarios respecto del demandante, que solo pueden de calificarse de injuriosos.

Reconoce que, en este procedimiento, a pesar de la extensa prueba rendida por el querellante y los testimonios de varias personas, el tribunal dictó sentencia absolutoria.

c) Querella ante el 7° Juzgado de Garantía, contra los testigos aportados por Bittelman y Millas en la causa penal que se siguió en el 32° Juzgado del Crimen, que terminó con la decisión de no perseverar comunicada por el Ministerio Público.

Indica que este procedimiento sí tiene que ver con la presente demanda. Estaba dirigido contra los tres testigos presentados por los querellantes Bittelman y Millas, y que dieron falsos testimonios reiteradamente durante el proceso.

Denota que, a pesar de los antecedentes aportados, el fiscal a cargo nunca tuvo la intención de investigar los hechos. Tanto es así, que a tan solo 35 días de presentada la querella, con fecha 15 de mayo de 2014, el fiscal decretó el cierre de la investigación y pidió que se fijara la audiencia de sobreseimiento definitivo.

d) Querella ante el 7° Juzgado de Garantía contra Ricardo Bittelman Saporta y Marcia Millas Ovalle, por el delito de querella calumniosa, que fue sobreseída definitivamente (RIT 6988-2014).



Explica que, al igual que la causa mencionada en el punto anterior, también tenía que ver con los hechos relacionados con la demanda actual y su investigación quedó en manos del mismo fiscal (que investigaba los falsos testimonios), quien actuó de igual forma: a tan solo 35 días de presentada la querella, decretó el cierre de la investigación y pidió se fijara la audiencia de sobreseimiento definitivo.

Finaliza señalando que los demandados, demandantes reconconvencionales, Bittelman y Millas, durante los últimos once años han cometido diversos ilícitos en contra del demandante principal, demandado reconconvencional, López Cid, y por diversas razones han salido impunes en cada ocasión que han sido denunciados ante la justicia, lo que en esta oportunidad debe sancionarse.

A fojas 296 se llevó a efecto la audiencia de conciliación, con la asistencia de ambas partes, sin producirse acuerdo.

A fojas 300 se recibió la causa a prueba.

Excepción de Cosa Juzgada

A fojas 725 el apoderado de los demandados, opone la excepción anómala de cosa juzgada.

1. Cosa juzgada en relación al hecho central de la demanda: Presentación de querella como acto delictivo destinado a causar daño al demandante principal, ya fue objeto de sentencia firme y ejecutoriada.

Sostiene que el actor principal, no conforme con el pronunciamiento de costas y la consecuente afirmación de que su parte tenía motivo plausible para ejercer la acción penal impetrada, en el año 2014 presentó una querella criminal en contra de los mismos demandados Marcia Millas y Ricardo Bittelman, basada en los mismos hechos de esta demanda. En efecto, la identidad de sus respectivos fundamentos fácticos es tal, que el grueso de la descripción de hechos de la demanda de estos autos es sencillamente idéntica a los hechos que motivaron dicha querella, resultando evidente que se trata de un verdadero *copy paste* de dicha presentación.



Indica que la referida querella dio lugar a la causa RIT 6988-2014, seguida ante el 7° Juzgado de Garantía, quedando la investigación a cargo del Fiscal Patricio Millán de la Fiscalía Local Centro Norte. En esta, Patricio López Cid imputó a sus representados el delito de presentación de querella calumniosa, que consiste precisamente en utilizar de manera torcida el sistema judicial, para imputar hechos falsos a una persona e involucrarlo de forma malintencionada en un proceso penal, y que se encuentra tipificado en el artículo 211 del Código Penal.

Reitera que el fundamento de la querella era el mismo que la presente demanda. Así, el demandante usa exactamente las mismas expresiones, reproduciendo en esta demanda los párrafos “1.- Antecedentes previos”; “2.- Término de la Relación Laboral”; “3.- Centros Médicos Darsalud”; el más relevante “4.- Uso y abuso de la Justicia para fines personales”; y luego el “5.- Sentencia Absolutoria”.

Afirma que luego de investigados los hechos por el Ministerio Público y la PDI, el Juzgado de Garantía decretó el sobreseimiento definitivo en la causa penal en cuestión, basándose en lo prescrito por el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, que los hechos imputados e investigados no son constitutivos de delito.

Señala que contra dicha resolución, se alzó el demandante mediante un recurso de apelación, que concluyó con la confirmación de lo resuelto por la Corte de Apelaciones, con fecha 8 de agosto de 2016.

Refiere que, en lo pertinente, el fallo del Juez de Garantía determina que la interposición de la querella por abuso de firma en blanco en su oportunidad, no fue un hecho constitutivo de delito, de manera que de acuerdo al artículo 250 letra a), se decretó el sobreseimiento definitivo y total de la causa.

Advierte que lo anterior es de suma importancia para la presente causa, por cuanto, nuestro sistema jurídico no permite a una persona pretender que dos tribunales dicten sentencias contradictorias



al afirmar la existencia de un hecho que a su juicio configura un delito penal y civil.

Cita el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, que señala:

“Las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo, sólo producirán cosa juzgada en materia civil, cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes:

1ª La no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso. No se entenderán comprendidos en este número los casos en que la absolución o sobreseimiento provengan de la existencia de circunstancias que eximan de responsabilidad criminal”.

Sostiene que esta primera hipótesis, relativa a que el hecho investigado no es constitutivo de delito, es precisamente el caso de lo dispuesto en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal; y agrega que conforme consta del certificado emitido por el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se determinó que la presentación de la querella por parte de Ricardo Bittelman y Marcia Millas en contra de Patricio López Cid, no fue un hecho constitutivo de delito.

Manifiesta que, en consecuencia, se trata de un pronunciamiento que -al tenor de la disposición procesal civil invocada- produjo efecto de cosa juzgada material en la presente causa. Por ello, este tribunal no puede emitir un pronunciamiento contradictorio en términos de afirmar, como pretende el actor, la existencia de un delito como fuente de la responsabilidad civil extracontractual. En otras palabras, es un hecho jurídico y procesalmente imposible de contradecir, que al presentar la querella motivo de la presente demanda, los demandados no cometieron un hecho delictivo.

Asegura que, en consecuencia, no hay (ni procesalmente puede haber) un hecho ilícito desplegado con la intención positiva de inferir daño o injuria al demandante, como éste ha argumentado y



pretende se declare en definitiva. Afirmar aquello sería vulnerar la autoridad de cosa juzgada.

Añade que el efecto de esta excepción es aún más severo y extensivo. El artículo 180 del Código de Procedimiento Civil dispone: *“Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento”*. Por ello, no se puede considerar: a) la pruebas ofrecidas por la contraria en relación este hecho; b) las alegaciones que puedan contradecir lo ya discutido en la causa penal; ni c) las alegaciones que puedan contradecir los hechos que le sirvieron de fundamento al sobreseimiento definitivo.

Asevera que entonces, en esta sede se debe tener como un hecho fijado con autoridad de cosa juzgada, que la interposición de la querella objeto de esta demanda no fue calificado como un hecho ilícito; y además, se debe tener presente que a diferencia de lo que ocurre en materia civil, donde el texto de lo demandado establece el marco que define la litis, en materia penal, los hechos denunciados o materia de una querella sí autorizan a que en la respectiva investigación se puedan detectar otros hechos distintos, siendo luego el Ministerio Público el llamado a formalizar y acusar por cualquiera de los hechos que haya investigado, y el Juzgado de Garantía o Tribunal de Juicio Oral el llamado a juzgarlos.

Señala que, en caso de sobreseimiento total y definitivo, como se pronunció en la especie, este abarca todos los hechos que pudieren ser constitutivos de delito. De ahí que la jurisprudencia procesal penal en la materia, indique que se trata de un pronunciamiento aún más exigente que una sentencia absolutoria. Esto tiene gran importancia, por cuanto la querella describió el conjunto de hechos correspondientes a actuaciones procesales de los demandados, indicando que ellos corresponden a acusaciones calumniosas.



Afirma que el sobreseimiento y, en consecuencia, el efecto de cosa juzgada sobre la presente causa, al tenor del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, aborda el conjunto de afirmaciones y alegaciones que el entonces querellante (hoy demandante) plasmó en su querella. Esto implica que todos los hechos que el entonces querellante incluye como delictivos, por corresponder a un “abuso de la justicia para fines personales”, fueron juzgados y no corresponden a hechos ilícitos.

Expone que, tal es el caso de la presentación de las querellas a que alude en su demanda, a saber, la entablada con fecha 17 de abril de 2006 por delitos informáticos, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 2259-2006; la presentada con fecha 5 de junio de 2006 por el delito de estafa, ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, Rol 82-2006; y la entablada en agosto de 2006 por el delito de abuso de firma en blanco, ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, RIT 3240-2006.

Hace presente que lo mismo ocurre con la alegación respecto de la presentación de prueba falsa consistente en un “informe o auditoría inexistente” y todo lo que expone al respecto; lo que señala también como presentación de prueba falsa, bajo el título “Negativa a la exhibición de documentos”; lo incluido en los apartados b.1 y b.2.; y la falta de aportación de documentos que reclama el perito Iván Cifuentes Concha.

Denota que todos estos hechos incluidos en la demanda de autos como presuntos delitos civiles, fueron denunciados a la justicia penal mediante una querella, y no obstante podían corresponder a los delitos de presentación de acusación o denuncia falsa o calumniosa (artículo 211 del Código Penal), presentación de prueba falsa en juicio penal (artículos 209 y siguientes del Código Penal) u obstrucción a la justicia (Ley 19.077), el tribunal declaró que esos hechos no fueron delictivos. Por lo tanto, no pueden considerarse en un proceso civil, como delito fundante de responsabilidad extracontractual.



Hace presente que en la sentencia interlocutoria que declaró que en la causa penal, los hechos que fueron investigados durante dos años no eran constitutivos de delito alguno, se tuvo en especial consideración que los antecedentes presentados dieron mérito para que los tribunales dictaran resoluciones fundadas en contra de López Cid: *“hubo antecedentes en ese proceso que llevaron a estimar, resolver y decretar dos resoluciones que me parecen importantes, son sentencias interlocutorias, que resolvieron en primer lugar someter a proceso al imputado, inculpado en el lenguaje antiguo de la justicia del Código de Procedimiento Penal en su oportunidad, resolución que fue confirmada por la Corte, luego se le acusó, se adhirió a esa acusación por parte de la querellante de la época, hoy querellados y hubo una dictación de una sentencia absolutoria (...)”*

Agrega que, asimismo, reparó el tribunal en que la absolución de López Cid ocurrió, no porque sus representados imputaran hechos falsos, sino por la calificación jurídica como conflicto civil y no penal de los hechos, como además porque el sentenciador estimó que no estaba presente el elemento típico del perjuicio: *“el hecho si bien no era constitutivo de delito, no era un hecho falso, era un hecho que obedeció precisamente a una cuestión de naturaleza civil, el incumplimiento o rendición de cuentas, no sé, en definitiva, pero una cuestión de naturaleza civil, que en definitiva y en lo que se refirió al tipo penal en particular de esa causa, no se acreditó el perjuicio, por lo tanto, si no había perjuicio, faltaba un elemento del tipo y sin entrar a precisar o no respecto de participación, lógicamente la decisión, confirmada entiendo por la Corte de Apelaciones en su oportunidad fue la de absolución”*.

Por último, refiere que el tribunal reparó en que el Ministerio Público investigó por dos años los hechos, y los desestimó como comportamientos ilícitos o dolosos: *“por lo tanto, en este entendido y a mayor abundamiento si se quiere y último como letra c, no puede desconocerse en este caso que, la querella se admitió a tramitación en el tribunal el día 11 de abril del año 2014, vale decir ya*



desde hace más de dos años de tramitación más menos, porque el Ministerio Público no perseveró como dijimos en marzo, casi dos años de tramitación, el Ministerio Público tiene la convicción o la imposibilidad más bien, de no poder continuar la persecución penal desde su perspectiva y además como lo ha dicho el señor fiscal que ha comparecido a esta audiencia, no sé si el fiscal titular de la causa, pero sin duda está en conocimiento de lo que es la carpeta, está desde su perspectiva, la del ente persecutor, nada más ni nada menos, el órgano constitucional o el del Estado en definitiva, encargado de la persecución penal a lo que resuelva el tribunal en este sentido, por estas consideraciones entonces, entiende el tribunal que efectivamente, el hecho, la interposición de la querella de abuso de firma en blanco en su oportunidad, no es un hecho constitutivo de delito de manera que se hace lugar a la petición de la defensa y por la causal de la defensa, artículo 250 letra a, se decreta el sobreseimiento definitivo y total de la causa, en relación a la causal subsidiaria, atendido lo resuelto se omite pronunciamiento”.

2. Cosa juzgada en relación al cobro de honorarios de abogados.

Reseña que, en su libelo, al detallar los conceptos que pretende le sean indemnizados, el demandante incorpora, a título de daño emergente, los honorarios de abogados que habrían asumido su patrocinio y defensa en la causa Rol N° 82-2006 del 34° (ex 32°) Juzgado del Crimen de Santiago, que valora en la suma de \$31.000.000.- según se acreditaría de la lectura del escrito presentado por su parte en la causa recién mencionada, con fecha 10 de febrero de 2014.

Indica que en tal sentido, el demandante acompañó en el primer otrosí de su libelo, copia de un escrito presentado al 34° Juzgado del Crimen con fecha 10 de febrero de 2014, en el que se detalla el pago de honorarios por la defensa, suma que asciende a \$31.000.000.-



Denota que en dicho documento, el demandante de autos expresa literalmente que *“los gastos en que he incurrido en pago de honorarios a abogados para mi defensa en la causa 82-2006, son los siguientes”*, para luego indicar que ha pagado honorarios a los abogados señores Jorge Martínez Cornejo, Francisco Moraga Manterola y Cristián Ramírez Tagle.

Señala que consta en los documentos acompañados al proceso por ambas partes, que el actor principal, en su escrito de contestación de la acusación fiscal, adhesión y demanda civil, evacuada en el litigio penal seguido ante el 34° (ex 32°) Juzgado del Crimen de Santiago, solicitó que se condenara en costas personales a la parte querellante. Es decir, formuló por vía incidental la misma pretensión compensatoria que alega en la presente demanda y contra la cual se impetra la presente excepción de cosa juzgada.

Explica que las cuestiones accesorias a un juicio pueden ser objeto de una demanda pura y simple por parte de quien se estima agraviado, o pueden ser resueltas dentro de la propia controversia principal. En efecto, el legislador ha permitido excepcionalmente que algunas materias que no corresponden a la acción principal sean sometidas al conocimiento del mismo tribunal, por motivos de economía procesal. Así, en el caso del incidente de costas, se trata de una pretensión compensatoria que debe ser resuelta por el juez de la causa al momento de dictar sentencia definitiva.

Indica que, en la especie, el demandante principal al contestar la acusación, formuló una petición incidental de costas, incluyendo las costas personales. Es decir, solicitó que se le compensaran las costas personales (artículo 139 del Código de Procedimiento Civil) que corresponden a los honorarios profesionales de los abogados que intervinieron en su defensa.

Sostiene que el tribunal en lo criminal se pronunció sobre esa petición y no accedió, como consta en la sentencia definitiva dictada en la causa Rol N° 82-2006. En efecto, junto con absolver al señor López Cid de los cargos que el propio tribunal le había



formulado, rechazó la demanda civil deducida por la parte querellante, y solo concedió las costas a propósito de esto último. En otras palabras, condenó a la querellante al pago de las costas por el ejercicio de la acción civil, y la absolvió de las costas reclamadas a propósito de la acción penal.

Alega que, no obstante lo anterior, al momento de pedir la tasación de costas en la causa criminal, el actor trató de incluir las costas personales de la acción penal, solicitando la compensación de los honorarios presuntamente gastados para su defensa en tal litigio. Luego, con fecha 3 de marzo de 2014, el Juzgado del Crimen tasó las costas personales de la causa, sin incluir lo alegado por la defensa del señor López Cid en cuanto a los gastos de abogados por la defensa penal, sino que sólo en la parte civil del litigio, tal cual había sido resuelto por la sentencia definitiva de dicha instancia.

Señala que, de hecho, el actual demandante logró una tasación de costas personales de la acción civil ostensiblemente desproporcionada, confundiendo al tasador sobre la cuantía del litigio. Ello porque, pese a que su parte había demandado solo por siete millones de pesos (la cifra nominal de los cheques materia del proceso), el actor pretendió que la cuantía correspondía a varias decenas de millones de pesos. Debido a esto, el tribunal erróneamente tasó las costas de la acción civil en \$11.000.000.-, lo que luego fue corregido por la Corte de Apelaciones, que por resolución de fecha 12 de mayo de 2014, rebajó la tasación y además, aclaró -sin dejar espacio a la duda- que la querellante no fue condenada en costas por la acción penal.

Añade que, López Cid, patrocinado por el mismo abogado que lo representa en estos autos, Cristián Ramírez Tagle, interpuso un recurso de casación en la forma en contra de la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, el que fue declarado inadmisibile con fecha 12 de agosto de 2014.

Hace presente que, de esta manera, son hechos incontrovertibles y completamente conocidos por el actor que:



a) Sometió la petición de compensación de los honorarios de abogados de su defensa en la causa penal, al conocimiento del tribunal del crimen, de forma incidental. Lo hizo a propósito de su contestación de la acusación, solicitando la condena en costas personales de la causa penal a los querellantes.

b) El tribunal del crimen no accedió a dicha condena, ya que conforme dejó en claro la Corte, la sentencia solo accedió a la compensación de las gestiones realizadas para la contestación civil (v.gr. la contestación extemporánea de la demanda civil) por su defensor, el mismo abogado que actualmente lo patrocina.

c) La cuestión quedó aún más clara, cuando al momento de la fijación de las costas, el actor principal intentó incluir en ellas los referidos honorarios de la defensa penal.

d) La cuestión fue luego conocida por la Corte de Apelaciones que se pronunció sobre el punto, y el actor pretendió anular dicho pronunciamiento ante la Corte Suprema, nuevamente sin éxito.

Asegura que sus representados consignaron la suma de \$3.000.000.- en la cuenta corriente del juzgado del crimen que conoció de la causa Rol N° 82-2006, que correspondió a la regulación de costas personales de la causa decretada por la Corte de Apelaciones de Santiago, en la única condena en costas, cual fue la de la acción civil.

Precisa que dicha circunstancia fue comunicada al tribunal del crimen a través de presentación de fecha 23 de septiembre de 2014, teniéndose presente el pago de las costas personales de la causa, por resolución de fecha 1 de octubre de 2014.

Denota que de todo lo dicho, queda de manifiesto que la solicitud de compensación de los honorarios de los abogados que asumieron la defensa de Patricio López Cid en la causa penal Rol N° 82-2006, ya fue conocida latamente en la sede penal a través de una tramitación incidental, bajo idénticos argumentos que los esgrimidos en esta instancia por el actor.



Advierte que intentando soslayar este antecedente, el mismo actor, en su escrito de réplica, expresa literalmente lo siguiente: *“Tan grave consideró el actuar de los demandados en el proceso penal origen de los hechos de autos que fueron condenados -en costas- ejemplarizadamente (sic) en el ámbito civil al rechazar la demanda interpuesta”*. Esto, pone de manifiesto que el demandante pretende ocultar que la circunstancia de la condena en costas de la acción civil, implica precisamente lo contrario de lo que alega, esto es, la exención de la condena en costas de la causa penal, lo cual significa que los querellantes tuvieron amplio mérito para denunciar un hecho que *ex ante* presentaba ostensibles caracteres de delito.

Reitera que, a partir de la solicitud del querellado López Cid para que el Juzgado en lo Criminal condenara en costas a los ahora demandados, y luego a propósito de la tasación de las costas de la demanda civil de la causa Rol N° 82-2006, un tribunal ya conoció y falló, de forma incidental, tal petición en una sentencia interlocutoria firme y ejecutoriada. Lo resolvió luego la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

Explica que, entonces, la solicitud del actor en el presente caso, consistente en la compensación de los gastos efectuados por honorarios de abogados para su defensa en la causa criminal indicada, ya fue completamente tramitada, en idénticos términos que en la presente demanda. Se trata, en consecuencia, de una cosa juzgada.

Precisa que según lo indicado en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, las resoluciones dictadas en la especie por los jueces del fondo, referentes a la condena/absolución y tasación de costas de la causa criminal Rol N° 82-2006, son sentencias interlocutorias, pues han fallado un incidente del juicio -las costas-, estableciendo derechos permanentes a favor de las partes -la tasación y el pago de las mismas-.

Añade que, de acuerdo al artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, las sentencias definitivas o interlocutorias firmes



producirán la acción o la excepción de cosa juzgada; y cita el artículo 177 del mismo texto legal que establece la denominada “triple identidad”.

Respecto a la identidad legal de personas, expone que el presente actor reclamó las costas en la causa criminal Rol N° 82-2006, y está reclamando en la presente que se le compensen los honorarios presuntamente gastados por la defensa efectuada por sus abogados en la causa citada; mientras que al Centro Médico Aurora Limitada e Instituto Oftalmológico Limitada, se les está solicitando el pago de tales costas por idénticos argumentos en ambos procesos (uno ya acabado por sentencia firme y ejecutoriada, y otro en actual tramitación).

Afirma que, de esta manera, existe igual posición jurídica de las personas o partes que han intervenido tanto en el litigio criminal primitivo como en el caso de marras, respecto de la solicitud de que se paguen los honorarios de abogados.

En cuanto a la identidad de la cosa pedida, refiere que la doctrina y jurisprudencia han indicado que el concepto de “objeto o cosa pedida” lo constituye el beneficio jurídico inmediato que se reclama. En la especie, este beneficio consiste en que sus representados sean compelidos a pagarle al actor, lo supuestamente gastado en los honorarios de los abogados que asumieron su patrocinio en la causa criminal Rol N° 82-2006, ascendente a la suma de \$31.000.000.- Tanto en el presente proceso como en el anterior referido, el señor López Cid requiere idéntica pretensión respecto de los honorarios pagados a sus abogados, solicitando la misma suma, dirigiéndose en contra de las mismas personas, y formulando idénticos argumentos que los ya esgrimidos en la causa primitiva, a pesar de existir una expresa resolución al respecto por sentencia interlocutoria firme.

Por último, en relación a la identidad de la causa de pedir, señala que el fundamento inmediato del derecho deducido en juicio es, justamente, la compensación de los honorarios de abogados



supuestamente pagados por el señor López Cid en virtud del patrocinio que éstos habrían asumido en la causa criminal Rol N° 82-2006. El actor ha demandado en estos autos -y en los primitivos de índole penal- el mismo presunto daño, siendo ya resuelto lo actualmente requerido en la sede anterior, negando el tribunal en lo criminal -e incluso la Corte de Apelaciones de Santiago- la compensación de los honorarios pagados por su defensa en la arista penal del litigio.

Concluye que, por lo anterior, existe una evidente cosa juzgada respecto de lo solicitado por el demandante en su libelo, en cuanto requiere la compensación de los honorarios de abogados que presuntamente ha pagado.

Finaliza solicitando tener por interpuesta excepción de cosa juzgada, que sea admitida a tramitación y, en definitiva, se acoja en todas sus partes con expresa condena en costas, respecto de:

a) La pretensión contenida en la demanda principal en cuanto a que se declare como un hecho ilícito y un delito fundante de responsabilidad extracontractual, la presentación y tramitación de las querellas que el actor estimó calumniosas, a saber, la entablada ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 2259-2006, por delitos informáticos, presentada con fecha 17 de abril de 2006; la entablada ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, Rol 82-2006, por delito de estafa y otras defraudaciones, con fecha 5 de junio de 2006; y la entablada ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, RIT 3240-2006, por delito de abuso de firma en blanco, en agosto de 2006.

b) La petición del demandante principal de ser condenados sus representados al pago de la suma de \$31.000.000.- por concepto de daño emergente como indemnización de perjuicios, cifra que correspondería supuestamente a los honorarios de abogados que asumieron la defensa de Patricio Eduardo López Cid en la causa Rol N° 82-2006 del 34° (ex 32°) Juzgado del Crimen de Santiago.



A fojas 852 la parte demandante evacuó el traslado conferido respecto de la excepción de cosa juzgada opuesta por los demandados, solicitando su rechazo, con costas.

En cuanto a la cosa juzgada que afectaría al hecho central de la demanda de autos, a saber, la presentación de la querella como acto delictivo, explica que en el año 2014, su parte interpuso una querella criminal por acusación calumniosa en contra de Ricardo Bittelman y Marcia Millas, ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, RIT 6988-2014, basada en la carencia de objetivo y mal uso de la justicia a propósito de la querella de los demandados que dio origen a la causa ROL 82-2006 del 34° (ex 32°) Juzgado del Crimen.

Señala que la demanda de autos se basa en el hecho delictivo civil de la mala utilización de la justicia en descrédito de su parte. Por ello, no puede configurarse la excepción de cosa juzgada total alegada, ya que los hechos de la demanda dicen relación con la responsabilidad aquiliana alegada y no con el delito penal de acusación calumniosa (el que se entendió no configurarse).

Sostiene que, además, la causa de pedir del presente juicio es diversa a la de la querella por acusación calumniosa; acá se configura responsabilidad civil extracontractual, no responsabilidad penal proveniente de un delito, por cuanto no puede configurarse la excepción interpuesta.

Respecto a la cosa juzgada alegada en relación al cobro de honorarios de abogados, indica que la interpretación que hace la parte demandada es errónea, al intentar argumentar que dicho monto fue discutido en juicio diverso.

Afirma que la causa de pedir es diferente, toda vez que no se están demandando las costas del procedimiento ante el 34° (ex 32°) Juzgado del Crimen, sino que se demanda la repetición de lo que se pagó como daño efectivamente causado a propósito de los hechos de la demanda de autos. Así entonces, el monto demandado corresponde a daño emergente, desembolsado por parte del



demandante principal de autos producto de los hechos descritos en el libelo pretensor.

Reseña que, respecto a la causa de pedir como requisito de la excepción de cosa juzgada, la jurisprudencia ha señalado que *“siguiendo a la doctrina especializada, diremos que para determinar cuándo una resolución tiene el mérito de impedir la renovación del debate sobre un tema en el que ya existe cosa juzgada, nuestro Código siguió la doctrina de las tres identidades, por influencia de la doctrina francesa, lo que implica que ésta se configurará sólo cuando coincidan todos sus componentes, esto es, los mismos sujetos, causa de pedir y cosa pedida, ya que como ha dicho esta Corte, basta la ausencia de uno solo de ellos para que la excepción de cosa juzgada carezca de fuerza legal. (Romero, Alejandro, “La Cosa Juzgada en el proceso civil chileno”, Edit. Jur., 2002, pag.54). En lo que respecta a la identidad legal de persona, ésta se cumple cuando existe la misma calidad jurídica entre los sujetos que intervienen en ambos procesos, aun cuando cambien de rol; la exigencia es de identidad jurídica, no física. Tradicionalmente se ha entendido que tienen la calidad de parte, los sujetos de la relación jurídico - procesal, esto es, demandante y demandado, y también aquellos que intervienen voluntariamente en un proceso; cabe agregar, sin embargo, que se ha aceptado que también pueden alegar esta identidad jurídica quienes, si bien técnicamente no son partes, tienen algún grado de vinculación con el que sí lo fue. Asimismo, la sentencia puede beneficiar a otras personas a las que se permite invocar en su beneficio la cosa juzgada. El límite objetivo de la cosa juzgada, a su turno, está dado por la identidad de la cosa pedida y de la causa de pedir exigida por la norma antes citada, y significa que opera cuando el segundo proceso tiene un objeto idéntico al primero. Debe tenerse presente que la identidad objetiva se produce normalmente en la parte resolutive de la sentencia, es decir, en aquella que decide el objeto del proceso y, desde esa perspectiva, interesa destacar que el análisis comparativo se debe realizar entre lo resuelto en una sentencia anterior y la nueva*



acción deducida en un proceso posterior; en rigor, no es una identidad entre demandas, sino entre una sentencia anterior -que ya juzgó el tema- y una nueva acción, deducida en una demanda que pretende plantear el mismo objeto procesal” (Corte Suprema, ROL 31931-2014, de 6 de enero de 2016).

A fojas 984 se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO A LAS TACHAS DE TESTIGOS:

PRIMERO: Que a fojas 601, la parte demandada tacha a la testigo doña Verónica Ovalle Reyes, en base a la causal del artículo 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto ha reconocido ser cuñada del demandante, es decir, los vincula una relación de parentesco por afinidad en el segundo grado.

SEGUNDO: Que la parte demandante solicita el rechazo de la tacha en atención a los siguientes fundamentos.

En primer lugar, indica que el sistema de tachas es un régimen al margen de lo que se viene conociendo como libertad probatoria, de acuerdo al cual el juez debe conocer íntegramente los hechos, independientemente de la eventual vinculación que pudiese tener el testigo con la parte que lo presenta; y añade que se trata de un sistema inconstitucional que afecta el debido proceso en la fase de la decisión.

En segundo lugar, señala que la inhabilidad planteada dice relación con el parentesco que tiene la testigo con el demandante, lo que es efectivo. Sin embargo, la finalidad establecida por el legislador no se cumple en este caso, ya que atendida la materia discutida, es evidente que nos encontramos en un conflicto de naturaleza civil derivado de las relaciones de familia que vincula a las partes. Así, la testigo es hermana de la madre de la demandada Marcia Millas Ovalle.

Y en tercer lugar, manifiesta que la parte contraria presenta en su lista de testigos a don Patricio Millas Ovalle, quien es hermano



de la demandada, por lo que la inhabilidad planteada no puede hacerse valer en conformidad al inciso final del artículo 358.

TERCERO: Que efectivamente la testigo reconoce ser hermana de la cónyuge del demandante, es decir, su cuñada. Por ello, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 27 y 31 del Código Civil, la testigo es pariente en segundo grado de afinidad de quien la presenta, circunstancia prevista como causal de inhabilidad en el artículo 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, por lo que, no siendo los argumentos expuestos por el demandante idóneos para desestimar la tacha –como se dirá a continuación– la tacha debe ser necesariamente acogida.

CUARTO: Que el primer argumento del demandante para que la tacha sea rechazada, no resulta aceptable, por cuanto en materia civil –y especialmente en el ámbito de la prueba testimonial– sigue plenamente vigente el sistema de prueba legal tasada, que implica el apego y respeto por parte del juez a las leyes reguladoras de la prueba, las cuales establecen los medios de prueba utilizables en el proceso, su valor, la forma en que las partes deben llevarlos a cabo y la manera como el tribunal debe apreciarlos o ponderarlos, por lo que resulta inadmisibles para esta sentenciadora, dejar de aplicar la causal de inhabilidad invocada, por las razones que el demandante alega.

En cuanto al segundo fundamento esgrimido por el demandante, tampoco resulta admisible, debido a que, teniendo presente lo anterior, la norma en cuestión no hace diferencia alguna según la naturaleza del conflicto sometido a decisión del tribunal.

Que finalmente, el tercer argumento esgrimido consiste en que la parte demandada ofrece como testigo a don Patricio Millas Ovalle, quien también estaría inhabilitado para declarar por la primera causal del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, esto es, la relación de parentesco con la parte que lo presenta.

El inciso final del artículo en comento, señala expresamente que: *“Las inhabilidades que menciona este artículo no*



podrán hacerse valer cuando la parte a cuyo favor se hallan establecidas, presente como testigos a las mismas personas a quienes podrían aplicarse dichas tachas”.

Entonces, del tenor literal de la norma, se entiende claramente que la restricción para hacer valer una tacha es aplicable cuando ambas partes presentan a la misma persona como testigo, situación que no se configura en la especie. Así, el demandante podría hacer uso de esta regla –para efectos de solicitar el rechazo de la tacha– solo si la parte demandada hubiera presentado como testigo también a doña Verónica Ovalle Reyes, que es la persona respecto de quien se alega la inhabilidad.

QUINTO: Que entonces, encontrándose la testigo doña Verónica Ovalle Reyes afectada por la inhabilidad contemplada en el artículo 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, la tacha será acogida.

SEXTO: Que a fojas 610, la parte demandada tacha al testigo don Ismael Sanhueza Villablanca, por la causal establecida en el artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, basada en su íntima amistad con el demandante, por cuanto el testigo ha declarado conocerlo desde hace veinte años y ha reconocido expresamente visitar su casa de forma frecuente y constante, mantener contacto telefónico semanalmente, conocer a su familia y también las circunstancias familiares que rodean su vida cotidiana, esto es, el día a día de la vida de don Patricio López Cid.

Añade que el testigo ha reconocido expresamente que el contacto directo y constante con don Patricio López Cid, se debe exclusivamente a materias de índole personal y mundanas, sin hacer referencia a situaciones de índole laboral o económicas. Por tanto, existe entre el testigo y el demandante principal una relación de íntima amistad.

SÉPTIMO: Que el demandante evacúa el traslado conferido, solicitando el rechazo de la tacha, en razón que de la declaración del testigo no se han manifestado los hechos en que se



fundamenta su íntima amistad con su parte, que permitan al tribunal calificar la gravedad que exige la disposición invocada.

Agrega que la argumentación contraria se basa en meras especulaciones que carecen de respaldo en los hechos declarados por el testigo. Así, el testigo ha dicho ser amigo del hijo del actor y no de éste. Ha dicho conversar periódicamente cosas de orden social, por ejemplo, sobre cómo se encuentra de salud, cuestiones que culturalmente en nuestra sociedad son preguntadas usualmente, sin necesidad de ser íntimos amigos. Ha dicho también que ha visitado el hogar del actor, pero ello debe entenderse dentro del contexto de la amistad referida con su hijo y no con el actor. Y ha manifestado conocer familiarmente a don Patrio López Cid, sin indicar la contraria que aspecto de dicha cuestión pudiese afectar su imparcialidad.

Refiere que se ha fallado que la noción de amistad íntima es más amplia que la de simple amistad, y no se configura el concepto de “amigos cercanos” que pretende la contraria, ya que los hechos que la sustentan no permiten colegir la inhabilidad del artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil.

OCTAVO: Que la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil comprende a los testigos que tengan íntima amistad con la persona que los presenta, de manera que, de acuerdo a la norma legal, para que se configure no basta con una mera amistad, sino que con una amistad “íntima”, la que debe manifestarse, además, por “hechos graves”.

Así las cosas, el concepto de amistad íntima que se exige para legitimar la tacha, es más amplio que el de simple amistad, debiendo justificarse por hechos externos de gravedad. Y, de lo expresado por el testigo, surgen elementos suficientes para configurar la tacha.

NOVENO: Que al respecto, si bien el testigo manifiesta que es amigo del hijo de don Patricio López Cid, agrega que ello le llevó a una convivencia familiar, lo que refleja que su vínculo se extendió a la familia en general, pudiendo comprenderse por tanto,



que mantiene una amistad también con el demandante, y no solo con el hijo de éste.

Luego, en cuanto a las características de esa amistad, el testigo indica que conoce al demandante desde hace veinte años, que visita su casa cada dos meses, que hablan por teléfono una vez a la semana, acerca de temas personales, y que conoce a su familia y circunstancias personales que rodean su vida cotidiana.

De esta manera, los hechos expuestos por el testigo revelan una estrecha relación de amistad con el demandante, que se ha mantenido durante veinte años, y que se caracteriza por el contacto habitual entre ambos, pues el testigo visita la casa del actor y además conversan telefónicamente con habitualidad, lo que constituyen hechos graves que dan cuenta de una íntima amistad, configurándose la causa invocada, y por ello, la tacha será acogida.

DÉCIMO: Que a fojas 615, la parte demandante tacha al testigo don Patricio Millas Ovalle, en base a la causal del artículo 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, en razón que ha declarado ser hermano de doña Marcia Millas Ovalle.

UNDÉCIMO: Que la parte demandada solicita el rechazo de la tacha, en razón que nos encontramos ante un conflicto de índole familiar, en la especie, el tío político de una de las demandadas, la demanda a ésta, a su marido y a algunas de sus sociedades.

Señala que en la audiencia testimonial de 23 de mayo de 2017, en estos mismos autos, la parte demandante presentó como testigo a doña Verónica Ovalle Reyes, quien reconoció ser cuñada de don Patricio López Cid, es decir, reconoció la existencia de una relación de parentesco por afinidad en segundo grado.

Indica que, de lo anterior, se desprende que la parte contraria, que es aquella en cuyo beneficio se establecen las tachas en este acto, presentó como testigo a una persona a quien se le puede aplicar la causal del artículo 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, situación que su parte hizo valer en la oportunidad procesal



respectiva, por lo cual, la tacha no puede ser acogida en virtud de lo dispuesto en el inciso final del artículo referido.

DUODÉCIMO: Que el testigo reconoce ser hermano de doña Marcia Millas Ovalle, es decir, es cuñado de la parte que lo presenta como testigo, el demandado don Ricardo Bittelman. Por ende, según los artículos 27 y 31 del Código Civil, el testigo es pariente en segundo grado por afinidad de quien lo presenta, circunstancia prevista como causal de inhabilidad en el artículo 358 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, y que conlleva acoger la tacha.

DÉCIMO TERCERO: Que en relación al argumento esgrimido por la parte demandada, consistente en que la tacha debiera ser rechazada debido a lo dispuesto en el inciso final del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, este no resulta admisible, por cuanto, de acuerdo a lo ya razonado en lo pertinente del considerando cuarto, la referida norma está establecida para el caso en que ambas partes presenten como testigo a la misma persona, es decir, que solo resultaría procedente si don Patricio Millas Ovalle hubiera declarado también como testigo de la parte demandante, lo que no ocurre en la especie.

DÉCIMO CUARTO: Que a fojas 630, la parte demandante tacha al testigo don Renán Colvin Treswalt, por la causal del artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, en razón que este mantiene una amistad íntima con la parte que lo presenta, la que se configura por hechos graves, esto es, su relación a partir del Club Aéreo y ser ambos pilotos.

Agrega que el testigo dice conocer al demandado desde hace diecisiete años, que almuerzan juntos o acompañados al menos dos veces por semana, que ha respondido preguntas de orden legal sin ser su abogado, y que han volado juntos, compartiendo la actividad de ser pilotos. De esta manera, la intimidad se refleja en la confianza de asumir responsabilidades a la hora de volar juntos, lo que implica un conocimiento más allá de lo meramente superficial que permite realizar esta actividad.



Hace presente que quienes no son íntimos, no almuerzan dos a tres veces por semana juntos por los últimos diecisiete años, ni responde consultas legales sin ser contratado profesionalmente.

DÉCIMO QUINTO: Que la parte demandada solicita el rechazo de la tachá, por cuanto el testigo ha señalado pertenecer al Club Aéreo de Santiago y únicamente en ese contexto conoció y se relaciona con el señor Bittelman. Además, ha manifestado que no habla con él de forma cotidiana y es más, ha reconocido que su relación es absolutamente esporádica y separada en el tiempo.

Reseña que el testigo ha indicado que almuerza en muy contadas ocasiones con el señor Bittelman y siempre rodeado de otros miembros del Club. Desde ya, presumir por la contraria, que este solo hecho constituiría una íntima amistad, es extrapolar lo dispuesto por la norma invocada, que exige que la íntima amistad se manifieste por hechos graves, siendo que el testigo y el señor Bittelman son solo socios de un Club de Aviación del cual participan cientos de personas más.

Denota que el hecho de que el testigo y el señor Bittelman sean pilotos y hayan volado juntos, solo en dos ocasiones desde que se conocen hace diecisiete años, no constituye bajo ninguna circunstancia un hecho grave que demuestre una íntima amistad. Pensar en la forma que lo expone la contraria, nos lleva al absurdo de presumir que todo piloto y copiloto en cualquier vuelo comercial o privado, son necesarios íntimos amigos, por el solo hecho de compartir cabina. Este argumento de la contraria es ilógico, y no sustenta la tachá planteada.

Indica que el hecho de que el testigo haya contestado un par de consultas legales en un par de ocasiones, desde que se conocen con el señor Bittelman, no constituye en lo absoluto un hecho grave que fundamente una íntima amistad entre ellos. Por el contrario, el testigo ha señalado expresamente que no tiene ninguna relación con el señor Bittelman más allá de que ambos participan en un club de aviación, por lo que las consultas referidas pueden referirse a



cualquier materia en la que el señor Bittelman haya podido tener alguna duda y haya querido recibir una mera opinión.

DÉCIMO SEXTO: Que a fojas 643, la parte demandante tacha al testigo don Eustaquio Manis Machera, por la causal del artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, en razón que este mantiene una amistad íntima con la parte que lo presenta, la que se configura por hechos graves, esto es, su relación a partir del Club Aéreo y ser ambos pilotos.

Refiere que el testigo dice conocer al demandado desde hace quince años, que almuerzan juntos o acompañados al menos dos veces por semana, que han volado y participan de una actividad juntos, esto es, la de ser piloto, y que se comunican semanalmente, ya sea por vía telefónica o por mensajería.

Agrega que esa intimidad se refleja incluso en la confianza de asumir responsabilidades a la hora de volar juntos, lo que implica evidentemente un conocimiento más allá de lo meramente superficial. Quienes no son íntimos no almuerzan dos a tres veces por semana juntos por los últimos quince años, quien no es íntimo no se comunica semanalmente para saber de su estado.

Concluye que las mencionadas circunstancias constituyen hechos que configuran esta causal, por lo que el testigo carece de la imparcialidad que el legislador exige para dar un veraz y auténtico testimonio.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que la parte demandada solicita el rechazo de la tacha, por cuanto el testigo ha señalado pertenecer al Club Aéreo de Santiago y únicamente en ese contexto conoció y se relaciona con el señor Bittelman. Ha manifestado que no habla con el señor Bittelman de forma cotidiana y es más, ha reconocido que su relación es absolutamente esporádica y separada en el tiempo.

Sostiene que el testigo ha señalado que no conoce la casa del señor Bittelman, que nunca se ha juntado con la señora Marcia Millas y que a veces habla con el primero, pero “sin periodicidad alguna”, que almuerza en muy contadas ocasiones con el señor



Bittelman y siempre rodeado de otros miembros del Club. Desde ya, presumir por la contraria, que este solo hecho constituiría una supuesta íntima amistad es extrapolar lo dispuesto por la norma alegada, que exige que la íntima amistad se manifieste por hechos graves, siendo que el testigo y el señor Bittelman son solo socios de un Club de Aviación del cual participan cientos de personas más.

Agrega que el hecho de que el testigo y el señor Bittelman sean pilotos y hayan volado juntos, solo en tres ocasiones desde que se conocen hace quince años, no constituye bajo ninguna circunstancia un hecho grave que demuestre una supuesta íntima amistad. Pensar en la forma que lo expone la contraria, nos lleva al absurdo de presumir que todo piloto y copiloto en cualquier vuelo comercial o privado, son necesarios íntimos amigos, por el solo hecho de compartir cabina. Este argumento es ilógico y no sustenta la tachada planteada.

Refiere que el testigo ha señalado que se ha visto en muy pocas ocasiones con el señor Bittelman, a propósito de los vuelos grupales en donde participan varios socios del Club, lo cual para nada acredita la supuesta íntima amistad alegada por la contraria.

Afirma que el testigo ha señalado expresamente que no tiene ninguna otra relación con el señor Bittelman, más allá de que ambos participan en un club de aviación.

Indica que según la contraria, el testigo hablaría con el señor Bittelman supuestamente “para saber de su estado”, situación que constituye una mera presunción sin asidero alguno en lo declarado, puesto que en ningún momento éste señala la causa de las conversaciones que, sin periodicidad, ha tenido con el señor Bittelman y ello no fue consultado al momento de formular las preguntas de tachada.

DÉCIMO OCTAVO: Que la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 358 N° 7 del Código de Procedimiento Civil comprende a los testigos que tengan íntima amistad con la persona que los presenta, de manera que, de acuerdo a la norma legal, para



que se configure no basta con una mera amistad, sino que con una amistad “íntima”, la que debe manifestarse, además, por “hechos graves”.

Así las cosas, el concepto de amistad íntima que se exige para legitimar la tachá, es más amplio que el de simple amistad, debiendo justificarse por hechos externos de gravedad. Y, de lo expresado por los testigos don Renán Colvin y don Eustaquio Manis, no surgen estos elementos para configurar la tachá, pues si bien ambos dicen conocer a don Ricardo Bittelman desde hace diecisiete y quince años respectivamente, el mero hecho de que dos personas se conozcan por un largo periodo de tiempo, sin visitarse en sus domicilios, comunicarse de manera regular ni conocer a sus respectivas familias, no puede constituir un hecho grave que permita configurar la íntima amistad exigida por la ley.

Por lo demás, los testigos indican que almuerzan con don Ricardo Bittelman unas dos veces por semana, pero ello siempre se da en el contexto de almuerzos con otras personas que también participan del Club Aéreo al que pertenecen. Así, la amistad se verifica solo en dicho ambiente social, sin traspasar a otros ámbitos de la vida privada que permitiera calificar la amistad como íntima.

Por lo tanto, las tachas deducidas a fojas 630 y 643, serán rechazadas por no configurarse la íntima amistad que requiere la ley.

II. EN CUANTO A LA DEMANDA PRINCIPAL:

DÉCIMO NOVENO: Que don Patricio Eduardo López Cid interpone demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, ambas representadas por doña Marcia Luz Millas Ovalle, y también en contra de esta última y de don Ricardo Simón Bittelman Saporta, todos ya individualizados, en atención a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho señalados en lo expositivo de la presente sentencia.



VIGÉSIMO: Que los demandados contestaron la demanda, solicitando su rechazo, en los términos señalados también en lo expositivo de la presente sentencia.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que a fojas 300, se recibió la causa a prueba, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos sobre los que debía recaer, los siguientes:

1. Efectividad de haber incurrido el demandado principal y/o demandado reconvencional en un acto o hecho lícito o ilícito que ha causado daños, en su caso, hechos y circunstancias que lo configuran.

2. Efectividad de que el actuar del demandado principal y/o demandado reconvencional ha causado daños o perjuicios susceptibles de ser indemnizados. En su caso, origen, naturaleza y monto de los perjuicios.

3. Relación de causalidad entre el actuar del demandado y/o demandado reconvencional y los daños y perjuicios.

4. Efectividad que los daños o perjuicios causados resultan imputables únicamente al demandado y/o demandado reconvencional.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que la parte demandante a fin de acreditar los fundamentos de su libelo, rindió prueba instrumental, consistente en:

1. Copia de “Término de contrato y finiquito”, suscrito con fecha 14 de noviembre de 2005 por Ricardo Bittelman Saporta –por sí y en representación de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada– y Patricio López Cid, rolante a fojas 22.

2. Copia de acta de embargo practicado con fecha 25 de junio de 2010, en causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, sobre las acciones y derechos que corresponden a Patricio López Cid sobre la marca Darsalud, agregada a fojas 24 y 357.

3. Copia de escrito presentado por Patricio López Cid en causa Rol 82-2006 del 34° (ex 32°) Juzgado del Crimen de Santiago, con fecha 10 de febrero de 2014, rolante a fojas 25.



4. Copia de Coronariografía practicada en Clínica Santa María al paciente Patricio López Cid, con fecha 20 de agosto de 2006, rolante a fojas 26 y 375.

5. Copia de resolución dictada en causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, de fecha 16 de enero de 2007, por la cual se ordena la realización de un peritaje contable y designa perito, rolante a fojas 28.

6. Copia de informe pericial contable, presentado por el perito contador auditor Iván Cifuentes Concha, en causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, con fecha 21 de junio de 2007, rolante a fojas 30.

7. Copia de informe pericial contable N° 290 de fecha 23 de octubre de 2009, elaborado por el Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones en causa Rol 82-2006 del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, rolante a fojas 74 y siguientes.

8. Copia de informe policial N° 4398/00306 de fecha 10 de noviembre de 2014, remitido por la Policía de Investigaciones a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en causa RUC 1410011440-3, con orden de investigar el delito de falso testimonio, perjurio o denuncia calumniosa, rolante a fojas 94 y siguientes.

9. Copia de sentencia dictada con fecha 2 de agosto de 2013, en causa Rol 82-2006 del 34° (ex 32°) Juzgado del Crimen de Santiago, por la cual se absuelve al procesado Patricio López Cid y se rechaza la demanda civil deducida por Centro Médico Aurora Limitada, rolante a fojas 111 y siguientes.

10. Copia de escritura pública de acuerdo de cumplimiento de sentencia arbitral, otorgada con fecha 23 de diciembre de 2010, por la cual se determina que Patricio López Cid debe ceder o transferir los derechos sociales, acciones y marca comercial que se individualizan, a la Sociedad de Rentas Rucahue y/o a las sociedades del Grupo Darsalud, agregada a fojas 358 y siguientes.



11. Copia de carta remitida por Infante, Valenzuela y Martínez & Cía. Ltda. Abogados a Patricio López, con fecha 2 de noviembre de 2006, informando honorarios, rolante a fojas 363.

12. Copia de escrito de renuncia a patrocinio y poder, presentado por el abogado de Patricio López Cid, con fecha 1 de julio de 2008, en causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen, rolante a fojas 366.

13. Copia de Pacto y finiquito de honorarios, de fecha 18 de noviembre de 2008, suscrito por Francisco Moraga Manterola y Patricio López Cid, por servicios profesionales prestados en relación a la causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, rolante a fojas 367.

14. Copia de escrito de revocación de patrocinio y aceptación, presentado por Patricio López Cid y Francisco Moraga Manterola, en causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, en febrero de 2010, rolante a fojas 369.

15. Copia de convenio de honorarios de fecha 8 de febrero de 2010, entre Patricio López Cid y Cristián Ramírez Tagle, para defensa penal en causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, rolante a fojas 370.

16. Copia de escrito de patrocinio y poder, presentado con fecha 17 de febrero de 2010 en causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, rolante a fojas 371.

17. Copia de escrito presentado por Patricio López Cid, con fecha 10 de febrero de 2014 en causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, dando cuenta de pagos de honorarios a abogados por su defensa, rolante a fojas 372.

18. Copia de carta poder suscrita por don Nasser Khosravi en el Consulado de Chile de Los Ángeles, California, de fecha 21 de marzo de 2006, en donde confiere poder a Patricio López Cid, agregada a fojas 373.



19. Copia de publicación en diario La Segunda, edición del 23 de noviembre de 2009, titulada “Interponen siete querellas contra médico”, rolante a fojas 377.

20. Copia de publicación en diario La Cuarta, de fecha 24 de noviembre de 2009, titulada “Catarata de piteos en contra de oftalmólogo”, rolante a fojas 378.

21. Copia de escritura pública de compraventa, otorgada con fecha 8 de septiembre de 2009, por Julio César Alvarado Baigorria y Patricio Eduardo López Cid, agregada a fojas 379 y siguientes.

22. Copia de inventario de bienes muebles, protocolizado en la Notaría de Raúl Perry Pefaur con fecha 8 de septiembre de 2009, rolante a fojas 385.

23. Copia de declaración de transferencia de vehículos motorizados y giro y pago del impuesto, ante el Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 25 de agosto de 2008, rolante a fojas 386.

24. Copia de factura N° 142671, emitida con fecha 12 de noviembre de 2014, por Jaime Larraín y Compañía Corredores de Bolsa Limitada, a nombre de Patricio López Cid, rolante a fojas 387.

25. Copia de factura N° 597153, emitida con fecha 8 de mayo de 2008 por Celfin Capital S.A., Corredores de Bolsa, a nombre de Patricio López Cid, rolante a fojas 388.

26. Copia de parte del expediente Rol N° 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, rolante a fojas 389 y siguientes, que contiene las siguientes piezas:

- Querella interpuesta por doña Marcia Luz Millas Ovalle, en representación de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, contra Patricio López Cid, por los delitos de estafa, administración fraudulenta y apropiación indebida, presentada con fecha 5 de junio de 2006, a fojas 390.

- Declaración prestada por Marcia Millas Ovalle, el 7 de septiembre de 2006, a fojas 407.



- Escritura de mandato especial, otorgado por Especialidades Médicas Bittelman Limitada a Patricio López Cid, de fecha 28 de agosto de 2001, a fojas 409.

- Escritura de mandato especial, otorgado por Centro Médico Aurora Limitada a Patricio López Cid, de fecha 12 de enero de 2004, a fojas 412.

- Declaración policial prestada por Moyra López Ramírez, ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, de fecha 24 de agosto de 2006, a fojas 415.

- Declaración prestada por Moyra López Ramírez ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago, de fecha 31 de enero de 2007, a fojas 416.

- Querella interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, por Ricardo Bittelman Saporta, por sí, y Marcia Luz Millas Ovalle en representación de Instituto Oftalmológico Ltda. y Centro Médico Aurora, contra don Patricio López Cid, por los delitos de abuso de firma en blanco y apropiación indebida, a fojas 417.

- Declaración de Ricardo Bittelman en la Fiscalía de Viña del Mar, de fecha 14 de diciembre de 2006, a fojas 430.

- Escrito presentado a la Fiscalía de Viña del Mar con fecha 3 de noviembre de 2006, por el cual la parte querellante solicita diligencias de investigación, a fojas 433.

- Declaración de Marcia Millas ante la Brigada de Investigación Criminal de Viña del Mar, de fecha 3 de agosto de 2006, a fojas 437.

- Presentación por la cual, la parte querellante solicita conocimiento del sumario, a fojas 439.



- Declaración de Julio Alvarado Baigorria, de fecha 1 de octubre de 2009, a fojas 440.
- Presentación de fecha 4 de octubre de 2007, por la cual la parte querellante solicita peritaje contable, a fojas 443.
- Presentación de la parte querellante, por la que solicita se someta a proceso a don Patricio López Cid, de fecha 28 de febrero de 2008, a fojas 445.
- Solicitud de diligencias por la parte querellante, de fecha 13 de marzo de 2008, a fojas 450.
- Declaración de Cristian Rodríguez-Cano Bezanilla ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, de fecha 19 de marzo de 2008, a fojas 452.
- Declaración de Enrique Aldunate Urrutia ante la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, de fecha 19 de marzo de 2008, a fojas 453.
- Declaración de Susana Alarcón Silva ante la Brigada Investigadora de Delitos, de fecha 19 de marzo de 2008, a fojas 455.
- Presentación de fecha 4 de abril de 2008, mediante la cual la parte querellante solicita reapertura del sumario y diligencias, a fojas 456.
- Presentación de fecha 30 de mayo de 2008, por la cual la parte querellante acompaña documentos, solicita diligencias y que se someta a proceso al querellado, a fojas 457.
- Solicitud de interlocutoria de procesamiento, realizada por la parte querellante, a fojas 509.
- Careo entre Ricardo Bittelman y Claudia López Ovalle, de fecha 28 de abril de 2009, a fojas 513.



- Solicitud de diligencias de la parte querellante, a fojas 516.
- Declaración de Celbia Aravena Mora de fecha 27 de enero de 2010, a fojas 520.
- Declaración de Cristian Rodríguez-Cano Bezanilla de fecha 29 de enero de 2010, a fojas 522.
- Careo entre Ricardo Bittelman y Patricio López Cid, de fecha 28 de febrero de 2010, a fojas 524.
- Declaración de Enrique Aldunate Urrutia, de fecha 22 de abril de 2010, a fojas 527.
- Presentación de fecha 22 de febrero de 2011, mediante la cual la parte querellante se adhiere a acusación de oficio y deduce demanda civil de indemnización de perjuicios, a fojas 530.
- Sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 14 de octubre de 2013, por la cual confirma la sentencia apelada de fecha 2 de agosto de 2013 (Rol N° Criminal-1549-2013), a fojas 540.
- Recurso de casación en el fondo deducido por la parte querellante, en contra de la sentencia de segunda instancia, a fojas 541.
- Recurso de reposición deducido por la parte querellante con fecha 3 de enero de 2014, contra la resolución que declaró inadmisibile el recurso de casación, a fojas 573.
- Solicitud de la parte querellante, para embargar marcas comerciales de propiedad del querellado, a fojas 578.

En custodia N° 3459-2017:



27. Certificado notarial de fecha 25 de mayo de 2017, respecto de la transcripción de parte del programa de televisión “Esto no tiene nombre”, con copia simple a fojas 702.

28. Tres certificados notariales de fecha 25 de mayo de 2017, respecto de las transcripciones de audios de entrevistas, con copias simples a fojas 705, 707 y 709.

29. Certificado notarial de fecha 25 de mayo de 2017, que da cuenta de la búsqueda en Google de “El Mostrador Ricardo Bittelman 09-12” y de la página web que aparece como primer resultado, con copia simple a fojas 712.

30. Certificado notarial de fecha 25 de mayo de 2017, que da cuenta de la búsqueda de “abogado de cuestionado oftalmólogo acuso” y de página web encontrada, con copia simple a fojas 714.

31. Certificado notarial de fecha 25 de mayo de 2017, que da cuenta de la búsqueda en Google de “la estrella Iquique oftalmólogo querellado” y de la página web que aparece como segundo resultado, con copia simple a fojas 716.

32. Certificado notarial de fecha 25 de mayo de 2017, que da cuenta de la búsqueda de “Raúl Meza” y de noticia de fecha 7 de diciembre de 2009 encontrada, con copia simple a fojas 718.

VIGÉSIMO TERCERO: Que a fojas 699, la parte demandante ofreció también documentos electrónicos, contenidos en cuatro discos compactos custodiados bajo el N° 3459-2017, respecto de los cuales se llevó a efecto la audiencia de percepción a fojas 957, y que consisten en:

1. Video del programa “Esto no tiene nombre” exhibido por canal TVN con fecha 18 de abril de 2007, que muestra entrevista a Ricardo Bittelman refiriéndose a Patricio López Cid, de 2 minutos y 34 segundos de duración.

2. Audio de noticia emitida en Radio Agricultura con fecha 23 de noviembre de 2009, acerca de las querellas deducidas contra el doctor Ricardo Bittelman por parte de sus pacientes, con entrevistas a los abogados Raúl Meza (por los querellantes) y Jorge Gálvez (por el



doctor), además de una paciente y el Ministro de Salud, de 2 minutos y 48 segundos de duración.

3. Audio de entrevista al abogado del doctor Bittelman, Jorge Gálvez Santibáñez, emitida en Radio Bio Bio con fecha 23 de noviembre de 2009, de 25 segundos de duración.

4. Audio de noticia emitida en Radio Cooperativa con fecha 23 de noviembre de 2009, sobre las querellas deducidas contra el doctor Ricardo Bittelman por parte de sus pacientes, con entrevistas a los abogados Raúl Meza (por los querellantes) y Jorge Gálvez (por el doctor), además del doctor Alejandro Siebert (por la Sociedad Chilena de Oftalmología), de 4 minutos y 52 segundo de duración.

VIGÉSIMO CUARTO: Que la parte demandante, además, rindió prueba testimonial consistente en las declaraciones de don José Muñoz Moreno y don Francisco Ponce Aqueveque, quienes comparecieron a fojas 604 y 837, respectivamente.

VIGÉSIMO QUINTO: Que la misma parte provocó la absolución de posiciones de doña Marcia Millas Ovalle, quien compareció a fojas 894, y declaró al tenor del pliego de posiciones agregado a fojas 889.

VIGÉSIMO SEXTO: Que a fojas 355, el demandante solicitó la rendición de prueba pericial, por lo que a fojas 933 se llevó a efecto la audiencia de designación, y a fojas 940 se nombró al perito psicólogo don Andrés Aldunate Garcés, quien evacuó su informe a fojas 966.

VIGÉSIMO SÉPTIMO: Que por su parte, los demandados rindieron la prueba instrumental, consistente en:

En custodia N° 3453-2017:

1. Copia de parte del expediente de la causa Rol N° 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, que contiene las siguientes piezas:

- Declaración del imputado Patricio López Cid, y documentos de rendición de cuentas aportados por él.



- Informe Policial N° 730/00824, emitido por la Brigada de Delitos Económicos Metropolitana de la Policía de Investigaciones, con fecha 11 de febrero de 2008.
- Declaración judicial prestada por Cristián Rodríguez-Cano Bezanilla, de fecha 29 de enero de 2010.
- Declaración judicial prestada por Enrique Aldunate Urrutia, de fecha 22 de abril de 2010.
- Resolución de fecha 19 de octubre de 2010, por la cual se declara cerrado el sumario de la causa.
- Querella presentada con fecha 5 de junio de 2006, interpuesta por Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora, representadas por Marcia Millas Ovalle, en contra de Patricio López Cid, por los delitos de estafa, administración fraudulenta y apropiación indebida.
- Resolución de fecha 28 de febrero de 2008, por la cual se somete a proceso a Patricio Eduardo López Cid.
- Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 8 de marzo de 2008, por la cual se revoca el auto de procesamiento de 28 de febrero de 2008.
- Resolución de fecha 31 de mayo de 2010, por la cual se somete a proceso a Patricio Eduardo López Cid como autor del delito de abuso de firma en blanco.
- Resolución de fecha 27 de enero de 2011, por la cual se eleva la causa al estado de plenario y se acusa a Patricio López Cid como autor del delito de abuso de firma en blanco en perjuicio de Centro Médico Aurora Limitada.
- Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de mayo de 2014, por la cual se aclara



que la condena en costas fue únicamente en relación a la acción civil.

- Presentación de fecha 23 de septiembre de 2014, por la cual la parte querellante da cuenta del pago de las costas.

- Resolución de fecha 1 de octubre de 2014, por la cual se tiene presente el pago de las costas personales de la causa.

- Certificado de ejecutoria de la sentencia dictada, emitido con fecha 24 de enero de 2014.

2. Certificado emitido con fecha 17 de mayo de 2017, por el Archivero Judicial de Santiago, respecto del contenido de la causa Rol N° 82-2006 del ex 32° Juzgado del Crimen de Santiago.

3. Copia de parte del expediente de la causa RIT N° 2922-2006 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que contiene las siguientes piezas:

- Querella interpuesta por Patricio López Cid en contra de Marcia Millas Ovalle, por el delito de injurias graves, presentada con fecha 12 de mayo de 2006.

- Resolución que admite a tramitación la querella, de fecha 14 de junio de 2006.

- Acta de audiencias realizadas los días 14 de junio, 27 de julio y 31 de agosto de 2006, habiéndose emitido veredicto de absolución en la última.

- Acta de audiencia de lectura de sentencia, de fecha 5 de septiembre de 2006.

- Sentencia de fecha 5 de septiembre de 2006, por la cual se absuelve a Marcia Millas Ovalle, y certificado de ejecutoria de la misma.

- Acta de audiencia de tasación de costas, de fecha 6 de noviembre de 2006.



- Certificados emitidos por el Jefe de Unidad de Causas del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, de fechas 19 de febrero de 2010 y 10 de mayo de 2017.

4. Copia de parte del expediente de la causa RIT N° 2795-2008 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, que contiene las siguientes piezas:

- Querella interpuesta por Patricio López Cid en contra de Ricardo Bittelman Saporta, por los delitos de injurias graves y calumnias, presentada con fecha 14 de abril de 2008.

- Resolución que admite a tramitación la querella, de fecha 18 de abril de 2008.

- Acta de audiencia de fecha 21 de agosto de 2008, en la que se declaró el abandono de la acción penal privada y sobreseimiento definitivo, junto con certificado de ejecutoria de dicha resolución.

5. Copia de parte del expediente de la causa RIT N° 6914-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que contiene las siguientes piezas:

- Querella interpuesta por Patricio López Cid en contra de Enrique Aldunate Urrutia, Cristian Rodríguez-Cano Bezanilla y Susana Alarcón Silva, por el delito de falso testimonio, presentada con fecha 9 de abril de 2014.

- Resolución que declara admisible la querella, de fecha 10 de abril de 2014.

- Presentación del Fiscal Adjunto, Patricio Millán Hidalgo, por la cual informa el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar en el procedimiento.

- Acta de audiencia de fecha 26 de junio de 2015, en la que el Ministerio Público comunica su decisión de no perseverar en el procedimiento.



- Resolución de 2 de julio de 2015, por la que se declara inadmisibile un recurso de apelación deducido por la parte querellante.

- Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 14 de julio de 2015, que rechaza recurso de hecho deducido por el querellante en contra de la resolución de 2 de julio de 2015.

- Resolución que manda cumplir lo decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 14 de julio de 2015.

- Certificado emitido por el Jefe de Unidad de Administración de Causas y Sala del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, de fecha 8 de mayo de 2017.

6. Copia de parte del expediente de la causa RIT N° 6988-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que contiene las siguientes piezas:

- Querella interpuesta por Patricio López Cid en contra de Ricardo Bittelman Saporta y Marcia Millas Ovalle, por el delito de acusación calumniosa, presentada con fecha 10 de abril de 2014.

- Resolución que declaró admisible la querella, de fecha 11 de abril de 2014.

- Presentación del Fiscal Adjunto, Patricio Millán Hidalgo, por la cual informa el cierre de la investigación y la decisión de no perseverar en el procedimiento.

- Acta de audiencia de fecha 2 de marzo de 2016, en la que el Ministerio Público comunica su decisión de no perseverar en el procedimiento, y transcripción de la audiencia.

- Resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago con fecha 22 de marzo de 2016, por la cual declara



inadmisible el recurso de apelación deducido por la parte querellante.

- Resolución que manda cumplir lo decidido por la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 23 de marzo de 2016.

- Acta de audiencia de fecha 15 de julio de 2016, en la que se decreta el sobreseimiento definitivo de la causa, y transcripción de la audiencia.

- Resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 8 de agosto de 2016, que confirma lo decidido por el Juez de Garantía con fecha 15 de julio de 2016, y resolución de “cúmplase” de fecha 9 de agosto de 2016.

- Certificado emitido por el Jefe de Unidad de Administración de Causas y Sala del 7° Juzgado de Garantía, de fecha 9 de mayo de 2017.

7. Copia de la carpeta investigativa llevada por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en la causa RUC 1410011440-3, RIT 6914-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

8. Copia de la carpeta investigativa llevada por la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, en la causa RUC 1410011605-8, RIT 6988-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

9. Tres boletas de honorarios emitidas entre noviembre y diciembre de 2006, por Jorge Gálvez Santibáñez a nombre de Instituto Oftalmológico Limitada, por asesorías.

10. Cinco facturas emitidas en marzo, abril y mayo de 2009, por Gálvez y Compañía Abogados Limitada a nombre de Instituto Oftalmológico Limitada, por asesorías legales.

11. Copia de escritura pública de constitución de sociedad “Gálvez y Compañía Abogados Limitada”, de fecha 9 de julio de 2008.

12. Copias de cheques N° 5432991 y 5432994, girados los días 7 y 10 de febrero de 2005, por \$3.000.000.- y \$4.000.000.-



respectivamente, contra la cuenta corriente de Centro Médico Aurora Limitada, a nombre de Patricio López Cid.

13. Copia de escrito de delega poder, de fecha 11 de febrero de 2011, presentado en la causa RIT 5405-2009 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

14. Acta de audiencia de preparación de juicio oral, de fecha 1 de abril de 2011, celebrada en causa RIT 5405-2009 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago.

En custodia N° 3868-2017:

15. Copia de parte del expediente de la causa RIT N° 6988-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, que contiene las misma piezas acompañadas en custodia N° 3453-2017.

16. Copia de parte del expediente de la causa Rol N° 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, que contiene las siguientes piezas:

- Contestación de acusación fiscal, presentada por la parte querellada con fecha 12 de abril de 2011.
- Sentencia definitiva dictada con fecha 2 de agosto de 2013, que declaró la absolución de Patricio López Cid y el rechazo de la demanda civil.
- Presentación de fecha 17 de enero de 2014, por la cual el abogado de Patricio López Cid solicita fijación de costas, y resolución recaída en ella, de fecha 24 de enero de 2014.
- Escrito “se tenga presente” de la parte querellante Instituto Oftalmológico Limitada, de fecha 3 de febrero de 2014.
- Escrito “se tenga presente”, suscrito por Patricio López Cid de fecha 10 de febrero de 2014.
- Resolución de 3 de marzo de 2014, que fijó las costas personales en la suma de \$11.000.000.-



- Escrito de objeción a la tasación de costas, presentado por el querellado Patricio López Cid, con fecha 5 de marzo de 2014.

- Escrito de objeción a la tasación de costas, presentado por la parte querellante Instituto Oftalmológico Limitada, con fecha 6 de marzo de 2014.

- Resolución de fecha 6 de marzo de 2014, que rechazó las objeciones a la tasación de costas.

- Recurso de apelación deducido por la querellante Instituto Oftalmológico Limitada, con fecha 11 de marzo de 2014.

- Recurso de apelación deducido por Patricio López Cid, con fecha 12 de marzo de 2014.

- Resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 12 de mayo de 2014, por la que revoca la resolución de 6 de marzo de 2014, y fija las costas personales en \$3.000.000.-

- Recurso de casación en la forma deducido por Patricio López Cid, con fecha 27 de mayo de 2014.

- Resolución de la Corte Suprema de fecha 12 de agosto de 2014, que declara inadmisibile el recurso de casación en la forma.

- Resolución de “cúmplase” dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 1 de septiembre de 2014.

VIGÉSIMO OCTAVO: Que la parte demandada rindió también prueba testimonial, consistente en las declaraciones de don Renan Colvin Treswal, don Eustaquio Manis Machera, doña Pía Rojas Silva y doña María Abud Cáceres, quienes comparecieron a fojas 628, 640, 654 y 857, respectivamente.

VIGÉSIMO NOVENO: Que la parte demandada provocó además la absolución de posiciones de don Patricio López Cid, quien



compareció a fojas 877, y declaró al tenor del pliego de posiciones agregado a fojas 870.

TRIGÉSIMO: Que de los reconocimientos efectuados por las partes, y de las pruebas rendidas, son hechos indubitados de la causa, los siguientes:

Relación familiar y laboral entre las partes:

1. Que don Patricio López Cid es tío por afinidad de doña Marcia Millas Ovalle, quien a su vez, es cónyuge del doctor Ricardo Bittelman Saporta.

2. Que el doctor Bittelman, a través de las sociedades Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, representadas legalmente por doña Marcia Millas Ovalle, es dueño de varios centros de atención médica.

3. Que entre los años 2001 a 2005, don Patricio López Cid trabajó en el área administrativa de las empresas.

4. Que con fecha 14 de noviembre de 2005, don Ricardo Bittelman Saporta, por sí y en representación de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, y don Patricio López Cid, firmaron un finiquito por el cual pusieron término a la relación laboral que les unía.

Causas penales iniciadas por los demandados:

5. Que, durante el año 2006, los demandados interpusieron tres querellas en contra del demandante, por las cuales le imputaron la comisión de diferentes delitos y que dieron inicio a procesos penales que finalizaron sin condena. Estas causas fueron:

a) ROL 82-2006 del 32° Juzgado de Crimen de Santiago, en la que con fecha 5 de junio de 2006, doña Marcia Millas Ovalle en representación de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, se querelló contra don Patricio López Cid, por los delitos de estafa, administración fraudulenta y apropiación indebida, y que terminó por sentencia absolutoria dictada con fecha 2 de agosto de 2013, confirmada el día 14 de octubre de 2013 por la Ilustrísima



Corte de Apelaciones de Santiago, encontrándose firme y ejecutoriada desde el 24 de enero de 2014.

b) RIT 3240-2006 del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en la que el 21 de abril de 2006 don Ricardo Bittelman Saporta, por sí, y doña Marcia Millas Ovalle, en representación de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, se querellaron contra don Patricio López Cid, por el delito de abuso de firma en blanco y apropiación indebida, causa que fue acumulada al proceso llevado ante el 32° Juzgado de Crimen de Santiago.

c) RIT 2259-2006 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, en la que con fecha 17 de abril de 2006, doña Marcia Millas Ovalle en representación de Instituto Oftalmológico Limitada, se querelló contra don Patricio López Cid, por delito informático establecido en el artículo 2 de la Ley 19.366, que terminó con el sobreseimiento del imputado.

Causas penales iniciadas por el demandante:

6. Que entre los años 2006 y 2014, el demandante interpuso tres querellas contra los demandados, basadas en diferentes delitos y que originaron procesos penales que finalizaron sin condena. Estas causas fueron:

a) RIT 2922-2006 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, iniciada por querella presentada el 12 de mayo de 2006, interpuesta por don Patricio López Cid en contra de doña Marcia Millas Ovalle, por el delito de injurias graves, que terminó con sentencia absolutoria dictada el 5 de septiembre de 2006.

b) RIT 2795-2008 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, iniciada por querella presentada el 14 de abril de 2008, interpuesta por don Patricio López Cid en contra de don Ricardo Bittelman Saporta, por los delitos de injurias graves y calumnias, que terminó con el abandono de la acción penal privada y sobreseimiento definitivo, declarado con fecha 21 de agosto de 2008.

c) RIT 6988-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, iniciada por querella interpuesta el 10 de abril de 2014, por don Patricio López Cid en contra de doña Marcia Millas Ovalle y don



Ricardo Bittelman Saporta, por el delito de acusación calumniosa previsto en el artículo 211 del Código Penal, que terminó por sobreseimiento definitivo por la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, decretado con fecha 15 de julio de 2016, y confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago el 8 de agosto de 2016.

7. Que con fecha 9 de abril de 2014, don Patricio López Cid presentó una querella por falso testimonio contra tres de los testigos que declararon por la parte querellante de la causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, la que inició el proceso RIT 6914-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en el cual el Ministerio Público comunicó su decisión de no perseverar en audiencia de fecha 26 de junio de 2015.

TRIGÉSIMO PRIMERO: Que el demandante ha ejercido la acción prevista en el artículo 2314 del Código Civil, con el objeto de hacer efectiva la responsabilidad civil extracontractual de los demandados, que –según denuncia– surgiría del uso abusivo que han hecho del sistema judicial, al haber interpuesto en su contra tres querellas criminales con el solo fin de perjudicarlo, las que originaron causas penales finalizadas sin condena, y que le provocaron una serie de daños relacionados al hecho de haberse encontrado sometido a proceso durante años.

Frente a esto, los demandados se defienden oponiendo excepciones de prescripción, falta de legitimación pasiva, ausencia de requisitos de la responsabilidad extracontractual y cosa juzgada.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: Que al no haberse opuesto las excepciones deducidas una en subsidio de la otra, ellas serán analizadas de acuerdo al orden connatural de las mismas, principiando por aquella que cuestiona la legitimación pasiva, supuesto procesal de toda acción; para continuar con aquellas que suponiendo una relación procesal válida, controvierte la vigencia de la acción, como serían las excepciones de prescripción y cosa juzgada.



TRIGÉSIMO TERCERO: Que en cuanto a la falta de legitimación pasiva, los demandados la hacen consistir en que el hecho dañoso que esgrime el actor es el resultado de la actividad judicial desplegada por los Tribunales de Justicia que conocieron y se pronunciaron sobre las acciones criminales deducidas en su contra.

TRIGÉSIMO CUARTO: Que basta para rechazar esta excepción el propio tenor de la demanda, en la que no se formula reproche alguno al Poder Judicial en la labor desempeñada, sino que lo debatido se circunscribe al ejercicio abusivo que habrían efectuado los demandados al interponer concretamente tres querellas en contra del actor por diversos delitos, sin mayor fundamento y plausibilidad, con el solo fin de hostigarlo y vengarse, además de hacer uso de los recursos legales para mantener vigentes dichas acciones, razón suficiente para desestimar esta excepción.

TRIGÉSIMO QUINTO: Que en cuanto a la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria de responsabilidad civil extracontractual, basada en que habría transcurrido el plazo legal de cuatro años para su ejercicio, contado desde el año 2006, época de interposición de las acciones criminales dirigidas contra el actor, preciso es tener en cuenta que el artículo 2332 del Código Civil dispone que el cómputo del plazo de cuatro años principiará “desde la perpetración del acto”.

TRIGÉSIMO SEXTO: Que, ahora, el acto dañoso no se configura únicamente con el ejercicio de las acciones criminales que efectuaron los demandados contra el actor el año 2006, derecho que, por sí mismo, es lícito. Más bien, se requiere analizar el desarrollo de dichas acciones en el proceso y principalmente el resultado de las mismas.

Así, únicamente una vez pronunciada una sentencia absolutoria o aquellas resoluciones que determinaron el sobreseimiento definitivo de la causa, es posible contar con todos los elementos constitutivos de un supuesto hecho dañoso. De otra forma, se corre el riesgo de deducir una demanda fundada en elementos



incompletos e inciertos, sin el presupuesto daño configurado, el que incluso puede llegar a no constituirse si, en definitiva, el demandante fuera condenado en esos procesos.

Que, de esta forma, y encontrándose firme y ejecutoriada la sentencia dictada en la causa Rol N° 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago, con fecha 24 de enero de 2014, el plazo de prescripción de la acción deducida al momento de su notificación no se encontraba cumplido, motivo por el que esta excepción también será desestimada.

TRIGÉSIMO SÉPTIMO: Que ahora corresponde analizar la excepción de cosa juzgada, que la parte demandada deduce, en primer lugar, respecto del hecho ilícito imputado por el actor como fundamento de la responsabilidad, esto es, el abuso del derecho a la acción; y en segundo lugar, en relación a la pretensión indemnizatoria por la cual el demandante intenta se le paguen los honorarios de los abogados que lo defendieron en la causa penal Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago.

TRIGÉSIMO OCTAVO: Que la primera excepción de cosa juzgada, la sustenta en lo dispuesto por el artículo 179 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto, los mismos hechos que sustentan la presente acción civil ya fueron objeto de otro juicio, a saber, la causa RIT 6988-2014 seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en la cual, don Patricio López Cid se querelló por el delito de denuncia calumniosa en contra de don Ricardo Bittelman Saporta y doña Marcia Millas Ovalle, y que terminó con el sobreseimiento definitivo de los imputados, en base a la causal establecida en el artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, es decir, debido a que los hechos denunciados no eran constitutivos de delito.

Por su parte, el actor solicita el rechazo de la excepción, en razón que la presente demanda se basa en el hecho delictivo civil de mala utilización de la justicia, y persigue la responsabilidad civil extracontractual de los demandados; mientras que el juicio seguido anteriormente en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, se basó en



el delito penal de acusación calumniosa y tenía por objeto la responsabilidad penal de los demandados.

Entonces, no obstante que el demandante no expone argumentos de derecho que sustenten su posición, esta sentenciadora entiende a partir de su relato, que el rechazo de la excepción lo fundamenta en la ausencia de la triple identidad establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

TRIGÉSIMO NOVENO: Que la cosa juzgada *“se concibe en general como un estado jurídico en que se encuentran algunos asuntos judiciales por haber sido objeto de una decisión jurisdiccional definitiva en un proceso”* (Romero, Alejandro. “La cosa juzgada en el proceso civil chileno”. Editorial Jurídica de Chile, año 2002, pág. 11).

Esta institución, que constituye un efecto de las resoluciones judiciales -particularmente de las sentencias-, genera dos consecuencias: por un lado, debido a su carácter coercitivo, la parte en cuyo favor se ha reconocido un derecho puede exigir su cumplimiento, lo que se denomina “acción de cosa juzgada”; y por el otro lado, debido a su carácter de inmutable, las partes deben respetar lo resuelto, quedando impedidas de renovar en un nuevo juicio la misma controversia, lo que se conoce como “excepción de cosa juzgada” (Casarino, Mario. “Manual de Derecho Procesal”, Tomo III. Editorial Jurídica de Chile, año 2005, pág. 125).

CUADRAGÉSIMO: Que, en lo pertinente al presente caso, la excepción de cosa juzgada se encuentra establecida en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, en los siguientes términos: *“La excepción de cosa juzgada puede alegarse por el litigante que haya obtenido en el juicio y por todos aquellos a quienes según la ley aprovecha el fallo, siempre que entre la nueva demanda y la anteriormente resuelta haya: 1° Identidad legal de personas; 2° Identidad de la cosa pedida; y 3° Identidad de la causa de pedir”*.

Esta norma contempla lo que se ha denominado como “triple identidad”, que permite verificar si una acción es jurídicamente idéntica a otra sobre la cual recayó sentencia firme en un proceso anterior, de



manera que el juez deberá evitar un nuevo pronunciamiento sobre un asunto ya resuelto, que se pretende volver a debatir.

CUADRAGÉSIMO PRIMERO: Que el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil constituye la regla general en la materia, mientras los artículos 178 y 179 del mismo texto legal, son reglas especiales relativas a los efectos de la sentencia penal en el juicio civil, y que no requieren la concurrencia de la triple identidad. Así, el artículo 178 regula la cosa juzgada de la sentencia penal condenatoria; y el 179, de la sentencia penal absolutoria o de sobreseimiento definitivo.

Esta prescindencia de la triple identidad resulta lógica, desde que *“los juicios penales y los civiles, en resumen, tienen objetivos y finalidades enteramente diversos; de suerte que si se exigiera la concurrencia de la triple identidad legal para poder alegar la cosa juzgada penal en juicio civil, jamás podríamos valernos de la mencionada excepción”* (Casarino. Ob. cit., pág. 145).

De esta manera, teniendo presente que la parte demandada pretende la aplicación del artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto lo debatido en el presente juicio se encontraría ya resuelto en sede penal, la defensa de la parte demandante -en el sentido que no concurrirían los elementos de la triple identidad- no tiene relevancia para resolver si en el presente caso existe cosa juzgada, desde que la norma invocada como sustento de la excepción descarta dicho requisito.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO: Que entonces, el razonamiento que a continuación se verterá, apunta a determinar si es posible acoger la excepción de cosa juzgada, a la luz de lo dispuesto en el artículo 179 N° 1 del Código de Procedimiento Civil.

La norma en cuestión, indica que: *“Las sentencias que absuelvan de la acusación o que ordenen el sobreseimiento definitivo, sólo producirán cosa juzgada en materia civil, cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes: 1ª La no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso. No se entenderán comprendidos en este número los casos en que la absolución o*



sobreseimiento provengan de la existencia de circunstancias que eximan de responsabilidad criminal”.

Al respecto, consta de la documental acompañada por la parte demandada, que en audiencia de fecha 15 de julio de 2016 se decretó el sobreseimiento definitivo de los imputados en la causa RIT 6988-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, confirmado por la Corte de Apelaciones de Santiago por resolución de 8 de agosto del mismo año.

CUADRAGÉSIMO TERCERO: Que el sobreseimiento se fundó en la causal del artículo 250 letra a) del Código Procesal Penal, esto es, porque se determinó que los hechos investigados no eran constitutivos de delito, norma que se vincula con lo dispuesto en el artículo 179 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, que admite el efecto de cosa juzgada en el juicio civil, de la sentencia que ordena el sobreseimiento definitivo por la no existencia del delito o cuasidelito materia del proceso penal.

Así las cosas, se hace necesario dilucidar ahora si los hechos discutidos en sede penal coinciden con lo debatido en el actual juicio civil, a fin de determinar si la controversia de autos ya se encuentra resuelta por sentencia firme y ejecutoriada.

CUADRAGÉSIMO CUARTO: Que para lo anterior, resulta útil buscar las coincidencias o puntos de contacto importantes entre lo sobreseído en sede penal y el nuevo proceso de responsabilidad civil, para arribar a una aplicación razonada y justa de lo previsto en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, teniendo en cuenta que el fundamento esencial de esta norma es la garantía del *non bis in ídem*.

En efecto, la existencia de esta específica cosa juzgada – además de la evitación de fallos contradictorios– encuentra sustento material en el respeto del derecho del imputado para no ser enjuiciado dos veces por el mismo hecho (Ried Undurraga, Ignacio. “El efecto de cosa juzgada de la sentencia penal absolutoria y del sobreseimiento



definitivo en el proceso chileno de responsabilidad civil”, Revista Chilena de Derecho Privado N° 24, julio de 2015, págs. 9-57).

CUADRAGÉSIMO QUINTO: Que consta de la prueba documental rendida en autos, que los hechos relatados por el demandante en su querella de 10 de abril de 2014 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, son idénticos a los expuestos en esta demanda civil.

Así, en ambos juicios, el actor relata que en el año 2001 comenzó a trabajar para el doctor Ricardo Bittelman Saporta, en la administración de los centros médicos de su propiedad; que en el año 2005 negoció su salida de las empresas, motivado por los rumores sobre que el doctor no contaba con la especialidad en oftalmología –a pesar de desempeñarse en dicha área de la salud– y los reclamos de pacientes ante los malos resultados de las cirugías a que habían sido sometidos, lo que derivó en la firma de un finiquito el día 14 de noviembre de 2005; que terminada esta relación laboral, se dedicó a un nuevo proyecto de centros médicos con otros socios, lo que originó que el doctor y su cónyuge, doña Marcia Millas Ovalle, comenzaran a hostigarlo de diferentes formas; que en abril de 2006, las agresiones pasaron al plano judicial, pues los demandados Bittelman y Millas interpusieron en su contra tres querellas, que constituirían un uso abusivo del sistema judicial con el fin de vengarse y perjudicarlo; que debido a lo anterior estuvo sometido a proceso durante casi ocho años (en el que incluso se incorporaron pruebas falsas); y que en ninguno de los juicios fue condenado.

CUADRAGÉSIMO SEXTO: Que, en sede penal, estos hechos fueron jurídicamente calificados por el demandante como constitutivos del delito de denuncia calumniosa, tipificado en el artículo 211 del Código Penal.

Este delito consiste en “*realizar ante la autoridad judicial la denuncia de un delito o interponer una querella con relación al mismo*”, y que dicha denuncia o querella sea calumniosa, entendiéndose por tal la que es falsa o mentirosa, condición que se cumplirá “*cuando el*



hecho central que se denuncia como delictivo no ha existido o cuando existiendo, el imputado no ha participado” (Garrido Montt, Mario. “Derecho Penal, Parte Especial”, Tomo IV. Editorial Jurídica de Chile, año 2008, págs. 136-138).

La conducta típica que el demandante imputó a los demandados en la causa seguida en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, coincide con la que ahora denuncia como el hecho ilícito generador de responsabilidad, al afirmar que los demandados presentaron en su contra tres querellas carentes de fundamento, motivo por el cual estuvo sometido a proceso por delitos inexistentes, habiendo los querellantes –ahora demandados– basado su acción en una prueba inexistente (auditoría contable) y acompañado prueba falsa durante la tramitación del juicio.

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO: Que siguiendo con la tipicidad penal en comparación con el hecho ilícito denunciado en esta causa, *“el tipo subjetivo del delito sobreseído o absuelto debe ser coincidente con la culpa o dolo civil que se imputa en el nuevo juicio. Aunque se trate de conceptos diversos, en muchos ilícitos puede haber amplias zonas de contacto entre dolo con que actuó el sujeto para delinquir y el dolo que exige el Derecho Civil”* (Ried Undurraga. Ob. cit. pág. 27).

En este sentido, el delito de denuncia calumniosa requiere de dolo directo, el que consiste en que el autor debe estar en conocimiento de la falsedad del hecho denunciado: debe saber que su denuncia es falsa o calumniosa (Garrido Montt. Ob. cit., pág. 139; Rodríguez Collao, Luis y Ossandón Widow, María. “Delitos contra la función pública”. Editorial Jurídica de Chile, año 2011, pág. 310).

Sobre este elemento, el actor no aclara en su demanda si la conducta de los demandados fue dolosa o culpable, limitándose a entregar una definición de culpa y calificar el hecho ilícito de imprudencia temeraria, pero también de acto de venganza con la sola finalidad de perjudicarlo.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO: Que, no obstante, del relato del demandante fluye claramente que el hecho ilícito en que funda su



acción es uno doloso. Ello, por cuanto, reiteradamente alude a una “venganza” en su contra y a que el objetivo de los demandados al interponer las querellas, era solo perjudicarlo. De esta manera, la conducta descrita por el actor encaja evidentemente en la definición del dolo contenida en el artículo 44 del Código Civil, pues, según sus afirmaciones, fue llevada a efecto con la intención de causarle daño.

Por lo demás, al evacuar el traslado respecto de la excepción de cosa juzgada, el demandante señala que *“la demanda de autos se basa en el hecho delictivo civil de la mala utilización de la justicia en descrédito de mi parte”*, como puede leerse a fojas 853. Así, el hecho ilícito fundante de la presente acción indemnizatoria es uno doloso, tratándose de un delito civil.

Luego, las acusaciones de venganza, de mal uso de la justicia solo con el fin de causar perjuicio y de utilización de pruebas falsas por parte de los demandados para sustentar los procesos penales iniciados por ellos, conllevan que estos, necesariamente, debían saber que sus denuncias eran falsas, lo que coincide con el dolo que conforma el tipo subjetivo del delito de denuncia calumniosa.

CUADRAGÉSIMO NOVENO: Que también resulta útil realizar una comparación en relación al bien jurídico protegido, pues tanto el tipo penal como el ilícito civil apuntan al mal uso del sistema judicial.

En este sentido, la posición mayoritaria de la doctrina, considera que el delito de denuncia calumniosa *“es una figura pluriofensiva en que, además de la Administración de Justicia, se brinda protección penal –aunque en modo secundario– al honor de la persona afectada con la falsa acusación”* (Rodríguez y Ossandón. Ob. cit., págs. 302-305).

Por su parte, la Corte Suprema en fallo dictado el 12 de mayo de 2011, en la causa Rol 9067-2010, señaló: *“Que la doctrina está conteste en señalar que el ilícito de denuncia calumniosa persigue tutelar el bien jurídico de la correcta administración de justicia e impedir las perniciosas consecuencias, a las que podría verse*



expuesto un ciudadano con motivo de una denuncia dolosamente falsa en su contra”.

QUINCUAGÉSIMO: Que según la denominada “teoría del abuso del derecho”, los actos que importan el ejercicio de un derecho no pueden ser contrarios a los fines económicos o sociales del mismo, ni pueden realizarse con el sólo fin de causar mal a otro, pues en dicho caso, el ejercicio de ese derecho deviene en un hecho ilícito que puede generar responsabilidad.

Así, la Administración de Justicia como bien jurídico resguardado por el Derecho Penal en el delito de denuncia calumniosa, también se manifiesta en el ilícito civil de abuso del derecho llevado al plano de las acciones judiciales, por cuanto se trata de una situación en que el ejercicio del derecho procesal a la acción se transforma en un hecho ilícito, desde que se aparta de su naturaleza y finalidad, derivando en una indebida utilización del sistema judicial.

Por lo demás, de esta manera lo plantea también el demandante quien a fojas 853 señala que el hecho delictivo civil en que funda su demanda, consiste en una mala utilización de la justicia en descrédito de su parte.

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO: Que por último, cabe tener presente también la coincidencia entre las partes de este juicio y los intervinientes de la causa penal RIT 6988-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago.

En efecto, el proceso penal comenzó por querrella deducida por don Patricio López Cid, quien ocupa la posición de demandante en el presente juicio civil; mientras que los querrellados fueron don Ricardo Bittelman Saporta y doña Marcia Millas Ovalle, quienes ahora son demandados.

De esta manera, las partes son las mismas. Y si bien en el juicio actual además son demandadas las sociedades Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, resulta lógico que no se dirigiera en su contra la acción penal, debido a que las personas jurídicas, como regla general, no responden penalmente, como lo



dispone el artículo 58 del Código Procesal Penal. Así, en la querella deducida por el delito de denuncia calumniosa, se lee que a doña Marcia Millas Ovalle se le imputa el delito, precisamente por sus actos como representante de esas sociedades.

QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO: Que entonces, existiendo estas importantes coincidencias y puntos de convergencia entre ambos procesos, puede concluirse que el conflicto sometido al conocimiento y decisión de esta magistratura, se encuentra ya resuelto en un juicio anterior, por lo que se hace aplicable lo dispuesto en el artículo 179 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, debiendo acogerse la excepción de cosa juzgada.

QUINCUAGÉSIMO TERCERO: Que, sin perjuicio de lo ya resuelto, y solo a mayor abundamiento se analizará si los hechos fundantes de la demanda, específicamente la interposición de las tres acciones criminales contra el actor durante el año 2006, y que él indica que fueron ejecutadas con el solo ánimo de vengarse, configuran la institución del abuso del derecho.

QUINCUAGÉSIMO CUARTO: Que la acción ejercida es la prevista en el artículo 2314 del Código Civil, esto es, se pretende hacer efectiva la responsabilidad civil de carácter extracontractual que, en este caso particular, requiere el ejercicio de un derecho subjetivo, que dicho ejercicio sea realizado con dolo o culpa, que se produzca un daño y que exista una relación de causalidad entre el ejercicio del derecho y el daño (Corte Suprema, sentencia de 11 de octubre de 2016, en causa Rol 16535-2015, refiriéndose a las exigencias de la responsabilidad extracontractual en virtud del abuso del derecho).

De esta manera y atendido lo dispuesto en el artículo 1698 del Código Civil, corresponde probar estos requisitos a quien alega la obligación indemnizatoria, en este caso, a la parte demandante.

QUINCUAGÉSIMO QUINTO: Que el ilícito civil que se atribuye a los demandados consiste en que, dolosamente, –como se dejó establecido en el considerando cuadragésimo octavo–, abusó del



sistema judicial para efectos de perjudicar al demandante, a través de la interposición de tres acciones criminales carentes de justificación.

QUINCUGÉSIMO SEXTO: Que la presentación de querellas por parte de los demandados en contra de don Patricio López Cid, es un hecho que se encuentra acreditado.

Así, ha quedado establecido en el considerando trigésimo, que doña Marcia Millas Ovalle en representación de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, se querelló el 5 de junio de 2006 contra don Patricio López Cid, por los delitos de estafa, administración fraudulenta y apropiación indebida (Rol 82-2006 del 32º Juzgado del Crimen de Santiago); que don Ricardo Bittelman Saporta, por sí, y doña Marcia Millas Ovalle, en representación de Instituto Oftalmológico Limitada y Centro Médico Aurora Limitada, se querellaron el 21 de abril de 2006 contra el demandante, por el delito de abuso de firma en blanco y apropiación indebida (Rit 3240-2006 del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, acumulada a la causa del 32º Juzgado del Crimen de Santiago); y, por último, que doña Marcia Millas Ovalle en representación de Instituto Oftalmológico Limitada, se querelló el 17 de abril de 2006 contra el actor, por delito informático (Rit 2259-2006 del 4º Juzgado de Garantía de Santiago).

Se encuentra demostrado también que ninguna de estas causas iniciadas por los demandados, finalizó con sentencia condenatoria. Por el contrario, aquella tramitada por el 32º Juzgado del Crimen de Santiago se dictó sentencia absolutoria, mientras que la seguida ante el 4º Juzgado de Garantía de Santiago terminó mediante el pronunciamiento de un sobreseimiento.

QUINCUGÉSIMO SÉPTIMO: Que encontrándose acreditado que los demandados hicieron ejercicio de su derecho a deducir acciones judiciales, la controversia radica en si este ejercicio fue abusivo.

Nuestra Corte Suprema ha reconocido la teoría del abuso del derecho, señalando que: *“la naturaleza del abuso del derecho es la de un hecho ilícito, que tiene como consecuencia la responsabilidad*



delictual o cuasidelictual, dependiendo de si éste se ha cometido con dolo o culpa, esto es, con la intención de dañar o sin la diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios” (sentencia dictada con fecha 11 de octubre de 2016, en autos Rol 16535-2015); y también: “*Que la responsabilidad cuasidelictual civil puede originarse del ejercicio de un derecho cuando éste se realiza sin el debido fundamento, esto es, en forma abusiva y causa daño a un tercero. Esto último, por cuanto los derechos subjetivos tienen una finalidad y han de ejercerse de acuerdo a esos fines. Si alguno, apartándose de tales objetivos y de los postulados generales, ejerce un derecho negligentemente y en el evento que cause daños a terceros, debe indemnizarlos*” (sentencia de reemplazo dictada en autos Rol 7270-2009, con fecha 4 de abril de 2011).

Por su parte, el profesor Enrique Barros Bourie, señala que el ejercicio de un derecho puede resultar excesivo o anormal; sea por la inequívoca intención de dañar que inspira al titular, sea atendiendo a la valoración de las circunstancias objetivas de ese ejercicio, según estándares mínimos de sociabilidad y de lealtad. De manera que, la teoría del abuso del derecho se concibe mayoritariamente como un correctivo del ejercicio excesivo o anormal del derecho, constituyendo un límite moral implícito al ejercicio de los derechos, que se muestra en una conducta del titular que violenta gravemente los estándares normativos mínimos del respeto a los demás, aunque la conducta corresponda formalmente al ámbito de discrecionalidad que el derecho confiere a su titular (“Tratado de Responsabilidad Extracontractual”. Editorial Jurídica de Chile, año 2010, págs. 626-628).

QUINCUGÉSIMO OCTAVO: Que el derecho de acción no es otra cosa que la posibilidad de acudir a los tribunales para pedir tutela judicial efectiva, por lo que se denomina también derecho al proceso, y se encuentra reconocido a todas las personas en el artículo 19 N° 3 de nuestra Constitución Política, al asegurarles “*la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos*”.



Así, el ejercicio de este derecho constituye, en principio, un hecho lícito amparado por nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, corresponde a la parte demandante en un juicio de responsabilidad como el presente, el justificar y probar que el ejercicio de este derecho ha resultado ser un hecho ilícito doloso o culpable, y por ello, abusivo.

QUINCAGÉSIMO NOVENO: Que al respecto, tal como lo hemos indicado anteriormente, don Patricio López Cid sostiene que los demandados han utilizado el sistema judicial para hostigarlo y con solo afán de venganza, abusando sistemáticamente del derecho y de la justicia a través de las querellas deducidas por ellos, imputando, de esta manera, un actuar doloso a los demandados.

SEXAGÉSIMO: Que de los relatos de ambas partes, tanto en este juicio como en los otros habidos entre ellas, puede verificarse que el conflicto tiene su origen en el término de la relación laboral que les unía.

Así, las partes se encuentran contestes en que don Patricio López Cid trabajó en el área administrativa de los centros médicos de propiedad de don Ricardo Bittelman Saporta, entre los años 2001 a 2005. Sin embargo, discrepan en los motivos que llevaron al término de la relación laboral, encontrándose dos versiones contrapuestas: por un lado, que habría renunciado debido a los problemas derivados de la práctica profesional del doctor Bittelman; y por el otro, que habría sido desvinculado por irregularidades en su administración.

Entonces, es en el marco de este conflicto familiar, laboral y económico, en que ambas partes recurrieron a los tribunales de justicia deduciendo acciones en las que acusaban al otro de haber cometido diferentes delitos.

SEXAGÉSIMO PRIMERO: Que, así, de los antecedentes aportados por las partes, dan cuenta que más que un abuso del derecho a la acción, existe un conflicto judicializado en todas sus aristas, por ambas partes en igual medida.

Así, don Patricio López Cid, considerando que su desempeño laboral había sido correcto, reaccionó a través del sistema judicial



deduciendo las tres querellas que se han mencionado, respecto de las cuales no obtuvo sentencia favorable.

Por su parte, los demandantes reconvencionales, manteniéndose en su posición consistente en que don Patricio López Cid había administrado irregularmente el negocio que se le había confiado, iniciaron tres acciones penales, ninguna de las cuales prosperó, por cuanto finalizaron en absolución y sobreseimiento en favor del querellado, como se enumera en el considerando trigésimo.

SEXAGÉSIMO SEGUNDO: Que, en efecto, la prueba documental rendida por el demandante, en apoyo de su acción indemnizatoria, consiste precisamente en parte de las piezas de los procesos iniciados por los demandados.

Que, en primer término, es preciso determinar que estos procesos –que se reducen a dos, dado la acumulación que se ha dado cuenta- surgen de esta relación laboral finiquitada entre las partes, pero cada uno de ellos se refiere a un hecho específico y disímil. Así, la causa Rol 82-2006 del 32º Juzgado del Crimen de Santiago, se fundamenta en una supuesta estafa, administración fraudulenta y apropiación indebida en las gestiones de administración efectuada por el actor en los centros médicos, mientras que en la causa acumulada se le imputa un delito de abuso de firma en blanco de dos cheques de propiedad de uno de dichos centros. En cuanto a la querella por delitos informáticos, se afirma en el uso indebido de las claves secretas de la empresa para acceder a la base de datos y a la información reservada tanto médica como comercial.

De ellas, y especialmente de la causa Rol 82-2006 del 32º Juzgado del Crimen de Santiago, -que es aquella que fundamenta en mayor medida la acción de abuso del derecho, y cuyas piezas fueron acompañadas en parte importante- el actor fue procesado en dos oportunidades y posteriormente acusado, siendo solo al momento de dictarse sentencia definitiva que el tribunal se formó el convencimiento de la inocencia de Patricio López Cid.



SEXAGÉSIMO TERCERO: Que es necesario entender que “*el solo rechazo de una demanda no permite calificar al ejercicio de la acción como abusiva, puesto que ello puede provenir de varias explicaciones que justifican la actuación del litigante perdedor, entre otras: haber obrado convencido de una interpretación jurídica perfectamente lícita o de una calificación jurídica de los hechos enteramente razonable, pero que no fue compartida por el juez (...).*”

De igual forma, tampoco la condena en costas configura necesariamente una hipótesis de abuso del derecho en el ejercicio de una acción judicial, ya que esta hipótesis de ilicitud jurídica tiene una construcción diversa, que no debe ser confundida” (Romero Seguel, Alejandro. “Curso de Derecho Procesal Civil”, Tomo I. Editorial Jurídica de Chile, año 2012, pág. 70).

SEXAGÉSIMO CUARTO: Que como se ha venido diciendo, una acción puede ser desestimada por el juez por diferentes motivos. Así las cosas, deducir acciones judiciales y que éstas no prosperen no significa que el demandante o querellante esté actuando dolosamente, y en definitiva abusando de su derecho a la acción, pues el rechazo de su pretensión puede tener otros motivos. Y en ese sentido, es carga de la parte demandante en un juicio de responsabilidad como el presente, probar que el ejercicio de un derecho que es un acto lícito, se ha tornado de tal modo anormal, excesivo o apartado de sus fines, y que en este caso en particular sería consecuencia de un acto doloso, que permita calificarlo como un delito civil que obliga al titular de ese derecho a indemnizar los daños causados por su ejercicio malicioso.

SEXAGÉSIMO QUINTO: Que, así las cosas, no aparece de los antecedentes que los demandados habrían usado indebidamente el sistema judicial con el solo fin de perjudicar al actor, apartándose de los fines propios del derecho a la acción que toda persona tiene reconocido en la Constitución Política de la República, de manera que la demanda principal igualmente debía ser desestimada por no haberse acreditado el primer y mas elemental requisito de la



responsabilidad civil extracontractual, esto es que la parte demandada haya incurrido en un acto doloso.

III. EN CUANTO A LA DEMANDA RECONVENCIONAL:

SEXAGÉSIMO SEXTO: Que don Ricardo Simón Bittelman Saporta y doña Marcia Luz Millas Ovalle, interponen demanda reconvencional de indemnización de perjuicios en contra de Patricio Eduardo López Cid, todos ya individualizados, en atención a los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho señalados en lo expositivo de la presente sentencia.

SEXAGÉSIMO SÉPTIMO: Que el demandado reconvencional contestó la demanda, solicitando su rechazo, en los términos señalados también en lo expositivo de la presente sentencia.

SEXAGÉSIMO OCTAVO: Que el ilícito civil que se atribuye, esta vez, al demandado reconvencional consiste igualmente en el abuso del sistema judicial para efectos de acosar y hostigar a los demandantes reconvencionales, a través de la interposición de cuatro acciones criminales carentes de justificación.

SEXAGÉSIMO NOVENO: Que la presentación de querellas por parte de don Patricio López Cid en contra de don Ricardo Bittelman Saporta y doña Marcia Millas Ovalle, es también un hecho que se encuentra acreditado.

Así, como se indica en el considerando trigésimo, el demandado reconvencional interpuso el 12 de mayo de 2006, una querella en contra de doña Marcia Millas Ovalle, por el delito de injurias graves (RIT 2922-2006 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago); el 14 de abril de 2008 se querelló contra don Ricardo Bittelman Saporta, por los delitos de injurias graves y calumnias (RIT 2795-2008 del 8° Juzgado de Garantía de Santiago); y el 10 de abril de 2014 presentó querella contra doña Marcia Millas Ovalle y don Ricardo Bittelman Saporta, por el delito de acusación calumniosa (RIT 6988-2014 del 7° Juzgado de Garantía de Santiago).



Además, con fecha 9 de abril de 2014, don Patricio López Cid se querelló por falso testimonio contra tres de los testigos presentados por la parte querellante –ahora demandantes reconvencionales– de la causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen de Santiago.

Se encuentra probado también que ninguna de estas causas iniciadas por el demandado reconvencional, finalizó con sentencia condenatoria.

SEPTUAGÉSIMO: Que al respecto, los demandantes reconvencionales sostienen en la exposición de los fundamentos de derecho, que el actuar del demandado reconvencional ha sido doloso, y se limitan a citar la definición del dolo contenida en el artículo 44 del Código Civil, sin explicar por qué la conducta del señor López Cid sería dolosa, lo que era trascendental teniendo en cuenta que el solo hecho de interponer varias acciones, y que éstas no prosperaran, no demuestra que haya existido una intención de dañar que permita configurar un abuso del derecho.

SEPTUAGÉSIMO PRIMERO: Que, por otra parte, la prueba documental rendida por los demandantes reconvencionales, en apoyo de su acción indemnizatoria, consistente precisamente en los expedientes de los juicios iniciados por don Patricio López Cid, tampoco proporciona antecedentes en dicho sentido.

En efecto, con fecha 12 de mayo de 2006, el demandado reconvencional presentó una querella por el delito de injurias graves en contra de doña Marcia Millas Ovalle, que dio origen a la causa RIT 2922-2006 del 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

Esta querella se sustentó en que con fecha 14 de diciembre de 2005, doña Marcia Millas Ovalle envió un correo electrónico a diversas personas del círculo familiar, en el que habría emitido comentarios injuriosos respecto de don Patricio López Cid.

SEPTUAGÉSIMO SEGUNDO: Que en la sentencia dictada en dicho juicio, de fecha 5 de septiembre de 2006, la juez de garantía tuvo por acreditada la existencia de las expresiones que fueron estimadas de injuriosas por el querellante (la existencia del correo



electrónico). Sin embargo, resolvió absolver a la querellada y condenar en costas al querellante, toda vez que no se probó el ánimo de injuriar.

SEPTUAGÉSIMO TERCERO: Que, por otra parte, con fecha 14 de abril de 2008, don Patricio López Cid se querelló por los delitos de injurias graves y calumnias en contra de don Ricardo Bittelman Saporta.

Esta querella tuvo como fundamento que el doctor Bittelman fue entrevistado, en un programa de televisión que abordaba las quejas de sus pacientes por los malos resultados en intervenciones quirúrgicas realizadas por él, ocasión en que responsabilizó al querellante por lo que estaba pasando, sosteniendo que éste lo estaba estafando y que había usado su base de datos para contactar pacientes con el objeto que le interpusieran querellas.

El juicio concluyó por resolución de fecha 21 de agosto de 2008, que declaró el abandono de la acción penal privada y el sobreseimiento definitivo del querellado.

SEPTUAGÉSIMO CUARTO: Que no obstante el resultado del proceso judicial, como se pudo apreciar en la audiencia de percepción de fojas 957, efectivamente el doctor Bittelman fue entrevistado en un programa de televisión, en el cual se refirió a don Patricio López, señalando que *“...nos dimos cuenta, en base a una auditoría, que este señor me estaba estafando... y una vez que lo desvinculamos, él prometió vengarse de mí...”*; añadió que: *“Lo que ocurrió es que una vez Patricio López se fue, dejó un desorden increíble en esta empresa, tuvimos que asesorarnos...”*; y también que: *“hay una gran cantidad de pacientes que fueron contactados por Patricio López Cid, quien ubicándolos a través de internet por las fichas mías, logró meterse a los datos y juntar estos casos, y pasárselos a una abogada para que me generara querellas”*.

Así, nuevamente puede apreciarse que se trata en definitiva del conflicto familiar y laboral, que fue judicializado por ambas partes, y que incluso llegó a conocerse en los medios de comunicación.



SEPTUAGÉSIMO QUINTO: Que por último –dejando fuera el proceso penal sobre falso testimonio por involucrar a personas ajenas a este juicio–, se verifica también con la prueba rendida, que con fecha 10 de abril de 2014, don Patricio López Cid se querelló contra don Ricardo Bittelman Saporta y doña Marcia Millas Ovalle, por el delito de denuncia calumniosa, en base a los mismos antecedentes expuestos en la demanda principal y que ya fueron latamente tratados en esta sentencia.

El juicio referido terminó con el sobreseimiento definitivo de los querellados, por haberse considerado que el hecho denunciado no era constitutivo de delito.

Así las cosas, en este caso, al igual que en los anteriores, se refleja la relación conflictiva entre las partes, y especialmente la persistencia de cada una en mantener su posición. En la querella, don Patricio López Cid denuncia que los ahora demandantes reconconvencionales le imputaron delitos falsos, es decir, defiende su versión de los hechos y la rectitud con que se desempeñó mientras trabajaba en los centros médicos, frente a las acusaciones de su contraparte que asegura un mal manejo y una conducta carente de probidad, que incluso les llevó a levantar cargos por delitos de estafa, apropiación indebida, abuso de firma en blanco y uno de carácter informático.

SEPTUAGÉSIMO SEXTO: Que los actores reconconvencionales debían acreditar que la deducción de querellas por parte de don Patricio López Cid fue un abuso de su derecho a la acción, cometido con dolo, sobre lo cual, la prueba rendida no da luces.

De la revisión de las causas penales iniciadas por don Patricio López Cid, se observa que están enmarcadas en el conflicto familiar y laboral surgido a partir de su salida del negocio de centros médicos montado por don Ricardo Bittelman, en el que los involucrados, convencidos de estar en lo correcto, hicieron uso en igualdad de condiciones de su derecho de recurrir a los tribunales en busca de



tutela judicial efectiva, a fin de resguardar sus derechos, los que consideraron habían sido conculcados por la otra parte.

En este contexto, al tener en cuenta el panorama general de enfrentamiento familiar llevado al plano judicial, las acciones deducidas por el señor López Cid no se muestran como actos carentes de sentido y con la sola finalidad de dañar a su contraparte, sino como una conducta llevada a cabo para buscar justicia frente a los actos de los demandantes reconvencionales. De esta manera, cada parte buscó que un tercero imparcial (el juez) le diera la razón, aceptando su versión y posición en este conflicto.

SEPTUAGÉSIMO SÉPTIMO: Que, por último, los hechos en que el actor basó sus querellas eran verdaderos, a saber, el envío del correo electrónico por parte de doña Marcia Millas; la aparición en televisión del doctor Bittelman tildándolo de estafador; y el juicio penal seguido ante el 32° Juzgado del Crimen de Santiago iniciado por doña Marcia Millas en representación de las empresas, en que terminó siendo absuelto.

De otro lado, lo mismo sucedió en la causa Rol 82-2006 del 32° Juzgado del Crimen, pues en la sentencia definitiva, el juez determinó que el hecho considerado como delito por los querellantes, esto es, el cobro por parte de don Patricio López Cid de dos cheques dejados en blanco por el doctor Bittelman, había efectivamente sucedido, pero que no se logró acreditar un elemento del tipo penal. Y además, el juez opinó que el problema surgido no era uno de tipo penal, sino solo de orden civil, considerando que los querellantes debieron solicitar una rendición de cuentas.

SEPTUAGÉSIMO OCTAVO: Que, de lo que se viene exponiendo, habiendo ejercido las partes su derecho a la acción, hecho amparado por el ordenamiento jurídico, que por lo demás, es considerado como causal de justificación que permite excluir la ilicitud de una conducta que ha generado daño a otro, tocaba a los demandantes de una y otra acción fundamentar y probar los motivos por los cuales ese ejercicio fue una conducta dolosa que permitiera



calificarlo como abusivo, cuestión que no se logró acreditar por ninguno de ellos.

SEPTUAGÉSIMO NOVENO: Que, a modo de corolario, cabe puntualizar que aunque es inusual que producto de una relación como la que existió entre los litigantes, escale a tal punto de judicialización, ello puede deberse a que unos y otros creían encontrarse asistidos por la razón y la ley, lo que los motivó a ejercer las acciones que ejercieron, y que han tenido un nuevo capítulo en la acción sublite, de naturaleza indemnizatoria y comúnmente la última alternativa ante procesos penales previos.

En efecto, no es per se reprochable hacer uso de su derecho a la acción hacia la contraparte, y el interés en intentar propiciar su responsabilidad legal con el mayor rigor posible y por todas las vías que sean procedentes. Sin embargo, si ninguna de las acciones deducidas ha prosperado, es una señal para las partes en orden a que el conflicto no tiene la relevancia jurídica que ellos le asignan, y que la responsabilidad que imputan y pretenden hacer efectiva, no es tal, mas aun considerando que el término de la relación laboral –germen de todo el conflicto- aconteció a fines del año 2005.

OCTOGÉSIMO: Que el resto de antecedentes probatorios, alegaciones de las partes y/o defensas, en nada obstan al raciocinio hasta aquí vertido, por lo que resulta inoficioso extenderse en un mayor análisis.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 144, 160, 170, 179 N° 1, 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 211 del Código Penal; 44, 1698, 2314 y siguientes del Código Civil, se declara:

I. EN CUANTO A LAS TACHAS DE TESTIGOS:

1. Que se acogen las tachas deducidas por la parte demandada a fojas 601 y 610, y por la parte demandante a fojas 615.

2. Que se rechazan las tachas deducidas por la parte demandante a fojas 630 y 643.



II. EN CUANTO AL FONDO:

3. Que **se acoge la excepción de cosa juzgada** deducida a fojas 725, por aplicación del artículo 179 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la acción entablada a fojas 1.

4. Que **se rechaza la demanda reconvencional** interpuesta en el otrosí de fojas 235, por no configurarse el hecho ilícito imputado.

5. Que cada parte asumirá sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívense los autos en su oportunidad.

ROL N° C-24521-2015

Pronunciada por doña **Daniela Royer Faúndez**, Juez Titular.

Autoriza don **Iván Covarrubias Pinochet**, Secretario Subrogante.



En **Santiago**, a **trece** de **Septiembre** de **dos mil dieciocho** , se notificó por el estado diario, la resolución precedente.

